

LAS LUCHAS POR EL SOCIALISMO EN AMÉRICA LATINA

Alberto Prieto Rozos

CONTEXTO
LATINOAMERICANO

DIÁLOGOS
EN CONTEXTO

ocean
sur


Las luchas por el socialismo en América Latina

ALBERTO PRIETO ROZOS (1939). Doctor en Ciencias, presidente de las cátedras Benito Juárez (México) y Manuel Galich (Guatemala) de la Universidad de La Habana, miembro de número de la Academia de la Historia de la República de Cuba, presidente del Tribunal Permanente Nacional de Ciencias Políticas y Director del Programa de Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana. Ha brindado conferencias y cursos en países como Alemania, Nicaragua, México, Estados Unidos, Francia, Ecuador y Guatemala.

Por su excelente desempeño en la Educación Superior ha recibido las condecoraciones Por la Educación Cubana, Rafael María de Mendive y José Tey. El Consejo de Estado le ha otorgado las órdenes Frank País —por su ejemplar actividad docente— y Carlos J. Finlay —máximo reconocimiento que se otorga en el campo de la Investigación Científica—. En Francia, recibió la medalla conmemorativa Aniversario de la Fundación de La Sorbona (París IV). En la Universidad de La Habana le fue otorgada la medalla 280 Aniversario de su fundación.

Es autor, entre otros muchos títulos, de *Las civilizaciones precolumbinas y sus conquistas*; *El Movimiento de Liberación Contemporáneo en América Latina*; *Centroamérica en Revolución*. Ha publicado con la Editorial Ocean Sur los títulos: *Las guerrillas contemporáneas en América Latina*; *Procesos revolucionarios en América Latina*; *Visión íntegra de América* (tres tomos) y *Fidel Castro y la Revolución*.

Las luchas por el socialismo en América Latina

Alberto Prieto Rozos



una editorial latinoamericana

Derechos © 2020 Alberto Prieto Rozos
Derechos © 2020 Ocean Press y Ocean Sur

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, conservada en un sistema reproductor o transmitirse en cualquier forma o por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o cualquier otro, sin previa autorización del editor.

ISBN: 978-1-922501-04-2

Primera edición 2020

PUBLICADO POR OCEAN SUR
OCEAN SUR ES UN PROYECTO DE OCEAN PRESS

E-mail: info@oceansur.com

DISTRIBUIDORES DE OCEAN SUR

América Latina: Ocean Sur • E-mail: info@oceansur.com

Cuba: Prensa Latina • E-mail: plcomercial@cl.prensa-latina.cu

EE.UU., Canadá y Europa: Seven Stories Press

- 140 Watts Street, New York, NY 10013, Estados Unidos • Tel: 1-212-226-8760
- E-mail: sevenstories@sevenstories.com

ocean
sur



una editorial
latinoamericana

Índice

Introducción	1
Empeños iniciales hacia el socialismo	5
Influencia de la Revolución Bolchevique	15
Consecuencias del VI Congreso de la Tercera Internacional	21
Crisis en el Caribe colonial	31
Los Frentes Populares	33
Rebeldía y Revolución: Fidel Castro	53
Repercusiones de la Revolución Cubana en América Latina	59
Segunda Declaración de La Habana y su trascendencia	62
Vía electoral y economía mixta hacia el Socialismo: Allende	72
Renacer guerrillero	75
Transformaciones socialistas en Granada: Maurice Bishop	87

La victoria sandinista y su influjo	92
Foro de Sao Paulo y Socialismo del siglo XXI	105
Hugo Chávez en Venezuela	109
Brasil y el Partido de los Trabajadores: Lula y Dilma	119
El Frente Amplio en Uruguay	120
Evo Morales y el Movimiento al Socialismo en Bolivia	122
Las presidencias de la Bachelet y Piñera en Chile	126
Reversión de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador	129
El nuevo sandinismo en Nicaragua	133
De los dos gobiernos del FMLN al de Nayib Bukele: El Salvador	137
Pugnas entre la guerra y la paz en Colombia	141
Extraordinaria victoria electoral de López Obrador con MORENA en México	147
Epílogo	149
Bibliografía	152

Introducción

A partir de la concepción de que cualquier sistema social debe ser sustituido por otro superior, el socialismo como régimen desplaza al capitalismo —cuyo principal desvelo es la burguesía— y centra su atención en el proletariado. Pero a diferencia de Europa, en nuestro subcontinente no tuvo lugar una verdadera revolución industrial, que multiplicase el número de asalariados urbanos. Por ello el mayor destacamento de la clase obrera surgió en los campos, debido a la transformación de los esclavos —en las plantaciones agroexportadoras— en fuerza laboral que trabajaba por un jornal. También hubo lugares donde las autosuficientes haciendas de los terratenientes feudales —religiosos o laicos—, fueron convertidas en empresas mercantiles de capitalistas agrarios. Entonces, muchos expoliados campesinos —comuneros o siervos indígenas— gradualmente se convirtieron en peones, que percibían algún salario. A ellos se añadió la fuerza de trabajo que laboraba en la construcción de vías férreas, y en la explotación de minas o instalaciones portuarias. Dichas propiedades pertenecían a los incipientes imperialistas o a la burguesía criolla que de ellos dependía. Más tarde, las filas de los trabajadores se engrosaron por el incremento de las manufacturas e industrias —como la textil y víveres o licores—, auspiciadas por el capital extranjero o la emergente burguesía

nacional. La competencia de esos innovadores centros fabriles arruinaba a las artesanías, donde miles de personas se habían ganado el sustento. Quienes en ellas trabajaban se estructuraron en asociaciones mutualistas —cajas de ayuda mutua y fondos para accidentes—, que atrajeron a ciertos sectores obreros. Luego los asalariados transitaron hacia gremios de nuevo tipo o sindicatos, con el propósito de dirigir la lucha contra los patronos mediante huelgas y protestas. También surgieron otros grupos que preferenciaron la acción, cuasi terrorista, orientada a lograr la desaparición inmediata del mundo burgués, aunque sin saber a ciencia cierta cuál sociedad lo sustituiría: eran los anarquistas. Ambas corrientes se fusionaron para crear el anarcosindicalismo, tendencia predominante en el movimiento obrero latinoamericano hasta la Primera Guerra Mundial. Sus impulsores rechazaban la incorporación a partidos o tomar parte en la lucha política, porque la consideraban un engendro burgués. Por ello solo confiaban en las acciones orientadas a desembocar en una huelga general proletaria, gracias a la cual se terminaría con la explotación de unos seres humanos por otros. Después —imaginaban— todos serían felices. Mientras llegaba el momento de dar el puntillazo final al capitalismo, los anarcosindicalistas estructuraron Federaciones Obreras Regionales. Estas denominaciones estaban destinadas a evitar el término «nacional», pues decían que ese era otro invento de la burguesía. «Los proletarios no tienen nacionalidad ni Patria», aseveraban. Esa afirmación facilitaba la lucha de los gobiernos contra estos movimientos de los asalariados; los acusaban de ser antinacionales y de estar controlados por extranjeros, que pedían la abolición de toda propiedad privada y del Estado, aunque la mayoría no hablara aún de socialismo. En América

Latina, por esos tiempos, pocos imaginaban las características que dicho régimen podría tener, y nadie tenía ideas acertadas de cómo llegar al poder, para luego enrumbarse hacia la nueva sociedad. Hasta que triunfó la Revolución Socialista de Octubre en Rusia. Entonces todo cambió.

Empeños iniciales hacia el socialismo

En Latinoamérica, el primer empeño en lanzarse a la toma del poder vinculado con las ideas socialistas, tuvo lugar en Colombia, a mediados del siglo XIX. Allí, los afectados por la implementación de medidas liberales rompieron sus vínculos con la burguesía y exigieron el proteccionismo. En la llamada República Artesana, la vanguardia de los asalariados en dichos talleres abrazó el programa del socialismo utópico concebido por Charles Fourier y Saint Simon. Después comenzaron los choques callejeros que pronto se transformaron en lucha armada. Pero el movimiento no incluyó en sus reivindicaciones los reclamos de otras clases o sectores y grupos relegados, por lo que se vio circunscrito a Bogotá, donde adoptó tácticas bélicas inmovilistas y fue derrotado.

Otra fue la índole de las luchas en México, donde tras sus exitosas guerras por la Reforma y contra el Segundo Imperio, el presidente Benito Juárez escribió:

A cada cual, según su capacidad y a cada capacidad según sus obras y su educación. Así no habrá clases privilegiadas ni preferencias injustas [...]. Socialismo es la tendencia natural a mejorar la condición o el libre desarrollo de las facultades físicas y morales.¹

¹ José A. Benítez: «La intransigencia y el radicalismo de Benito Juárez», *Granma*, p. 2, La Habana, 20 de agosto de 1982.

Luego, este gran revolucionario se alejó de los más estrictos criterios liberales y permitió que los artesanos fundaran el centro cultural Gran Familia Artística. Este, al cabo de unos meses, fue transformado en un moderno gremio sindical llamado Círculo Obrero, que impulsaba en beneficio de sus afiliados la educación y el mutualismo. También funcionaba mediante cajas de ahorro para socorrer a los accidentados o enfermos e incluso auxiliar a las familias desamparadas de los trabajadores incapacitados o muertos. Como buena parte del dinero recaudado permanecía estancado u ocioso, la directiva del Círculo decidió crear cooperativas. En dicho gremio se pensaba, que al poseer acciones o algo semejante, los trabajadores serían convertidos en propietarios que forjarían una sociedad nueva, de abundancia y justa, bajo la forma de propiedad colectiva. Esas unidades económicas se vincularían entre sí en cada municipio, que después se entrelazarían por medio de una confederación de ayuntamientos. Así —creían— el cooperativismo se desarrollaría hasta el colectivismo, para ulteriormente llegar al comunismo.

El Círculo Obrero desde 1871, contó con *El Socialista* como su órgano de difusión. Dicho periódico publicó el *Manifiesto Comunista* de Carlos Marx y Federico Engels, así como los estatutos de la Asociación Internacional de Trabajadores creada por Marx. A esta, conocida también como Primera Internacional, la mencionada organización sindical mexicana se afilió en 1872. Luego de la muerte de Juárez, la presidencia de la república fue asumida por Sebastián Lerdo de Tejada, quien también simpatizaba con el Círculo Obrero, al que otorgara un donativo mensual. Asimismo autorizó que dicha asociación proletaria celebrara en marzo de 1876, su primer congreso general, donde se aprobó la conformación del Partido Socialista.

Entre los representantes de países latinoamericanos asistentes a esa gran asamblea de asalariados descollaba el cubano José Martí, quien había comenzado a escribir en las páginas de *El Socialista*. Pero el democrático régimen constitucionalista mexicano fue eliminado por el golpe de Estado del general Porfirio Díaz, quien instituyó una tiranía positivista.

El porfiriato, para eternizarse, decidió satisfacer las insaciables apetencias de sus auspiciadores, por lo que tergiversó las leyes de la Reforma en beneficio exclusivo de la cúspide burguesa. Las ordenanzas porfiristas de 1883, que alteraban las de 1875, permitieron organizar en México «compañías deslindadoras», cuyo objetivo era delimitar las tierras baldías, eclesiásticas y antiguos realengos, con el propósito de ponerlas a producir sobre todo para la exportación. En pago por sus gastos en esas tareas, dichas empresas recibían la tercera parte de los dominios medidos. Y una vez que se acabaron los suelos estatales y de la Iglesia, las referidas entidades anónimas se lanzaron sobre los campos de las comunidades agrícolas indígenas.

En resumen, a causa de ese proceso de despojo —que arrebató incluso a muchos pequeños campesinos sus parcelas—, en 1889, las «compañías deslindadoras» habían recibido gratis 2 700 000 hectáreas, y comprado a precios ínfimos 14 800 000 más. También muchos ricos propietarios agrandaron sus ranchos y haciendas, que bajo los preceptos del positivismo especializaron sus producciones en uno u otro cultivo para el mercado. De esa manera se transformó la agricultura, que abandonó la autosuficiencia feudal para adquirir un carácter comercial o de empresa, lo cual provocó el auge de la economía mercantil. Por eso las formas de las nuevas haciendas «científicas» se aseme-

jaban cada vez más a las de las plantaciones, aunque entre sí hubiera gran diversidad.

Este novedoso capitalismo agrario porfirista variaba según los cultivos, las zonas y hasta por dueño. Sin embargo, el tránsito a un sistema completamente nuevo no podía operarse de golpe; no existían todas las condiciones para una súbita y masiva producción agraria con relaciones de producción capitalistas, pues los indígenas no estaban habituados al trabajo asalariado. Su cultura y tradiciones estaban acostumbradas a la economía natural, con técnicas arcaicas y un vínculo inquebrantable con los terratenientes, fuesen laicos o eclesiásticos.

La esencia del antiguo sistema estribaba en que la tierra se dividía entre estos propietarios y los expoliados campesinos comuneros, cuyo plustrabajo consistía en laborar los suelos de los explotadores. De esa manera los aborígenes trabajaban los campos, unos días para sí y otros para los terratenientes, pues todo se basaba en la prestación personal. Esto motivó que en las haciendas «científicas» las relaciones de producción burguesas no pudieran surgir de inmediato; el único sistema de economía posible era uno de transición, que reuniese los rasgos de la prestación personal y los del capitalismo. Por eso, paralelamente a la entrega de algún salario a sus peones, muchos hacendados continuaban recurriendo a la coerción extraeconómica — estado de dependencia, caución solidaria, castigos corporales, condenas a trabajos públicos — o a la amenaza de enviarlos a servir largo tiempo en el ejército. Pero también con el nuevo sistema la fuerza de trabajo logró mayor productividad, pues se le empleaba de manera especializada. Ello permitió que la parte de los indígenas no mantenida en los antiguos predios para continuar laborándolos, fuese enviada a la construcción de una extensa red ferrocarrilera. Esta se desarrollaba impetuosamente

bajo el porfiriato por el capital foráneo, con el objetivo de transportar hacia los puertos de embarque las crecientes producciones mineras y agropecuarias vendidas al extranjero.

En México, bajo el influjo de los preceptos positivistas —y sobre todo a partir de 1890—, se produjo el surgimiento de la burguesía nacional formada por intereses bancarios, industriales, agrícolas y comerciales, vinculados exclusivamente al mercado interno. La importancia de su aparición se comprende, al saber que entre 1886 y 1907, las inversiones de los mexicanos en las diversas ramas industriales superaron a las de los extranjeros. Ese innegable desarrollo acarreó, hacia 1910, la existencia de unos 200 mil obreros industriales, frente al medio millón de artesanos que sufría —cada vez con más fuerza— la concurrencia de las producciones originadas por la burguesía nacional.

José Martí abandonó México al instituirse el porfiriato y regresó a Cuba tras el Pacto del Zanjón, que puso fin a la Guerra de los Diez Años, comenzada en 1868. Pero al reiniciarse la contienda bélica en agosto del siguiente año mediante la llamada Guerra Chiquita, Martí fue deportado de la isla debido a sus actividades revolucionarias. En el exilio realizó una colosal tarea política para aglutinar a todos los independentistas en su Partido Revolucionario Cubano, que finalmente se conformó en 1892, con el apoyo sustancial de la clase obrera liderada por los tabaqueros exiliados. Casi paralelamente, en Cuba, la Junta Central de Artesanos del Círculo de Trabajadores convocó al Congreso Regional Obrero de la Isla. Este, a pesar del predominio anarcosindicalista entre sus afiliados, exigió la independencia de Cuba, por lo cual las autoridades colonialistas lo clausuraron. Al poco tiempo, en febrero de 1895, estalló la guerra preparada por Martí, quien a los tres meses murió en el combate de Dos Ríos.

La Revolución Mexicana se inició contra el porfiriato en 1910, nucleando el descontento de cientos de miles de empobrecidos artesanos y mal pagados obreros u otros asalariados, así como el de millones de campesinos sin tierra. El combate armado de estos se llevó a cabo de forma disgregada, hasta que en la Convención Militar de Aguascalientes —octubre de 1914— las fuerzas de Pancho Villa y Emiliano Zapata se unificaron. Al mes, ambos ejércitos entraron triunfantes en Ciudad de México, lo cual aterrorizó a la burguesía. Esta legalizó entonces a la sindicalista Casa del Obrero Mundial, cuyos dirigentes se unieron al movimiento constitucionalista burgués para luchar contra los ejércitos campesinos. Se organizaron así los «Batallones Rojos» formados por proletarios —cuya clase recibió algunas mejoras— y con esos efectivos el gobierno venció a villistas y zapatistas. A partir de ese momento las diferencias clasistas en el «constitucionalismo» se manifestaron con vigor, por lo que el gobierno dispuso la disolución de los «Batallones Rojos». Los efectivos obreros se tornaban peligrosos luego de la primera huelga general en la historia de México, el 31 de julio de 1916.

En 1891, el Caribe anglófono había sufrido un rudo golpe económico a causa de los intereses del *Sugar Trust* estadounidense. Dicho monopolio —muy influido por los productos de la sacarosa en Luisiana, por los cosecheros yanquis de remolacha y las refinerías de la Costa Este norteamericana—, estaba opuesto a que se comprara azúcar en las *West Indies* y a la anexión de Cuba, pues temía la competencia de esas producciones rivales. Por eso el referido *trust* presionó al gobierno en Washington para que cerrase el mercado estadounidense a las importaciones provenientes de las colonias caribeñas de Inglaterra. Entonces en esa región se multiplicó el desempleo,

lo que indujo a muchos a emigrar hacia Cuba, Santo Domingo y Nueva York. Esta tendencia se incrementó desde 1903, cuando Inglaterra eliminó el sistema de subsidios a sus producciones coloniales y comenzó a importar el azúcar del Caribe hispanoparlante. Así, en solo 20 años, 80 mil «west indiens» ingresaron en territorio estadounidense. Dicha «sangría» aumentó con la construcción del Canal de Panamá, y al terminarse este, a causa de la Primera Guerra Mundial, pues 15 mil caribeños anglófonos fueron llevados a combatir en las trincheras europeas, como parte del ejército inglés.

En ese contexto de pobreza y emigración, en Jamaica surgió un extraordinario dirigente popular llamado Marcus Garvey, apasionado admirador de la Revolución Haitiana. Tras aprender un oficio en la imprenta de su abuelo, marchó a *Port Mary*, centro del emporio bananero jamaicano que acababa de adquirir la estadounidense *United Fruit Company* —UFCO—. Más tarde se radicó en Kingston, donde se inició en la vida sindical y publicó el semanario *The Watchman*. En 1910, se lanzó a recorrer las plantaciones de los monopolios estadounidenses en el litoral caribeño de Centroamérica. Allí trabajó en las oficinas de la UFCO en Puerto Limón, a la vez que en el periódico local escribía contra la explotación de los inmigrantes negros de las *West Indies*. Al año, en la zona se desataron grandes huelgas proletarias, en las que Garvey participó con su activismo sindical. Por ello tuvo que abandonar Costa Rica y radicarse en la contigua Boca del Toro —Panamá—, donde se entremezcló en las plantaciones de la UFCO con los obreros de origen caribeño. Estos lo vincularon con sus congéneres, que trabajaban en la vecina construcción del canal interoceánico. El notable jamaicano encontró una situación semejante de penurias y miserias entre los «west indiens» que laboraban en las plantaciones nor-

teamericanas de la «Costa Atlántica» en Nicaragua, Guatemala y Belice.

De regreso a Jamaica, a mediados de 1914, Garvey fundó la Asociación Universal para la Superación del Negro –UNIA–, que emitió el folleto *La Raza Negra y sus Problemas*. Al frente de esta organización adquirió notoriedad cuando públicamente confrontó al moderado reformista negro W.E.B. Dubois, líder de la *National Association for the Advancement of Coloured People* –NAACP– estadounidense. En contraste, se vinculó con el escritor John Reed –autor de *México Insurgente* y de *Diez días que estremecieron al mundo*–, así como con otros defensores de la Revolución Bolchevique de 1917. En esa época Estados Unidos iniciaba su participación directa en la Primera Guerra Mundial, y por ello lo invitaron a Nueva York para inaugurar la Liga Antibelicista por la Libertad de los Afroamericanos. Allí se relacionó con la tendencia de izquierda del sindicato anarquista *Industrial Workers of the World*, y estableció una filial de su UNIA, que publicaba un periódico defensor del «nacionalismo negro». Dicho órgano difusor dio a conocer una conmovedora Declaración de Derechos de los Pueblos Negros del Mundo. En solo dos años, la UNIA llegó a contar en Estados Unidos con 30 subsidiarias y tres millones de afiliados, eclipsando a la NAACP como organización. Entonces Garvey se dedicó a captar a sus mejores simpatizantes, para formar una fuerza armada –con entrenamiento militar–, que liberase a los negros del mundo entero. Con dos barcos –*Shadyside* y *Kanawha*– estructuró la *Black Star Line*, susceptible de trasladar a sus hombres a cualquier parte, y a la vez establecer nexos con todos los «west indiens» del Caribe, con África y con los demás negros de América. Pero las autoridades estadounidenses captaron la trascendencia del proyecto. Arrestaron a Garvey con un pretexto

baladí, y lo mantuvieron encarcelado varios años. Hasta que en 1927, lo deportaron.

De nuevo en su Patria, Garvey acometió la forja de la *Jamaica Workingmen and Labourers Association*, primera central sindical de esta colonia insular. A la vez comenzó los preparativos para organizar un avanzado partido político, *The People's Political Party*, con un periódico, *The Blackman*. Este publicó la plataforma programática de dicha organización, la cual incluía reforma agraria, defensa de los trabajadores y medidas enrumadas hacia la emancipación nacional.

En el resto del Caribe, la intranquilidad social también se incrementó durante los años de la Primera Guerra Mundial, sobre todo en el lapso posterior a la Revolución Bolchevique en Rusia. En Granada, por ejemplo, los veteranos del gran conflicto bélico —buena parte de origen obrero—, empezaron a estructurar su propia organización. Encabezados por T.A. Marryshow, organizaron la *Grenada Workingmen's Association*, que propugnaba la idea de federarse con las demás islas del Caribe anglófono.

En Guyana la población había aumentado considerablemente en los últimos tiempos —con 240 mil hindúes—, y todo se alteraba. Eran también los tiempos en que los obreros empezaban a organizarse. Los portuarios, junto a los de aserraderos, de la *Demerara Railway* y los vinculados con el azúcar, realizaron algunas huelgas que desembocaron en el surgimiento de la *British Guiana Labour Union*. Dirigida por Nathaniel Critchlow, esta convocó a un congreso regional denominado *British Guiana and West Indies Labour Conference*, a la que asistieron delegados locales así como de Granada, Surinam y Trinidad. En esta isla, hacía poco se había constituido la *Trinidad Working Men's Association* encabezada por Arthur Andrew Cipriani —excapi-

tán del *British West Indian Colonial Regiment*—, quien se involucró también en política. En dicha condición llegó a ser electo al Consejo Legislativo local, en el cual defendió los intereses de los trabajadores.

En Martinica, muy influidos por el gran desarrollo del proletariado francés, los dirigentes obreros encabezados por Jules Monnerot se organizaron en la agrupación marxista Jean Jaurés. Esta se afilió a la Tercera Internacional y editó la importante publicación *Revue Martiniquaise*, con la cual se relacionó el revolucionario haitiano Jacques Roumain.

Influencia de la Revolución Bolchevique

La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias alteraron la correlación de fuerzas en América Latina y en el orbe. Pero el principal acontecimiento vinculado con dicha conflagración fue —a finales de 1917— la Gran Revolución Socialista de Octubre, en la antigua Rusia zarista. Dicho triunfo estremeció a la clase trabajadora en Latinoamérica y a su movimiento anarcosindicalista, así como a los pocos adeptos al socialismo, entre los cuales se encontraban sobre todo intelectuales, algunos recién conversos al abandonar el positivismo. Pronto muchos militantes de ambas tendencias manifestaron su solidaridad con los bolcheviques, fuese mediante publicaciones y folletos o mítines en los que se defendía a la «Rusia de Lenin», gobernada mediante una alianza de obreros y campesinos. Estas movilizaciones en apoyo a la impactante gesta en el país eurasiático, contribuían a la metamorfosis y desarrollo ideológico del proletariado latinoamericano. Se deslindaban los campos entre quienes insistían en permanecer en el bando anarcosindicalista o en el de los vinculados a la Segunda Internacional y los que derivaban aún más a la izquierda. Estos últimos asumían posiciones notoriamente clasistas y contrarias al imperia-lismo, pues favorecían la construcción de una sociedad nueva en la cual todo se estatizaría mediante gobiernos que impusieran la dictadura del proletariado.

La lucha política e ideológica en el seno del movimiento de los trabajadores se fundió con la de los intelectuales. Deseaban estructurar fuerzas partidistas basadas en las concepciones del marxismo-leninismo. Para ellos, esta era la única vía de eliminar la explotación de unos seres humanos por otros y erigir para todos un futuro mejor. Por eso solicitaron en Moscú su ingreso a la Internacional Comunista, luego de cumplir los requisitos de esa organización que entonces fungía como el Partido de los revolucionarios contra el mundo burgués. Su experimentada contraparte era el Partido bolchevique, que había engendrado ya el imponente poder soviético.

En Latinoamérica, en esta nueva corriente sobresalían: el dirigente obrero chileno Luis Emilio Recabarren, quien aportó su experiencia partidista previa; el brasileño Astrojildo Pereira, quien metamorfoseó sus conocimientos sindicalistas; el intelectual José Carlos Mariátegui, quien recogió el «indigenismo» elaborado por su compatriota Manuel González Prada y lo condujo a nuevas alturas en sus famosos *Siete ensayos de la realidad peruana*, y el líder estudiantil cubano Julio Antonio Mella.

En Brasil, las filas de la clase obrera se habían multiplicado debido al gran impulso experimentado en la industria nacional como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. En las grandes urbes, las pésimas condiciones de vida de los asalariados y el ejemplo de la triunfante Revolución Rusa, impulsaron a los proletarios hacia amplios movimientos huelguísticos. En Sao Paulo por ejemplo, en 1917, tuvo lugar un paro de 50 mil personas, que solo terminó debido a las promesas de aumentos de sueldos, reglamentación del trabajo femenino e infantil, reducción de la jornada laboral, y liberación de los manifestantes presos. Ese éxito animó a los anarcosindicalistas de izquierda a

desarrollar una acción armada que derrumbase al Estado burgués. Para ello, en noviembre de 1918, constituyeron en Río de Janeiro un Comité Revolucionario que dirigiese la insurrección. Aunque los principales organizadores fueron arrestados antes del inicio de la rebelión, esta se llevó a cabo; los trabajadores asaltaron depósitos de armas y cuarteles de policía, levantaron barricadas en el distrito obrero de San Cristóbal con el lema: «La lucha revolucionaria de la Rusia de Lenin se extiende al continente latinoamericano». A la vez, los asalariados en Niteroi, Petrópolis y en la propia capital paralizaron sus labores en solidaridad. Pero la insurrección fue aplastada, los sindicatos prohibidos, y sus dirigentes encarcelados. Entre ellos descollaban Astrojildo Pereira, Agripino Zagare, Álvaro Palmeira. A pesar de este revés, en junio de 1919, nuevas huelgas estallaron en Niteroi, Porto Alegre, Recife, Sao Paulo y Santos. Mientras, en Río de Janeiro un grupo de obreros e intelectuales radicalizados dirigidos por Antonio Canelas, organizaron el Partido Comunista.

A principios de la década del veinte, la crisis de la República *Velha* (vieja) o del «café con leche» — como se le llamaba —, no se debía únicamente a la intranquilidad de los proletarios. Los representantes de la burguesía nacional y de la pequeña burguesía también manifestaban su descontento por las arbitrariedades y corrupción existentes en el régimen. Esto se reflejó en un fallido intento de insurrección acometido en Copacabana por jóvenes oficiales — predominaban los tenientes — el 5 de julio de 1922. A los dos años, tras una gesta similar en Sao Paulo, los rebeldes emitieron un «Manifiesto Revolucionario» que exigía un gobierno provisional, convocatoria a una Constituyente, elecciones mediante el voto secreto, cese de las reelecciones presidenciales. La ciudad estuvo en manos de los seis mil

alzados tres semanas, sin que los políticamente moderados jefes insurrectos aceptaran en sus filas a los obreros, deseosos de luchar contra la república oligárquica. «Es una cuestión entre militares», decían. Así, cuando un ejército cinco veces más grande y con tanques los empezó a rodear, la tropa rebelde tuvo que retirarse al Paraná, donde pudo empezar una guerra de posiciones gracias al refuerzo de los destacamentos provenientes de Río Grande do Sul, a las órdenes del capitán Luiz Carlos Prestes. Al cabo de siete meses este joven propuso cambiar de táctica y realizar una campaña móvil, con el propósito de sublevar a los habitantes de los secos campos del nordeste o *sertão* dominado por las temidas bandas cangaceiras de los llamados «coroneles», como era la denominación política de los grandes hacendados. Pero los tenentistas carecían de un programa de reivindicaciones sociales que atrajera a los campesinos; cuando más, a su paso quemaban los odiados libros de deudas y liberaban a los presos políticos. La legendaria e invicta Columna Prestes recorrió por encima de 26 mil kilómetros en 13 estados brasileños, sin lograr adeptos a su vacío «Manifiesto Revolucionario». Hasta que en febrero de 1927, los supervivientes decidieron refugiarse en Bolivia. Hacia allí se encaminó el ya dirigente comunista Astrojildo Pereira —anarcobolchevique, le llamaban—, quien deseaba politizar a los heroicos «columnistas». Pero solo Prestes abrazó el marxismo-leninismo, lo cual provocó en mayo de 1930, la ruptura entre él y sus antiguos camaradas de armas.

En Cuba, Julio Antonio Mella creó la Federación Estudiantil con el propósito de implementar la Reforma Universitaria. Pero comprendió que más importante era revolucionar la neocolonial República liberal instituida, luego de cuatro años de ocupación por el ejército de Estados Unidos (1898-1902). Entonces

el carismático joven se relacionó con veteranos del Partido Revolucionario Cubano —fundado por José Martí— para forjar en 1925, el Partido Comunista. Al año, la tiranía de Gerardo Machado lo llevó a exiliarse en México, y de allí viajó al Congreso Antiimperialista celebrado en Bruselas. Este cónclave hizo suyas las tesis expuestas por Lenin en el II Congreso de la Tercera Internacional, las cuales integraban un admirable esquema político; brindaba a los movimientos revolucionarios la posibilidad de enfocar con sagacidad sus relaciones con las distintas fuerzas progresistas de cada país. Mella propugnó entonces la formación de un frente con un programa democrático de proyección nacional liberadora. Este debería agrupar a todas las fuerzas y tendencias revolucionarias, progresistas y antidictatoriales, como única opción para alcanzar la emancipación y promover las condiciones hacia el socialismo. Deseaba que en dicho movimiento los diversos componentes preservaran su identidad, y que el Partido Comunista no exigiera como condición previa la hegemonía para el proletariado; en su opinión, dicha fuerza social debía conquistar en la lucha su condición de vanguardia. Con esos criterios Mella acometió los trabajos preparatorios para organizar una expedición armada que liberase a Cuba de la tiranía. En esos trajines, de nuevo en México, fue hasta Veracruz con el propósito de indagar sobre la posible navegación hacia las costas cubanas. Mella también participaba de manera activa en el «Comité manos fuera de Nicaragua», el cual apoyaba intensamente la lucha de Augusto César Sandino contra el ejército de ocupación de Estados Unidos en ese país. Pero Sandino y Mella no pudieron reunirse; el extraordinario joven cubano cayó asesinado en las calles de Ciudad de México, el 10 de enero de 1929. Sus últimas palabras fueron: «Muerdo por la revolución».

Augusto César Sandino regresó a Nicaragua en junio de 1926, al tener noticias de un movimiento de rebeldía constitucionalista contra un golpe de Estado conservador en esa república. Pretendía formar una vanguardia que lo respaldara en su enfrentamiento armado contra el indeseado régimen impuesto. Así, dentro del constitucionalismo nicaragüense surgieron dos tendencias: la de los liberales, que deseaban regresar al poder para enriquecerse, y la de los demócratas y revolucionarios, deseosos de transformar la sociedad. Esta última corriente, encabezada por Sandino, la integraban minifundistas, campesinos expropiados durante la previa ocupación del país por Estados Unidos (1912-1925), trabajadores de las plantaciones de banano y de los aserríos del litoral caribeño, así como obreros de las minas, que representaban el núcleo más coherente y concientizado del incipiente proletariado. Pero en diciembre de ese mismo año, al ver en peligro al gobierno conservador golpista, Estados Unidos invadió Nicaragua para mediar entre los contendientes. Sin embargo, no pudieron desarmar a las fuerzas de Sandino, quien denunció el pacto firmado por liberales y conservadores con los norteamericanos. Entonces organizó su Ejército Defensor de la Soberanía Nacional de Nicaragua (EDSN), primera fuerza armada surgida en América Latina compuesta por obreros y campesinos, con su propia y autónoma dirección. Sandino unificó sus acciones con el Partido de los Trabajadores y el Laborista —al cual se afiliaba la pequeña burguesía—, porque «se oponían al intervencionismo y a cuanto menoscabara la soberanía del país». En ese contexto, el Partido Comunista de Centroamérica envió a Farabundo Martí para combatir en el EDSN, quien tenía experiencia militar por haber peleado en los Batallones Rojos durante la Revolución Mexicana. En Nicaragua, el revolucionario salvadoreño alcanzó el grado de coronel y se convirtió en el secretario personal de Sandino.

Consecuencias del VI Congreso de la Tercera Internacional

En julio de 1929, Sandino y Farabundo Martí —en compañía de otros miembros del Estado Mayor insurrecto—, se desplazaron hasta México con el objetivo de mejorar el apoyo que el «Comité manos fuera de Nicaragua» le brindaba a su lucha. Pero durante su estancia en la república mexicana, entre los dos hombres surgieron graves diferencias políticas. Como dirigente comunista, el disciplinado Farabundo debía someterse al brusco giro realizado por el VI Congreso de la Tercera Internacional en 1928. Sus nuevas directrices orientaban desarrollar cualquier lucha, según la táctica de «clase contra clase» y a la vez «bolchevizar los partidos», para tomar el poder y constituir «soviets de obreros, campesinos y soldados». Dicha sectaria concepción descartaba cualquier otra fuerza política, lo cual no era aceptable para Sandino.

En El Salvador, la gran crisis mundial del capitalismo iniciada en octubre de 1929, paralizó la economía del pequeño país centroamericano. En ese contexto se celebraron las elecciones presidenciales de 1931, ganadas por el candidato del Partido Laborista, que esgrimía un avanzado programa reformista y legalizó al Partido Comunista. Pero esta organización política rechazó cualquier entendimiento con el nuevo gobierno, lo cual facilitó que las fuerzas armadas le depusieran de su cargo a finales de ese mismo año. Entonces los comunistas se orienta-

ron hacia la insurrección, que empezó el 22 de enero de 1932, muy fuerte sobre todo en Occidente. En dicha región, a lo largo de varios días se crearon «soviets» —de obreros y campesinos— en distintos poblados, lo cual empavoreció a la pequeña burguesía —fuese urbana o rural—, y a no pocos campesinos, incluso pobres. Parecía transitarse hacia la revolución socialista de forma inmediata, aunque el proletariado salvadoreño fuese abrumadoramente minoritario. Desvinculados de cualquier otra fuerza, los rebeldes fueron aniquilados por el ejército y la aviación, que masacraron a más de 30 mil personas en una semana. Poco antes de ser fusilado, el 1.º de febrero, Farabundo Martí expresó: «En estos momentos que estoy a dos pasos de la muerte, quiero declarar categóricamente, que creo en Sandino».

En Nicaragua, la crisis económica mundial ayudó a Sandino a revitalizar la lucha armada. Hacia noviembre de 1930, los efectivos revolucionarios —con sus banderas rojas y negras al frente— avanzaron sobre el departamento de León, y a mediados del año siguiente solo la región capitalina de Managua estaba fuera de la acción directa de los contingentes insurrectos. En julio derribaron un avión de los invasores que los bombardeaba y en diciembre aniquilaron todo un destacamento estadounidense, lo cual sacudió la opinión pública de ese país. Frente a esa derrota, el secretario de Estado norteamericano se vio obligado a anunciar que las tropas intervencionistas serían retiradas antes de que finalizara el año 1932. Entonces Sandino declaró: «Nuestro Ejército se prepara a tomar las riendas de nuestro poder nacional, para entonces proceder a la organización de grandes cooperativas de obreros y campesinos nicaragüenses, quienes explotarán nuestras propias riquezas en provecho de la familia nicaragüense en general». Pero Sandino

aceptó que se realizaran elecciones generales con figuras poco mancilladas, y que se estructurase una Guardia Nacional —comandada por Anastasio Somoza— sustituta de los soldados estadounidenses de ocupación. Luego esas autoridades conciliatorias instituidas enviaron una «misión de paz», que acordó con el jefe insurrecto un convenio pacificador: se produciría el desarme total del Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, a cambio de cumplir sus cuatro condiciones mínimas para el cese de la lucha. Y Sandino desmovilizó su EDSN, sin organizar movimiento político alguno para sustituirlo. Ese error facilitó su vil asesinato y el establecimiento del somocismo.

Cuba sufrió la mayor secuela de la crisis de 1929-1933 en América Latina. A medida que sus consecuencias avanzaban, el Partido Comunista se esforzaba por organizar a las masas explotadas y llevarlas a la lucha. Paralelamente, Antonio Guiteras, dirigente revolucionario partidario de tomar el poder mediante la lucha armada, proyectó asaltar el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Pero descubierta la conspiración, los jóvenes intentaron alzarse en agosto del propio año y fueron encarcelados. En diciembre de 1932, bajo la dirección del Partido Comunista, se constituyó el Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera. Este aglutinó al mayor contingente proletario de la república, y con esa fuerza estructurada desató un importante movimiento huelguístico al comenzar la zafra de 1933. Su éxito permitió que al finalizar dicha cosecha, el Partido Comunista llamara a la revolución bajo la hegemonía del proletariado, mediante el surgimiento de un «gobierno soviético de obreros, campesinos y soldados».

En esos momentos Guiteras, ya fuera de prisión, se encontraba en conexión con el Directorio Estudiantil Universitario (DEU), que nucleaba a la porción más radical y revolucionaria

de la pequeña burguesía urbana. Entonces el audaz joven organizó grupos de acción en El Caney, Santiago de Cuba, Holguín, Victoria de las Tunas, Bayamo, Manzanillo, y otras ciudades y llegó a tener éxito en la toma de San Luis, donde el pueblo se sumó a sus empeños. Pero en general, el alzamiento del 29 de abril de 1933, fracasó. Fue en esas circunstancias que los trabajadores de los ómnibus urbanos tomaron la iniciativa en la lucha antimachadista, al declararse en huelga el 5 de julio. A los 12 días cerró el comercio de La Habana, Santiago de Cuba y demás ciudades; los comerciantes, unidos a grupos industriales, efectuaron una concentración en la capital para esgrimir un pedido de amnistía fiscal junto con otras reivindicaciones. El 19 de julio, los maestros se manifestaron en toda la república contra la rebaja de sueldos y el atraso en sus pagos. Siguieron protestas de empleados públicos y huelgas locales, así como demostraciones de obreros, estudiantes y hasta de veteranos de la Guerra de Independencia. En ese contexto, la huelga política general de todo el pueblo, encabezada por la clase obrera bajo la conducción del luchador comunista Rubén Martínez Villena, paralizó al país a partir del domingo 6 de agosto de 1933. Al día siguiente tuvo lugar la más grande masacre del machadato. Las muchedumbres se habían adueñado de las calles de La Habana y para disolverlas, la policía asesinó a 18 personas y ocasionó 100 heridos. Mientras, en Oriente, Guiteras preparaba el asalto al cuartel de Bayamo, como inicio de un proceso insurreccional. El día 11, algunos batallones del ejército se rebelaron para distanciarse del presidente, cuyo régimen se desmoronaba; el 12 de agosto de 1933, Gerardo Machado renunció y huyó al extranjero. Las masas se lanzaron entonces por toda la Isla a hacer justicia por su cuenta. Tres días duró la impresionante e incontrolable situación.

El derrocamiento de la tiranía obligó a la nueva jefatura militar a destituir mandos, rebajar de servicio, retirar o expulsar e incluso detener y enjuiciar a decenas de oficiales, notorios por sus faenas criminales durante la dictadura machadista. Pero dicha depuración quebrantó la disciplina y autoridad antes existentes en las Fuerzas Armadas; a partir de ese momento afloraron múltiples contradicciones entre la oficialidad y la tropa acaudillada por los sargentos. Entonces sobrevino un período de dispersión de las fuerzas más reaccionarias, y se produjo un dominio de la escena pública por parte de las clases populares. El efímero Gobierno Provisional, hechura grotesca de los imperialistas, era la estampa absoluta del desprestigio. En esas circunstancias, el Directorio Estudiantil Universitario representaba el movimiento político susceptible de nuclear a los sectores de la población, ajenos a la oligarquía y al Partido Comunista. A la vez, en la dirigencia del DEU se producía una evolución hacia posiciones de izquierda, con su «Programa Estudiantil» de carácter antiimperialista y democrático, aunque burgués.

La insubordinación de los alistados, el 4 de septiembre de 1933, fue una expresión del movimiento de masas, que profundizaba su influjo y se materializaba en las filas del Ejército y de la Marina de Guerra. Dicha acción se convirtió en un acto revolucionario, al abrazar el programa del Directorio Estudiantil Universitario. El inopinado encuentro de ambas fuerzas sociales, dio vida a un gobierno revolucionario pequeño burgués. Se quedó así aislado el Partido Comunista, que esgrimía la consigna de «Soviets de obreros, campesinos y soldados». Se estableció entonces el gobierno colegiado de la Pentarquía, que a pesar de sus inconsecuencias, se instauró en contra de la voluntad del imperialismo y de la oligarquía. Pero su heterogeneidad, las amenazas de intervención estadounidense —cuya

escuadra rodeó la isla—, las conspiraciones de la desplazada oficialidad, y las vacilaciones o temores de algunos pentarcas, llevaron al gobierno colegiado a su final. Solo Ramón Grau San Martín se dispuso a jugarse el todo por el todo, y aceptó el 1ro. de septiembre, la proposición del Directorio Estudiantil Universitario de ocupar la presidencia.

El nuevo gobierno representó un escalón más elevado del avance revolucionario pequeño burgués, cuya posición más espinosa y comprometedora era la del secretario de Gobernación, Guerra y Marina, Antonio Guiteras. El primer acto gubernamental fue trascendente: repudio a los preceptos de la Enmienda Platt, como muestra de la voluntad antiimperialista de la nación cubana. Pero el ala derechista de la pequeña burguesía existía; representaba el capitulacionismo, así como la entrega a la oligarquía y al imperialismo. La dirigía el sargento mayor Fulgencio Batista, quien había ganado el liderazgo del movimiento militar del 4 de septiembre. Luego Batista —ya coronel— alió al ejército con los pequeños burgueses de la organización política ABC, que en razón de malversaciones y negocios sucios cambiaron de clase, y se metamorfosearon en parte del bloque encabezado por la burguesía dependiente del imperialismo.

En la puja por el poder, las fuerzas se polarizaron alrededor de las dos tendencias extremas, capitaneadas por Batista y Guiteras; Grau quedó en el medio —a veces equidistante—, aunque en la mayoría de las oportunidades se dejó arrastrar por la izquierda. De este modo se emitieron los decretos más avanzados y resueltos del gobierno: leyes sobre el trabajo —jornada laboral de ocho horas, retiros y seguros por accidentes—; contra la usura, así como acerca de la rebaja de las tarifas del fluido eléctrico. También se aprobó la Reforma Universitaria, que

daba plena autonomía al centro de altos estudios. Después se extendieron las funciones y el carácter constitucional de los Tribunales de Sanciones, para propender a la expropiación de los bienes malversados por los machadistas. Por último, el 14 de enero, por orden de Guiteras se estableció la gestión gubernamental —o intervención— de la Compañía Cubana de Electricidad, subsidiaria del monopolio norteamericano *Electric Bond and Share Company*. Sin embargo el Secretario de Gobernación, que tenía plena conciencia de la necesidad de constituir una fuerza armada revolucionaria y confiable —para quienes perseguían objetivos nacional-liberadores— no tuvo tiempo para alcanzar sus propósitos. El 15 de enero de 1934, Batista conminó a Grau para que dimitiera, y la presidencia fue asumida por un moderado timorato. ¡Se había producido un golpe de Estado contrarrevolucionario *sui generis*! Entonces Antonio Guiteras se dedicó a construir su propia organización revolucionaria, que nació en octubre de 1934, bajo el nombre de Joven Cuba. En su plataforma propugnaba: «al Estado socialista nos acercaremos por sucesivas etapas preparatorias». El exsecretario de Gobernación, Guerra y Marina, mantenía sus concepciones insurreccionales, las cuales pensaba llevar a cabo en las ciudades, vinculadas con el estallido de movimientos huelguísticos de masa. Solo planeaba replegarse al campo en caso de un revés urbano.

Al producirse en marzo de 1935 una huelga general de carácter político, en la cual participaban diversas organizaciones —entre ellas el Partido Comunista y la Confederación General Obrera de Cuba—, Guiteras se esforzó por convertirla en una sublevación armada. Pero fracasada la huelga —que no llegó a durar ni ocho días— y frustrados sus intentos originales, Guiteras decidió marchar al extranjero. Allá se proponía

organizar una expedición armada que conduciría hasta las costas de Oriente, donde desataría el combate guerrillero. Con el propósito de zarpar de Cuba para iniciar esos proyectos, Guiteras se dirigió al Morrillo —vieja fortaleza aledaña a la ciudad de Matanzas— en unión de varios compañeros. Entre ellos se encontraba el venezolano Carlos Aponte, veterano de la gesta de Sandino. Pronto los revolucionarios se dieron cuenta que estaban rodeados por la tropa de Batista. Para romper la emboscada, Guiteras y Aponte decidieron correr hasta una cerca vecina. Nunca llegaron. Juntos cayeron acribillados a balazos el 7 de mayo de 1935.

Chile fue otro de los países latinoamericanos más afectados por la crisis del capitalismo en 1929. Desde entonces el desempleo creció; se multiplicaron las quiebras de comercios; se paralizaron las obras públicas. En esa coyuntura el presidente de la República, coronel Carlos Ibáñez, disolvió el Parlamento y designó un dócil Congreso con individuos que le ofrecían alguna simpatía o seguridad. Pero en 1931, el descontento social se convirtió en incontenible movimiento de repulsa al régimen personalista. Entonces el referido mandatario tuvo que renunciar, cargo que entregó a uno de los ministros de su último gabinete. El nuevo ocupante del poder ejecutivo creyó que podría detener la oleada de exigencias populares mediante el retorno al tradicional orden constitucional burgués y al facilitar el regreso de los exiliados. Su ingenuidad desapareció en agosto, cuando empezó una huelga general convocada por la Federación Obrera de Chile, que orientaba el Partido Comunista. Este había sido fundado en 1920, por Luis Emilio Recabarren y Elías Lafferté. En diciembre se produjeron graves choques entre los desempleados y los cuerpos represivos en Copiapó y Vallenar, como anticipo de más huelgas obreras; también tuvieron lugar

ocupaciones de latifundios y tierras ociosas por el campesinado desposeído o jornaleros sin trabajo. A mediados de 1932, en las fuerzas armadas cobró vigor un complot encabezado por el jefe de la aviación, Marmaduke Grove. Este pretendía instaurar un sistema de gobierno que permitiera al Estado dirigir la caótica economía nacional y mejorar la terrible situación de los trabajadores. Para alcanzar sus objetivos, Marmaduke estableció contacto con grupos socialistas entre los que sobresalía la Nueva Acción Política, dirigida por Eugenio Matte Hurtado. Entonces el presidente de la república renunció y su lugar fue ocupado por una Junta encabezada por Matte Hurtado —cuyo ministro de defensa era Grove—. La Junta decretó la instauración de una «República Socialista».

En junio comenzaron los primeros decretos del nuevo gobierno que prohibió los desalojos de los inquilinos con escasos ingresos; dispuso la devolución de los utensilios de trabajo y elementos indispensables para el hogar empeñados en las Cajas de Crédito; repuso a los maestros cesanteados; estatizó el llamado Banco Central; acometió la revisión de todas las concesiones mineras; anunció un control gubernamental a los sectores claves de la economía y sobre todo del comercio exterior; impuso altos gravámenes a las grandes fortunas. Sin embargo, debido a las conocidas directrices emanadas del VI Congreso de la Komintern, la militancia comunista no se pudo incorporar a la nueva gestión que surgía en la sociedad, y constituyó un embrión de poder paralelo al instituir un Soviet de Obreros y Campesinos en la sede de la universidad, cuyo ejemplo deseaba extender al resto del país.

Pero, el enemigo actuaba en el seno de la Junta gubernamental; uno de sus integrantes, Carlos Dávila —jurista de largo aval pronorteamericano— frenaba cualquier radicalización.

Dávila entró en contubernio con reaccionarios altos mandos de las fuerzas armadas bajo el propósito de revertir el proceso revolucionario. Ello se produjo el 16 de junio, con un golpe militar. Enterado de la asonada en el Palacio de la Moneda, Marmaduke realizó un emotivo llamamiento por la radio a los trabajadores. Después se le apresó y fue deportado a un campo de concentración en la isla de Pascua junto a Matte Hurtado. El gobierno presidido por el traidor Dávila persiguió con saña a los dirigentes populares; reprimió con crueldad cualquier protesta; implantó el toque de queda en todo el país y para la ciudad de Santiago decretó la ley marcial; estableció la censura de prensa; abolió las libertades sindicales y políticas. Así el terror se apoderó de la nación.

Crisis en el Caribe colonial

En el Caribe anglófono, tras la crisis de 1929-1933, la recuperación económica fue lenta y difícil, lo que originó manifestaciones de los trabajadores. Comenzaron por Saint Kitts en enero de 1935, cuando los macheteros abandonaron el corte de caña en Basse-Terre en protesta por los bajos salarios. Después en las islas de Sotavento y Barlovento se produjeron huelgas y motines reprimidos con violencia por las fuerzas coloniales. En 1937, el fenómeno se repitió, pero esta vez en Barbados, Trinidad, Guyana y Jamaica. Entonces la inconstante sindicalización de los trabajadores del agro fue superada por la de los obreros del transporte público, la minería —sobre todo del petróleo— y los portuarios. A la vez, en política brotaron nuevas fuerzas: en Jamaica, paralelo al partido fundado por Garvey, surgió el *Jamaican Labour Party*, encabezado por Alexander Bustamante. Descollaron también otras figuras, como el jamaicano Norman W. Manley, quien fundó el *People's National Party* y Grantley Adams, organizador del *Barbados Labour Party*. Dicha efervescencia desembocó en 1938, en el *British Guyana and West Indies Labour Congress* —convocado por Cipriani— que exigió el autogobierno, el sufragio universal, legislaturas por completo electivas. En ese ambiente de auge nacionalista emergieron asimismo intelectuales muy avanzados, como el marxista Padmore James, quien escribió su magistral obra sobre la Revolución Haitiana llamada *Los Jacobinos Negros*, que fue seguida por la obra clá-

sica *Capitalismo y Esclavitud* del trinitario Eric Williams. Otros importantes creadores caribeños de entonces fueron el martiniqueño Aimé Césaire y el haitiano Jacques Stephan Alexis.

Las luchas anticoloniales en las *British West Indies* y el ascenso democrático engendrado en los combates antifascistas durante la Segunda Guerra Mundial —en la cual participaron nuevos contingentes de soldados caribeños anglófonos—, así como la victoria electoral del Partido Laborista en Inglaterra, impulsó en la región el establecimiento de autogobiernos. Estos empezaron por Jamaica en 1944, y paulatinamente se fueron generalizando a otros territorios, hasta que el proceso alcanzó su máxima expresión al formarse en 1958, la neocolonial *West Indian Federation*.

Los Frentes Populares

En América Latina, tras las amargas experiencias vividas a partir del rumbo político trazado por el VI Congreso de la Komintern, los comunistas latinoamericanos celebraron su Segunda Conferencia en octubre de 1934. En ella, los participantes llegaron a la conclusión de que en nuestro subcontinente la revolución socialista se hallaba precedida e íntimamente vinculada a la lucha de liberación nacional. Por ello se acordó en lo adelante, esforzarse por estructurar amplios frentes populares antiimperialistas. No se trataba ya de lanzarse a la inmediata toma del poder político —fuese mediante el combate armado o la vía electoral—, sino de respaldar a las respectivas burguesías nacionales en su lucha por el poder político. Así derrotarían a los imperialistas y sus aliados nativos agroexportadores, se lograrían reivindicaciones democráticas y se controlaría el mercado interno. Era un enorme esfuerzo teórico de ese cónclave, porque hasta entonces en el marxismo —concepción ideológica de cuna europea— no se hacía distinciones entre ambas ramas de la burguesía; en el Viejo Continente, toda ella había surgido orientada hacia el mercado nacional. Pero en América, los burgueses primero conformaron las plantaciones esclavistas agroexportadoras, a la vez que dentro de la pequeña burguesía surgieron también grupos exportadores, como los tabacaleros y los cafetaleros. La referida Conferencia concluyó que, solo después de culminadas esas transformaciones democrático-burguesas, debería pensarse en un proceso de contenido socia-

lista que entonces la clase obrera sí encabezaría. Estos preceptos fueron refrendados en Moscú por el VII Congreso de la Tercera Internacional, que se reunió en julio de 1935. Dicho cónclave también aprobó que los comunistas pudieran metamorfosear sus partidos para que adquiriesen características programáticas, que no resaltaran las diferencias filosófico-ideológicas entre creyentes de cualquier religión, y los marxistas-leninistas. Entonces muchas de esas organizaciones políticas se renombraron como Vanguardias Populares, Socialistas Populares, u otras denominaciones similares.

En Brasil, la crisis iniciada en 1929 redujo mucho la demanda de café, lo cual incrementó el desempleo y la miseria, pues incluso quienes mantenían un trabajo veían su salario caer. Esta explosiva situación repercutió muchísimo en la campaña electoral con vistas a los comicios presidenciales de 1930. En ella se enfrentaban el continuismo oficialista y la opositora Alianza Liberal que postulaba a Getulio Vargas, gobernador de Río Grande do Sul. El programa de este se basaba en reglamentaciones laborales, voto secreto, sufragio femenino, reorganización del poder judicial, amnistía para los tenentistas, proteccionismo arancelario, capitalismo de Estado.

Al fraude electoral oficialista siguió el entendimiento de Vargas y los más decididos «aliancistas» con el tenentismo, que el 3 de octubre de 1930, protagonizaron una poderosa sublevación en Río Grande do Sul. Esta se extendió con rapidez a los demás estados del país, hasta que al mes exacto Getulio Vargas ocupó el poder en la capital. Las fuerzas armadas no fueron depuradas, pero se reorganizaron al reincorporarse los antiguos tenentistas a sus filas, ahora con elevados «grados revolucionarios». Después a los gobiernos estaduais se les retiraron sus privilegios — constitución, finanzas y fuerzas armadas

propias —, se clausuró el Congreso federal, se dictó una amplia amnistía, se desarmaron las bandas «cangaceiras», se enjuició a los políticos corruptos conocidos como «carcomidos», se otorgaron poderes de excepción a Vargas y se enviaron delegados personales suyos como «interventores» o nuevos gobernadores centralistas a las viejas demarcaciones estatales. La mayoría de estos eran tenentistas, que en la cima de su gloria crearon el Club 3 de Octubre con filiales regionales llamadas Legiones Revolucionarias, denominación que reflejaba su simultánea y contradictoria atracción por las «Legiones Fascistas» de Mussolini y por la Revolución de Octubre. Las nuevas organizaciones se convirtieron en verdadero azote para la oligarquía —en particular para la de Sao Paulo—, al exigir mejoras en el nivel de vida popular, fortalecimiento de la industria nacional, planes económicos quinquenales para la República, perduración de las nuevas autoridades revolucionarias. Inclusive en algunas legiones se comenzó a hablar de reformas sociales, rebaja de alquileres urbanos y repartos agrarios, que en el caso de Sao Paulo empezaron a llevarse a cabo.

La burguesía agroexportadora lanzó una contraofensiva política al pedir elecciones generales inmediatas y el establecimiento de un orden constitucional. Luego fuerzas oligárquicas realizaron un ataque contra la sede de la Legión Revolucionaria de Sao Paulo, y de ahí se pasó a la insurrección militar. La guerra civil en Sao Paulo duró tres meses, y por sus características se asemejó a los combates de trincheras con artillería pesada y tanques o aviación de la Primera Guerra Mundial. Pero a fines de septiembre de 1932, exhaustos, los rebeldes se rindieron incondicionalmente.

Getulio Vargas se atemorizó ante las perspectivas revolucionarias que muchos tenentistas imprimían al régimen, y

buscó un entendimiento con los derrotados: convocó a un Congreso Constituyente; dispuso que el Banco de Brasil adquiriese la deuda estadual paulista; abandonó la política restrictiva a las exportaciones de café, dictada dos años antes; creó el Departamento Nacional para los asuntos del café, el Instituto del Azúcar y Alcohol, así como otros destinados al cacao, hierba mate y el caucho. Todos orientados a comprar en moneda nacional, íntegramente, las cosechas de la burguesía agroexportadora, lo que a la vez aseguraba a los jornaleros agrícolas ciertos niveles de vida, pues no marchaban al desempleo. Por su parte, dichas instancias estatales captaban las divisas procedentes de las exportaciones, y con ellas impulsaban la industrialización del país, cuya economía creció entre 1930 y 1937, al espectacular ritmo de 11,2% anual.

En la Asamblea Constituyente se evidenció cuanta fuerza política habían perdido los tenentistas, lo cual permitió que la nueva Constitución promulgada en julio de 1934, fuese un compromiso entre la burguesía agroexportadora, la nacional y la pequeña burguesía. En ella se mantuvieron los principios abstractos de una democracia burguesa y se dio de lado a los prometidos cambios estructurales. Se reconocieron derechos a los trabajadores como las ocho horas laborales y el descanso semanal obligatorio, más las vacaciones anuales y los retiros; se proclamó la progresiva nacionalización de las ramas claves de la economía, y se introdujo un sector corporativo que representaría la quinta parte de los escaños congresionales. Después el Congreso eligió a Vargas presidente constitucional sin derecho a reelección.

Los sectores de izquierda en el Brasil conformaron en marzo de 1935, la Alianza Nacional Libertadora, cuyo programa básico giraba alrededor de tres puntos: nacionalización

inmediata de las empresas extranjeras, congelamiento de la deuda externa y reforma agraria. El presidente de honor de esta fuerza política, Luiz Carlos Prestes —ya destacado militante comunista—, llamó a establecer una sociedad nueva al grito de «gobierno popular nacional-revolucionario». En represalia a la inesperada convocatoria, la asustada burguesía ilegalizó las actividades de esa fuerza política. Entonces la facción de izquierda de ese amplio frente optó por la lucha armada para derribar a Vargas. Pero la insurrección fue un completo fracaso al haber hecho suyos los métodos golpistas del tenentismo, y por el insuficiente desarrollo de sus relaciones con las mal coordinadas organizaciones populares. En represalia, el gobierno encarceló a miles de involucrados en la intentona e ilegalizó al Partido Comunista.

Vargas, en noviembre de 1937, clausuró el Congreso, prohibió los partidos políticos y anunció el surgimiento del «Estado Novo», regido por una constitución corporativa. Mediante sus proyecciones nacionalistas dicho régimen fortalecía a la burguesía industrial, grupo social que necesitaba se impusiera un sistema autoritario y centralista, pues no tenía fuerzas suficientes para alcanzar la hegemonía en el país por métodos democráticos. Se erigió un poderoso capitalismo de Estado —los famosos «entes»— con empresas nacionalizadas al capital extranjero, y otras de nueva creación en sectores como el acero, la energía, los transportes, yacimientos minerales, cuyas exigencias en inversiones y tecnología eran de una magnitud que ningún empresario privado nacional podía satisfacer. En poco tiempo —hacia 1940—, debido al éxito económico de esta política, los bienes de capital representaban ya el 38% de la producción fabril brasileña, y las filas del proletariado industrial comprendían a 600 mil personas.

La participación del Brasil en la Segunda Guerra Mundial, con tropas integradas al ejército de Estados Unidos, flexibilizó la vida política del país, que vio surgir dos grandes corrientes. Una, reaccionaria y controlada por la Unión Democrática Nacional, que representaba a la vieja oligarquía agroexportadora. Otra, heterogénea y progresista, encabezada por la burguesía nacional y con participación del recién legalizado Partido Comunista. Esta organización política la concebía como un frente antifascista, con Vargas en la presidencia, quien había establecido relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, liberado a los presos políticos, permitido el regreso de los exiliados. La convergencia progresista se acentuó al emitir Vargas en junio de 1945, el Decreto 7666 con un contenido antimonopolista. Esto acercó aún más a los comunistas con el *Partido Trabalhista Brasileiro*, que tenía base obrera y una plataforma sindicalista en defensa del sector estatal de la economía. Y ambos se relacionaron con el Partido Social Democrático —«Varguista» igual que el anterior—, el cual aglutinaba a la burguesía nacional. Después, el sindicalismo alcanzó verdadera pujanza al estructurarse el Movimiento de Unificación de los Trabajadores, conocido popularmente como «queremismo» —derivado de la frase «Queremos a Getulio»— que agrupaba a comunistas y *trabalhistas* orgánicamente. Eso aterrizó a los altos mandos militares pronorteamericanos que habían regresado de la guerra en Europa. Entonces dichos altos oficiales de acuerdo con la oligarquía exportadora y los incipientes sectores emergentes del monopolismo industrializador brasileño, obtuvieron el respaldo de la embajada de Estados Unidos y el 29 de octubre de 1945, derrocaron a Vargas. Así evitaban la convocatoria a una Asamblea Constituyente con apoyo popular.

En Cuba, entre 1936 y 1940, Batista consolidó su poder en el país a partir de su jefatura militar incontrolada. Cuando el presidente electo trató de disputarle el mando de las fuerzas armadas, fue depuesto. Y su vice, al ocupar la primera magistratura, se plegó por completo. Pero el reclamo principal de la población era la convocatoria a una Constituyente, cuyas sesiones finalmente se iniciaron en febrero de 1940, con la participación de los comunistas. Estos respaldaron sus acápites más progresistas, como restablecer el poder presidencial sobre los mandos de las fuerzas armadas y proclamar el derecho a una educación gratuita. Pero lo más trascendente del texto fue la proscripción de los latifundios, cuyo fraccionamiento se realizaría mediante una reforma agraria. Dicha disposición afectaría los intereses de la poderosa burguesía azucarera, y beneficiaría notablemente a la débil y emergente burguesía nacional.

En los comicios de 1940, Batista obtuvo la presidencia en coalición o especie de Frente Popular con el Partido Unión Revolucionaria Comunista —luego convertido en Socialista Popular—. Este aportó incluso, dos prestigiosos intelectuales de dicha militancia para que fungiesen como ministros sin cartera en su gabinete —Carlos Rafael Rodríguez y Juan Marinello—, mientras los sindicatos se fortalecían bajo la conducción de sus nuevos dirigentes comunistas. Durante dicho cuatrienio, Estados Unidos revirtió la suspensión de sus relaciones militares con Cuba. Con ella firmaron un acuerdo, mediante el cual se le entregaron aviones, tanques, transportes blindados, cañones, morteros, ametralladoras y caza-submarinos. También se firmó un convenio secreto, que entregaba a las fuerzas armadas estadounidenses bases aéreas en San Antonio de los Baños y San Julián. Ese período presidencial coincidió con la Segunda Guerra Mundial, que significó bonanza económica y social para

la isla; la zafra azucarera se duplicó y se vendió en su totalidad a Estados Unidos, la cual abasteció el 40% de dicho mercado. Pero debido al conflicto bélico, resultaba muy difícil realizar importaciones desde el vecino del norte. Esto multiplicó los pequeños y medianos negocios, cuyos dueños con frecuencia engrosaron las filas del veladamente nacionalista y seudosocialdemócrata Partido Revolucionario Cubano (Auténtico) –PRC (A)–, encabezado por Grau. Este obtuvo en 1944, una victoria electoral arrolladora, pues equivocadamente las masas creían que un gobierno del PRC (A) iniciaría una auténtica revolución.

En Chile, la ya referida y novedosa orientación de los marxistas-leninistas, propició el surgimiento de un Frente Popular en 1937. Estaba integrado por el Partido Comunista, el Socialista –recién fundado por Marmaduke Grove–, y el renovado Radical. Dicha alianza se proponía acudir a los comicios presidenciales de 1938, con la candidatura de un prestigioso militante del «radicalismo»: Pedro Aguirre Cerdá. Este ganó las elecciones con algo más de la mitad de los votos y formó su gabinete con destacadas figuras, como el joven socialista Salvador Allende Gossens, nombrado ministro de Salud Pública. Durante su gobierno se multiplicó la asistencia social; se impulsó la industrialización del país; se desarrolló el capitalismo de Estado mediante la Corporación de Fomento –CORFO–, que se impuso en rubros como el petróleo, la metalurgia y la electricidad. Pero inesperadamente en noviembre de 1941, el presidente Aguirre Cerdá falleció. Entonces el Frente Popular estructurado alrededor de su figura se deshizo, lo cual facilitó que en los siguientes comicios presidenciales triunfara un aspirante moderado, que disfrutaba del respaldo de los latifundistas.

En Costa Rica la influencia comunista en el gobierno fue mayor que en ningún otro país latinoamericano. Esto sucedió

a partir de que Rafael Calderón Guardia, quien dirigía la tendencia socialcristiana auspiciada por la burguesía nacional en el seno del Partido Republicano Nacional –PRN–, ganara las elecciones presidenciales de 1940. Durante los dos primeros años de su mandato, este hábil político derogó las leyes anticlericales emitidas por los liberales; declaró la guerra a las potencias fascistas; congeló alquileres y arrendamientos; practicó el intervencionismo estatal en la economía por medio de la regulación de algunos precios; impulsó obras públicas; organizó el Crédito Rural destinado a pequeños y medianos propietarios; estructuró la Seguridad Social, que daba garantía a los trabajadores contra los riesgos vinculados con las enfermedades, la maternidad o la invalidez y la vejez, así como frente al desempleo involuntario. Estas medidas fueron suficientes para que todos los grupos conservadores, dentro o fuera del PRN, se opusieran a su gestión y llegaran incluso a planear expulsarlo del poder.

En esas circunstancias el Partido Comunista adoptó la audaz decisión de brindarle a Calderón su apoyo, si se comprometía a profundizar las reformas sociales mediante un relevante programa transformador que fuese democrático, aunque burgués. El presidente de la República aceptó, y a la vez logró el respaldo activo de la Iglesia Católica. Después se produjo un encuentro entre las tres partes. Entonces el Partido Comunista acordó metamorfosearse, para adquirir características programáticas que no resaltaran las diferencias entre cristianos y ateos. Surgió así Vanguardia Popular –VP– en junio de 1943, abierta a militantes católicos y comunistas. Y se pudo aprobar una reforma constitucional que plasmaba los principios de garantías sociales, control estatal sobre la economía, derecho de todos al trabajo, cooperativas, salarios mínimos, sindicalización

generalizada. También se aprobó la llamada Ley de Parásitos, que autorizaba al Estado —mediante una indemnización a los antiguos dueños— a ocupar las tierras incultas para luego distribuir las. Todo culminó en la conformación del Bloque de la Victoria, en el cual se aliaron el PRN y el VP. Pero no todos veían con simpatías esta nueva fuerza electoral. Dentro del propio Partido Republicano hubo quienes rechazaron esa política, y se escindieron para fundar al Partido Democrático bajo los viejos postulados liberales.

En las elecciones de 1944, Teodoro Picado —exministro de Educación de Calderón— ganó la presidencia por amplio margen. Desde la primera magistratura, el mandatario estableció la Tesorería Nacional, una Junta Central sobre el comercio, impuestos sobre la renta, Juntas Rurales de Crédito con el propósito de beneficiar a la pequeña burguesía. También auspició el desarrollo de las cooperativas agrícolas e industriales, dirigidas a incorporar a campesinos y artesanos respectivamente. Asimismo, se construyeron viviendas baratas para los obreros y se repartieron algunas tierras a los campesinos pobres.

Durante el cuatrienio de Picado, en Costa Rica había tres fuerzas opositoras fundamentales: el conservador Partido Unión Nacional —PUN—, el Partido Democrático, y el Partido Socialdemócrata. Este había surgido en 1945, gracias al respaldo de grupos pertenecientes a la pequeña y mediana burguesía, dirigidos por José Figueres, quien deseaba derrocar al régimen «caldero-comunista». Estas organizaciones se aliaron en el Movimiento de Compactación Nacional, con la esperanza de vencer al Bloque de la Victoria en los comicios parciales de 1946. Pero aunque la votación favorable a este mermó, aún arrasó en las urnas.

El Bloque de la Victoria anunció en febrero de 1947, que Rafael Calderón Guardia sería de nuevo su candidato presi-

dencial en las elecciones del año siguiente, con una plataforma centrada en la promesa de realizar una reforma agraria. En su contra, la oposición legal unida apoyó al candidato del PUN, mientras paralelamente se producía un incremento de la violencia terrorista, cuya cúspide se alcanzó durante el *lockout* o huelga patronal iniciada el 19 de julio. El presidente Picado se atemorizó, y para congraciarse con sus opositores creó un Tribunal Electoral en parte controlado por Compactación, y colocó bajo aquel a la policía nacional. De esa forma cesó el 3 de agosto el ilegal paro promovido por los grandes propietarios, tras colocar al gobierno a la defensiva.

Los comicios generales se celebraron el 8 de febrero de 1948. Esa misma noche el Tribunal Electoral proclamó vencedor al candidato opositor. Y al día siguiente un gigantesco incendio devoró buena porción de los documentos acumulados en la sede de la judicatura. Calderón clamó que había fraude y estableció un recurso ante el referido Tribunal Electoral, que fue incapaz de tomar decisión alguna y transfirió el problema al Congreso Nacional. Este anuló el 1ro. de marzo las elecciones presidenciales pero ratificó las de los diputados al poder legislativo, que daban mayoría al Bloque de la Victoria. Díez días más tarde los conservadores se sublevaron en las montañas del sur. ¡Era la oportunidad que esperaba Figueres, quien llamó a sustituir la vieja república!

Ante la rebelión conservadora, las tradicionales fuerzas armadas costarricenses cayeron en el inmovilismo, en tanto el Ejército de Liberación Nacional —ELN—, organizado por Figueres con restos de la Legión del Caribe, ocupaba Puerto Limón el 11 de abril. Entonces Vanguardia Popular llamó al pueblo a defender el gobierno, consciente de que la supervivencia de las reformas sociales alcanzadas peligraban en caso

de triunfar la oposición. Los primeros en responder fueron los trabajadores, quienes dirigidos por los comunistas en las bananeras estructuraron un batallón, mientras en la capital creaban milicias populares. Por su parte, el presidente Picado solicitó al tirano Somoza que lo respaldara, lo cual este hizo al ocupar con su ejército parte del territorio costarricense. La renuncia de Picado a la presidencia dejó solos a los comunistas en la defensa de San José, rodeada por las fuerzas de Figueres. Pero tanto él como aquellos, comprendían que el peligro mayor para el país provenía de Somoza y de un posible triunfo de los conservadores en rebeldía. Por eso ambas fuerzas firmaron un Pacto. Este acordaba que los elementos populares entregarían las armas y respaldarían al ELN en su enfrentamiento a los enemigos comunes, a cambio de que Figueres se comprometiera a respetar todos los derechos de los trabajadores y a profundizar el proceso de reformas. Terminaba así una guerra civil que había costado al país 2 000 vidas en 40 días de duración.

Una Junta de Gobierno presidida por Figueres se instituyó en Costa Rica, la cual logró la retirada de las tropas de Somoza y la rendición del bando conservador; disolvió las fuerzas armadas tradicionales; otorgó el derecho al voto a las mujeres; negoció con la UFCO para elevarle los impuestos a sus ganancias a cambio de no realizar la reforma agraria; nacionalizó la banca y prohibió al Partido Vanguardia Popular. Empezaba la Segunda República.

Guatemala, desde la crisis de 1929, sufría el terror impuesto por el general Jorge Ubico, aupado a la presidencia por la burguesía agroexportadora de café. Pero en 1942, surgieron las primeras organizaciones estudiantiles, que desde ese momento encabezaron la lucha antigubernamental. En junio de 1944, los universitarios engendraron un cese laboral que puso fin a su

gobierno, aunque otro general se empeñó en prolongar el represivo régimen. Entonces otra huelga —el 16 de octubre—, acompañada a los cuatro días de una sublevación militar encabezada por el capitán Jacobo Árbenz, puso fin a la tiranía. Presidida por este joven oficial, se creó una Junta Revolucionaria que pasó a retiro a todos los generales y abolió dicho rango, tras lo cual se celebraron elecciones presidenciales y para una Constituyente. Esta, en marzo de 1945, derogó el texto liberal en vigor y emitió otro que otorgaba el voto a todos los hombres y a las pocas mujeres alfabetizadas que hubiere, planteaba la libertad de prensa, expresión y de partidos políticos, permitía las expropiaciones en beneficio público, prohibía los latifundios. Pero el recién electo presidente Juan José Arévalo nunca propuso al Congreso ley de reforma agraria alguna ni reconoció a la Confederación Nacional Campesina. En cambio, se empeñó en impulsar el fortalecimiento de la burguesía industrial, para lo cual instituyó el Banco Nacional y un Instituto de Fomento a la Producción. Durante su sexenio aprobó un código de trabajo que incluía la jornada de ocho horas, derecho a la huelga y a la sindicalización, descanso retribuido, vacaciones pagadas, indemnización por despido injustificado, contratos obrero-patronales obligatorios, salario mínimo, igual paga por semejante trabajo; creó el Instituto de Seguro Social y aceptó el surgimiento de la Central de Trabajadores de Guatemala —CGT—. Arévalo tuvo dificultades con Estados Unidos pues respaldó a los obreros de la UFCO, en sus reclamaciones laborales, así como por sus empeños en lograr que la *Electric Bond and Share* y la *International Railways of Central América* —IRCA— disminuyeran sus tarifas. También por su Decreto 649, que imponía el control nacional sobre las concesiones petrolíferas otorgadas previamente a empresas estadounidenses. Y tuvo fricciones con el gobierno en

Washington por su auspicio a la ya mencionada Legión del Caribe. Esta fuerza militar estaba compuesta por revolucionarios de Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Cuba, en cuya región oriental se entrenaban para luchar contra las tiranías de Somoza y Trujillo.

Jacobo Árbenz, apoyado por la CGT, ganó con dos tercios de los votos las elecciones presidenciales de 1950. De inmediato permitió la formación del Partido Comunista —que pronto devino en Guatemalteco del Trabajo (PGT)—, rechazó la exigencia de la Organización de Estados Americanos —OEA— de enviar tropas a la Guerra de Corea, empezó a erigir la hidroeléctrica de Jurún Marinalá con el propósito de romper el monopolio de la *Electric Bond and Share*, comenzó una carretera del Atlántico al Pacífico para quebrar el dominio de la IRCA sobre el transporte, inauguró los trabajos para habilitar la bahía de Santo Tomás, que desafiaría las instalaciones de la UFCO en Puerto Barrios. Y el 17 de julio de 1952, emitió su Decreto 900, que disponía la expropiación —mediante el pago en bonos a largo plazo— de todas las tierras no cultivadas, así como las arrendadas por los terratenientes bajo principios no capitalistas. Dichos predios, así como los de propiedad estatal, se distribuirían entre los campesinos sin tierra, quienes serían financiados por un nuevo Banco Agrario Nacional. De esta manera, la transformación de la propiedad rural se convirtió en el pilar de lo que en Guatemala se conocía como la Revolución de Octubre. Desde entonces se expropiaron a la UFCO decenas de miles de hectáreas, se inauguró el puerto de Santo Tomás, se avanzó en la construcción de la hidroeléctrica; además cuando en la *Electric Bond* y en la IRCA se produjeron graves conflictos laborales, Árbenz dispuso la intervención o gestión gubernamental de ambos consorcios.

La réplica del imperialismo no se hizo esperar; sublevaciones militares derechistas, propósitos aviesos de Somoza y del conservador gobierno de Honduras, y sobre todo una conjura de la *Central Intelligence Agency* —CIA—, que preparaba con exiliados guatemaltecos una invasión mercenaria. Estados Unidos además, en la X Conferencia Interamericana de la OEA, logró —con los votos adversos de Argentina y México— una resolución anticomunista que en realidad condenaba a muerte al proceso revolucionario. El proyecto imperialista se ejecutó el 18 de junio de 1954, cuando la tropa contrarrevolucionaria penetró en Guatemala. Una semana después, los aviones suministrados por la CIA a los mercenarios bombardearon la capital y otras ciudades. Entonces Árbenz deseó armar al pueblo, pero gran parte de la oficialidad se opuso y además exigió que los elementos más revolucionarios fuesen expulsados del gobierno. Se pagaba así el trágico precio de no haber depurado —en su momento— las fuerzas armadas, ni haber eliminado la opresión cultural sufrida por las diversas tribus mayas, las cuales constituían en el país la mayoría de la heterogénea población. En esas aciagas circunstancias, el 29 de junio de 1954, el presidente no encontró más solución que renunciar a su cargo y marchar al exilio. Después sobre Guatemala se desencadenó una desenfrenada represión.

En Bolivia la crisis cíclica de 1929 afectó mayormente a quienes vivían en las ciudades o estaban vinculados con las actividades mineras, de las cuales la petrolífera tenía creciente importancia. Fue por diferendos fronterizos relacionados con su extracción y transporte que estalló la cruel Guerra del Chaco. Aunque esta había sido atizada por contradicciones entre compañías de Estados Unidos e Inglaterra, las consecuencias recayeron sobre los latinoamericanos. Los combates dejaron un

saldo de 120 mil muertos, de ellos más de la mitad bolivianos. Durante la conflagración muchos jóvenes de extracción pequeñoburguesa recibieron formación como oficiales y engendraron fuertes sentimientos nacionalistas; esto los indujo a inmiscuirse en la vida política mediante la creación de logias militares. La más influyente de ellas, encabezada por los coroneles Germán Busch y David Toro, ocupó el poder en mayo de 1936, a raíz de una huelga general convocada por organizaciones proletarias clandestinas. Entonces se dio por terminada la República Liberal, se constituyó el Partido Socialista de Gobierno (PSG) —formado por civiles y militares—, se decretaron insólitas medidas a favor de los obreros, lo cual possibilitó la creación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Bolivia. Y el 13 de marzo de 1937, se emitió la «Resolución Suprema» que nacionalizaba 31 pozos de petróleo, dos destilerías y siete millones de hectáreas, perteneciente todo a la estadounidense *Standard Oil Company*. Después una Constituyente emitió en 1938, un texto que proclamaba al Estado dueño de las riquezas naturales, aludía a la función social de la propiedad, diseñaba un Código de Trabajo, reconocía el derecho del campesinado aborigen a sus tradicionales tierras comunales. Más tarde se conformó un Banco Minero encargado de proteger y fomentar los pequeños yacimientos, en cuya dirección se colocó a un joven civil llamado Víctor Paz Estensoro. Pero la inexplicable y súbita muerte de Busch —presidente en funciones—, quien acababa de decretar en 1939, la disolución del Congreso, permitió que los mandos tradicionales del ejército recuperasen su control sobre las fuerzas armadas, retomasen el ejecutivo republicano y comenzaran a derogar las disposiciones más avanzadas.

Los recién desplazados del poder y toda la oposición procedieron a reestructurarse. Los civiles pequeñoburgueses que

habían estado en el PSG, constituyeron el Movimiento Nacionalista Revolucionario —MNR—. Los trotskistas se agruparon en su Partido Obrero Revolucionario —POR—. Los militares progresistas organizaron una logia nueva, encabezados por el mayor Gualberto Villarroel. Estos, en diciembre de 1943, realizaron un golpe de Estado, que llevó a muchos integrantes del MNR a importantes posiciones de gobierno. Luego, en las elecciones parlamentarias de 1944, este partido resultó el principal en el Congreso, y nombró a Villarroel presidente de la república. Entonces se conformó la Federación Sindical de Trabajadores Mineros, se instituyó el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se nombró a Paz Estensoro ministro de Hacienda para que implementase un Plan de Desarrollo Económico de Bolivia, se prohibieron los servicios personales o renta en trabajo de los campesinos a los terratenientes, se celebró un Primer Congreso Indígena. Y en 1945, las nuevas disposiciones fueron integradas en una progresista Constitución. Pero el Partido de Izquierda Revolucionaria (PIR) —que se proclamaba «marxista» e influía en algunos sectores proletarios— así como el trotskista POR, universitarios, y la Federación Obrera Sindical, se aunaron en 1946, con elementos aristocráticos en el mal llamado Frente Democrático Antifascista, animado por los tres periódicos de la «Rosca» u oligarquía minero-exportadora. Se gestó así una poderosa y heterogénea coalición, que respaldada por militares descontentos, asaltaron el 21 de diciembre de ese año el Palacio Presidencial y asesinaron a Villarroel.

Durante un sexenio de represión generalizada la oligarquía mantuvo el poder. En su contra el MNR alentó insurrecciones, mientras las desacertadas y erráticas dirigencias del POR y el PIR desprestigiaban a dichos partidos. Hasta que la vanguardia de este último se escindió para fundar el Partido Comunista de

Bolivia. En ese contexto se celebraron elecciones en 1951, de las cuales emergieron Víctor Paz Estensoro y su MNR como triunfadores, lo cual no fue aceptado por el presidente civil de turno, quien entregó el gobierno a una Junta Militar. Entonces se produjo la rebelión del 9 de abril de 1952, llevada a cabo por los obreros de las minas. Dado que muchos de ellos eran veteranos de la Guerra del Chaco, se organizaron en milicias y derrotaron al ejército en distintas batallas, en las cuales los elementos populares se vieron reforzados por el Cuerpo de Carabineros, que se les unió. Así, juntos ocuparon La Paz luego de tres días de combate. Empezaba la Revolución Boliviana. De inmediato Paz Estensoro regresó de Argentina y ocupó la presidencia, el MNR organizó su propia fuerza armada —integrada por obreros, milicianos y carabineros—, se aumentaron los salarios un 40%, se congelaron los alquileres y se fijaron toques a los precios de los productos de primera necesidad, se constituyó la Confederación Obrera de Bolivia o Central Sindical Única. Esta poderosa entidad clasista exigió la nacionalización de la gran minería —que fue estatizada—, y envió mineros a los campos para auspiciar la agitación revolucionaria. En muchas zonas los indígenas aún sufrían la aparcería o eran siervos. Para calmar la incipiente efervescencia rural, en 1953 el MNR emitió una contradictoria ley de reforma agraria; aunque se formaron algunas cooperativas sobre la base de antiguas comunidades agrícolas aborígenes, el proyecto básicamente proponía distribuir pequeñas parcelas entre los desposeídos. Ni siquiera se afectaban las grandes propiedades cuyos dueños hubiesen invertido en ellas capitales, como en las plantaciones de la región de Santa Cruz. De esta forma se creó un amplio sector que tendió al autoconsumo, pues poco producía para el mercado y menos aún compraba en él.

El MNR, una vez eliminadas las reminiscencias feudales, expropiada la cúpula burguesa de la minería, establecido el voto universal, reconocida la existencia legal de los idiomas quechua y aymara, consideró terminadas las transformaciones. Entonces se dedicó a contener la rebeldía obrera, mientras fortalecía su alianza con los minifundistas. Más tarde el gobierno llegó a forjar un «Pacto Militar-Campesino», en tanto desarmaba las milicias proletarias. A partir de ese momento la cúspide del MNR se enriqueció mediante malversaciones o negocios sucios y peculado; anhelaba convertirse en burguesía propiamente dicha. Y entenderse con Estados Unidos. A este, dicho partido entregó una parte del petróleo nacionalizado hacia más de tres lustros; a cambio recibió una subvención anual equivalente al 40% del presupuesto boliviano. También por disposición estadounidense el MNR votó en 1954, a favor de la resolución anticomunista de la OEA, que decretaba la muerte del proceso revolucionario encabezado por Árbenz en Guatemala.

En Colombia, el asesinato del popularísimo liberal de izquierda Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, originó «El Bogotazo», que dio inicio a la década conocida como «La Violencia». Durante esos años la avalancha rebelde careció de una conducción susceptible de transformar la estructura socioeconómica, cuyos beneficios disfrutaban por igual los oligarcas de ambos partidos tradicionales, fuesen liberales o conservadores. Los choques eran feroces enfrentamientos por simples cuestiones de rótulos. Y la lucha guerrillera se fue haciendo indiscriminada por todo el país. Muchos se alzaban con los liberales, porque era la única manera de sobrevivir a la violencia del gobierno conservador, combatida con altas dosis de igual procedimiento. De esa forma la barbarie se fue generalizando. Solo el Partido Comunista se esforzaba por lograr que las guerrillas

liberales abandonaran su visión localista y sectaria del conflicto. Pretendía vincular la lucha armada con la reforma agraria, y con la conformación de gobiernos populares en cada localidad. Pero los jerarcas de ambos partidos oligárquicos terminaron entendiéndose, y forjaron en 1957, un «Frente Nacional». Mediante dicho acuerdo, ambas organizaciones políticas se alternarían en el ejercicio del poder y enfrentarían al movimiento guerrillero revolucionario. Este era muy fuerte en Marquetalia, el Cauca-Río Chiquito, el Pato y Guayabero, donde según la propaganda oficialista habían surgido «repúblicas independientes comunistas». En realidad, en dichas zonas se vivía una situación de tregua armada, pues la militancia de ese partido marxista-leninista aplicaba los preceptos de «autodefensa». Si se les atacaba, combatían. Pero ante la alianza de toda la burguesía, no sabían qué hacer; no pretendían llevar la lucha a otras áreas y mucho menos tomar el poder.

En síntesis, la referida política de Frentes Populares que se estableció en diferentes países latinoamericanos como una orientación de la Internacional Comunista, se agotó. Aunque por inercia continuó siendo aplicada en América Latina hasta 1959, cuando en Cuba triunfó la Revolución.

Rebeldía y Revolución: Fidel Castro

Fidel Castro, desde su ingreso a la Universidad, se convirtió en destacado dirigente de la FEU y en presidente de su Comité Pro-Democracia Dominicana. En virtud de esta responsabilidad, integró la llamada Legión del Caribe, o fuerza expedicionaria internacionalista empeñada en derribar al tirano dominicano Rafael Leónidas Trujillo. El entrenamiento militar de los 1 200 hombres comenzó a mediados de 1947, en el nororiental Cayo Confites. Meses después, cuando los buques se aprestaban a zarpar, el desprestigiado presidente Grau mandó a detener la expedición. Todos fueron apresados, menos Fidel Castro, quien nadó hasta el litoral.

En 1948, el ya muy conocido dirigente estudiantil supo de la convocatoria estadounidense para celebrar en Bogotá la IX Conferencia Interamericana. El propósito de Washington era transformar la Unión Panamericana en Organización de Estados Americanos —OEA—, para sustraer las relaciones continentales del marco de la Organización de las Naciones Unidas, donde en su Consejo de Seguridad, la Unión Soviética tenía poder de veto.

Fidel Castro concibió la idea de efectuar un Primer Congreso de Estudiantes Latinoamericanos, que paralelamente al surgimiento de la OEA, se manifestara en su contra y de la hegemonía imperialista. Y hacia Colombia partió en los primeros días de abril de 1948, con el objetivo de reunirse con Jorge

Eliécer Gaitán. Este le brindó su apoyo y le prometió clausurar el magno evento. Ambos acordaron reencontrarse 48 horas después. Los preparativos del congreso estudiantil continuaban, cuando el 9 de abril una siniestra noticia recorrió la ciudad: ¡Habían asesinado a Gaitán! Y las masas enloquecidas se lanzaron a las calles.

En Cuba, una vez electo presidente, Carlos Prío promovió la creación del Banco Nacional —con el prestigioso economista Felipe Pazos como director, quien esgrimía las teorías de la CEPAL—, así como del Banco de Fomento Agrícola e Industrial de Cuba —BANFAIC—. Dichas instituciones deberían implementar algún proteccionismo al restringir determinadas preferencias al comercio con Estados Unidos. También impulsarían y diversificarían los intereses de la burguesía nacional, con una política financiera adecuada. Pero a la vez, el nuevo mandatario acentuó la persecución a los comunistas, muchos de cuyos dirigentes —como Jesús Menéndez— fueron asesinados. Promovió el asalto a los sindicatos encabezados por honestos dirigentes; corrompió a la Confederación de Trabajadores de Cuba —CTC—² con el infame inciso K; se hundió en la más completa corrupción. Contra todos esos desafueros, desde el Partido Ortodoxo se proyectaba Fidel Castro.

El golpe de Estado de Batista el 10 de marzo de 1952, obtuvo el respaldo de la burguesía agroexportadora azucarera y el reconocimiento —a los cinco días— de Estados Unidos. Este régimen de facto revirtió la política económica de su predecesor. Transformó el comportamiento del BANFAIC; mantuvo inalterable la estructura del comercio exterior; otorgó al poderoso vecino del norte el *status* de «nación más favorecida»;

² En el año 1961, cambiaría su nombre a Central de Trabajadores de Cuba.

auspició la penetración en Cuba de los intereses pecuarios del Medio Oeste norteamericano; benefició a los monopolios estadounidenses —en detrimento de los capitales nacionales— en esferas como el turismo y la construcción. Simultáneamente, desde el poder, los burgueses afiliados al batistato presionaron para adquirir los negocios de otros inversionistas criollos, en rubros como bebidas y licores o el transporte.

Fidel Castro acusó al dictador ante un tribunal, pero sin consecuencia legal o práctica alguna. Entonces decidió nuclear grupos combativos de avanzada, que participaran en la lucha general contra el tirano. Y al cabo de un año concluyó que los revolucionarios aglutinados a su alrededor debían iniciar la insurrección en la región oriental, con el ataque a su principal cuartel. Pero el asalto al Moncada, el 26 de julio de 1953, no triunfó. El ejército asesinó a decenas de participantes y Fidel fue capturado. Después se le sometió a una farsa judicial. En ese proceso, el joven revolucionario acusó al tiránico e ilegal régimen, y expuso su famoso alegato-programa conocido como La historia me absolverá. En este, Fidel convocó a la más amplia unidad antidictatorial, que resistiese a la tiranía y condujese al pueblo a una multifacética rebeldía. Trataba de lograr la unidad por la negación, aunque dentro de aquella unos buscasen retornar al *status* anterior, mientras otros deseaban alcanzar un mundo mejor mediante la Revolución.

Excarcelados, Fidel y sus compañeros de lucha se esforzaron por emplear medios legales para oponerse a Batista, pero este lo impidió. Entonces partieron hacia México, donde fundaron el Movimiento 26 de Julio. Allí se les unió un joven médico argentino: Ernesto Guevara.

A bordo del yate *Granma*, Fidel y 81 expedicionarios, desembarcaron el 2 de diciembre de 1956 en las costas orientales

de Cuba. En esa región, con los campesinos pobres, comenzó la forja del Ejército Rebelde. Poco después, en La Habana, el 13 de marzo de 1957, el estudiantil Directorio Revolucionario llevó a cabo un fallido asalto al Palacio Presidencial. En represalia, la tiranía desató prácticas terroristas contra los opositores, incluso de los sectores rivales de la burguesía. Así hasta los más tímidos o titubeantes partícipes de la débil burguesía nacional, comprendieron que solo la lucha armada podría destronar al tirano y sus adláteres. A principios de 1958, se creó el Segundo Frente Oriental comandado por Raúl Castro y la ofensiva del Ejército Rebelde se intensificó, lo que indujo a Fidel a convocar la formación de un amplio Frente Cívico. Este nuclearía a toda la oposición —fuesen militares, obreros, estudiantes, profesionales, empresarios— para coordinar sus actividades contra la tiranía. Esa conjunción de fuerzas permitió que el Ejército Rebelde ocupara numerosas ciudades en Oriente y dejara aislado a Camagüey. Mientras, en Las Villas, con la toma por Ernesto Guevara —Che— de la estratégica Santa Clara, la isla quedaba cortada a la mitad. Simultáneamente, Fidel proclamó la huelga general revolucionaria y entró en Santiago de Cuba.

Luego de dos años de guerra, en 1959, Fidel ocupó el poder e inició una segunda fase de su lucha. Planteó la necesidad de transformar o sustituir las viejas estructuras por otras nuevas, lo cual se realizaría mediante un conjunto de etapas evolutivas. En estas se eliminarían los negocios de los imperialistas y sus aliados internos, en nombre de los intereses generales de la sociedad. Ponía en práctica su novedoso concepto de que, «Revolución es el arte de aglutinar fuerzas contra el imperia-lismo, pues ningún proceso puede darse el lujo de excluir a fuerza alguna». Por esta razón se estructuró un gabinete gubernamental, cuya conformación evidenciaba las oportunidades

que se le brindaban a la burguesía nacional; Felipe Pazos fue designado nuevamente Director del Banco Nacional, mientras Rufo López Fresquet —proveniente de Acción Católica— ocupaba el cargo de ministro de Hacienda. Juntos concibieron una avanzada reforma tributaria, diseñada para redistribuir los ingresos e incrementar la producción del empresariado nacional destinada al mercado interno. Sin embargo, ambos renunciaron a sus elevados cargos y huyeron al extranjero; tomaban el rumbo iniciado por los «batistianos», continuado después por los oligarcas y seguido más tarde por los grandes propietarios, incluidos los de la débil y timorata burguesía nacional. Todos temían a la Revolución y las posibles represalias de Estados Unidos.

A partir de 1959, se intervinieron las propiedades malversadas por los antiguos gobernantes; se rebajaron los alquileres urbanos para luego entregarlos en propiedad a sus inquilinos; se nacionalizaron los bancos y demás compañías extranjeras; se estatizaron 400 grandes empresas propiedad de criollos; se dictó una Ley de Reforma Agraria. Esta limitó las posesiones de los terratenientes a 30 caballerías —402 hectáreas—, lo que permitía su transformación en burguesía agraria. La tierra en exceso se entregó en propiedad a precaristas y aparceros, estimulados a integrarse en cooperativas junto al campesinado previamente existente. Sin embargo, la originalidad agrarista de Fidel consistió en no fraccionar, sino convertir en granjas estatales —poco más del 40% de las tierras— las plantaciones y latifundios ganaderos expropiados, que funcionaban con peones asalariados o jornaleros agrícolas. Se transformaron los cuarteles en escuelas; se fundaron milicias —de obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales—, se constituyeron en los barrios Comités de Defensa de la Revolución. Y en septiembre de 1960,

Fidel creó un Buró de Coordinación de Actividades Revolucionarias, encargado de integrar al exinsurrecto Movimiento 26 de Julio con el estudiantil Directorio Revolucionario y el proletario Partido Socialista Popular. Se unificaron así militancias políticas diferentes, pero susceptibles de formar una vanguardia nacional-liberadora única.

Ese conjunto de medidas metamorfoseó el derecho y consecuentemente las formas de propiedad, el sistema económico y las relaciones sociales. Igualmente sucedió con la moral, pues el cambio había sido anhelado. También Fidel inició la transformación cultural de la sociedad, al convocar a una impresionante Campaña de Alfabetización. En ella miles y miles de jóvenes ciudadanos marcharon a campos y montañas, con el propósito de ilustrar a la población rural carente de educación. De esa manera se evidenció que Fidel había logrado el extraordinario éxito político de metamorfosear la rebeldía en Revolución y hacerla inderrotable, al contar con las armas, la unidad y el pueblo. Fidel también dio a la Revolución un contenido ideológico, al proclamar el socialismo en abril de 1961, en el emotivo entierro de las víctimas del bombardeo mercenario, realizado en vísperas de la derrotada invasión de la CIA por Playa Girón. Se evidenció entonces que se había realizado un gigantesco paso de avance en la historia de América Latina. Fidel demostró que no existían barreras infranqueables para los procesos decididos a llegar hasta su máximo desarrollo, cuyo límite lo establecería la idiosincrasia o costumbres y aspiraciones socioeconómicas de la población. Todo dependía del sector social que ocupara el poder, y de quien lo dirigiese.

Repercusiones de la Revolución Cubana en América Latina

El triunfo de la Revolución Cubana influyó en la conciencia de los más audaces latinoamericanos. Entendían que amplias perspectivas de liberación se abrían para millones de humildes y desposeídos, cuya lucha podría terminar con la opresión. Incluso, hubo quienes de inmediato se lanzaron al combate guerrillero con el propósito de reproducir la victoria «fidelista».

Así, contra la tiranía de Trujillo, a mediados de 1959, se lanzaron revolucionarios guiados por Enrique Jiménez Moya —veterano de la Legión del Caribe y de la Sierra—, cuyo segundo al mando era un cubano, excomandante del Cuarto Frente Oriental. Desembarcaron por Puerto Plata, pero pocos escaparon vivos de los primeros combates. Los sobrevivientes fundaron el Movimiento 14 de Junio. Esta organización, tras el ajusticiamiento de Trujillo y el ulterior golpe de Estado restaurador, estructuró guerrillas en las montañas.

En Haití, Jacques Stephan Alexis y sus compañeros del marxista *Parti Entente Populaire* —PEP— desembarcaron en 1961, pero fueron diezmados en los primeros enfrentamientos. A los dos años, el PEP y el *Parti Populaire de Liberation Nationale* crearon las *Forces Armées Revolutionnaires d'Haití*. Y también sus integrantes perecieron a manos de los *Tontons Macutes*, u hordas reaccionarias de Francois *Papa Doc* Duvalier, adalid de la «negritud».

En Panamá, un grupo de 45 estudiantes acaudillados por Roberto Arias —hijo de un expresidente— se alzó en el Cerro de Tute, pero tras haber realizado varias emboscadas exitosas, fueron apresados por la Guardia Nacional.

En Paraguay, en abril de 1960, el Partido Comunista y la Juventud Febrerista crearon el Frente Unido de Liberación Nacional, cuya guerrilla Yororó fue masacrada. Los comunistas paraguayos perseveraron con la insurrecta Columna Mariscal López, que a pesar de sus éxitos en San Pedro, no logró una efectiva implantación en otras zonas rurales.

Por esa misma época, en Nicaragua, revolucionarios como Carlos Fonseca Amador y Tomás Borges, estructuraron el Frente Sandinista de Liberación Nacional —FSLN—. Este, luego de sufrir algunos reveses en los empeños de sus guerrillas rurales —como en Wiwilí y Pancasán—, finalmente se implantó en las montañas del país. También la militancia del FSLN realizaba actividades clandestinas en las ciudades, tanto para acopiar abastecimientos en respaldo a los insurrectos, como con trabajo de agitación política entre los jóvenes estudiantes.

En Argentina la resistencia efectiva al régimen oligárquico empezó con el Movimiento Peronista de Liberación, cuya pequeña guerrilla actuó en las zonas rurales de Tucumán hasta enero de 1960. Luego se forjaron las Fuerzas Argentinas de Liberación, compuestas por marxistas de diversas tendencias —aunque predominaban los maoístas—, con breve actividad armada ciudadana.

En Guatemala, en 1960, militares progresistas se sumaron a la causa de los oprimidos. Ciento veinte oficiales y tres mil soldados, encabezados por Luis Augusto Turcios Lima y Marco Antonio Yon Sosa, tomaron parte en el alzamiento que tuvo lugar en la capital, Puerto Barrios y Zacapa. Pero la falta

de coordinación y los bombardeos aéreos de los contrarrevolucionarios cubanos —que se preparaban para atacar a Cuba por Playa Girón— lo hicieron fracasar. Luego, ambos exmilitares organizaron el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre e iniciaron una insurrección por la zona de Izabal, la que recibió el apoyo del Partido Guatemalteco del Trabajo, que preparaba su propia guerrilla en la Baja Verapaz. La rebeldía, sin embargo, se debilitó; el PGT retomó concepciones «obreristas», mientras Yon Sosa, primero asumió criterios «militaristas» para después abrazar las tesis «agraristas» del trotskismo. El resto de los guerrilleros cayó en progresiva parálisis.

En Colombia el combate guerrillero renació en 1962, cuando el gobierno atacó las llamadas «repúblicas independientes comunistas», en Tolima, el Cauca-Río Chiquito, el Pato, Guaya-bero. Allí, militantes de esa filiación partidista se encontraban en tregua armada desde hacía cuatro años. Estas ofensivas de miles de soldados indujeron a los alzados a retomar el tradicional comportamiento guerrillero, pero decididos ahora a luchar por el poder.

Segunda Declaración de La Habana y su trascendencia

En ese contexto de multiplicación guerrillera, Fidel Castro lanzó su trascendental Segunda Declaración de La Habana. El texto de febrero de 1962, afirmaba que el movimiento de liberación contemporáneo latinoamericano era indetenible. Pero su triunfo dependía de que se vertebraran los esfuerzos de obreros, campesinos, intelectuales, pequeño burgueses y capas progresistas de la burguesía nacional, sin prejuicios ni divisiones o sectarismos, dirigidos por los mejores revolucionarios de la sociedad. En dicho movimiento — precisaba — debían luchar juntos desde el viejo militante marxista hasta el católico sincero, así como los elementos avanzados de las Fuerzas Armadas.

Entonces, en el subcontinente entraron en crisis los acuerdos del VII Congreso de la Tercera Internacional, sobre la estrategia de los «Frentes Populares» encabezados por la burguesía; a estos, por inercia, los Partidos Comunistas los habían seguido considerando como válidos, a pesar de haber sido disuelta dicha organización hacía casi 20 años. Quienes rechazaron la caduca orientación se sumaron a los partidarios de la lucha armada, que se animaba en la región.

La disputa entre simpatizantes y detractores del combate guerrillero se vio agravada por conflictos políticos originados allende los mares. Se había producido el cisma chino-soviético,

impulsado con vigor por Pekín a partir de 1963, cuando publicara su *Propuesta de Línea General para el Movimiento Comunista Internacional*. La médula de la polémica radicaba en que Moscú proponía la «coexistencia pacífica» entre el este y el oeste, lo cual implicaba que se aceptara exclusivamente la vía electoral como opción política al interior de los países. En cambio, los maoístas planteaban la necesidad de sostener una «guerra popular prolongada» del campo a la ciudad, en los países subdesarrollados del llamado Tercer Mundo.

Con el propósito de analizar estas cuestiones, Fidel convocó a la Tercera Conferencia de los Partidos Comunistas de América Latina en 1964. En dicho cónclave se trazó una sinuosa línea conciliatoria entre enemigos y proclives de la lucha armada. A los tres años, en La Habana se celebró la Conferencia de Solidaridad de América Latina —OLAS— a la que asistieron los abanderados del combate armado, ahora engrosados con los partidarios de las guerrillas urbanas en Argentina y Uruguay. Allí se concluyó que, en nuestra región existían condiciones socioeconómicas y políticas susceptibles de crear —con el desarrollo de la guerra popular— situaciones revolucionarias, en dependencia de las concepciones ideológicas y capacidades organizativas de las vanguardias.

Por su parte, la militancia comunista atraída por el «maoísmo» se escindió de sus partidos de origen, añadiendo al nombre de sus nuevas organizaciones, el término de «marxista-leninista».

Al atribulado panorama de tendencias revolucionarias, habría que añadir la de los partidarios de Trotski, cuya Cuarta Internacional abordaba la cuestión de la toma del poder de manera nebulosa, aunque se planteara —tal vez para un futuro— la posibilidad de una súbita lucha armada, que en breves

combates debería triunfar sin realizar alianza alguna con otras fuerzas.

El Secretariado Latinoamericano del Trotskismo Ortodoxo (SLATO) –creado en Buenos Aires por la Cuarta Internacional–, decidió realizar su proselitismo básico en los países de mayor población rural en América del Sur. Por ello en Brasil, donde nunca se habían alterado las formas de propiedad en el campo, la SLATO impulsó reivindicaciones agraristas mediante la formación de sindicatos o Ligas Campesinas. Un abogado de Recife, llamado Francisco Juliao, constituyó las primeras en Pernambuco, desde donde se extendieron al resto del país, sobre todo por el nordeste y Minas Gerais. Pero la típica carencia trotskista de una estrategia que abarcara a las demás clases y grupo sociales, mantuvo a los camponeses aislados. Esto facilitó que fueran liquidados por los militares fascistas –que dieron un golpe de Estado en 1964–, cuando dichos sindicalistas se esforzaban por transformarse en guerrilla rural.

En Perú, el trotskista Partido Obrero Revolucionario comenzó su trabajo político por los valles cuzqueños de La Concepción y Lares, adonde envió a Hugo Blanco con el seudónimo de *Cóndor*. Allí se relacionó con los explotados campesinos quechuas, para que en su condición de «inquilinos» o aparceros, no pagaran sus rentas de la tierra en trabajo y ocuparan los latifundios. Luego de alcanzar ciertos éxitos, *Cóndor* decidió acometer la lucha armada, lo que significaba romper los vínculos con la SLATO. Después se sublevó, pero los rebeldes fueron capturados en el combate en Pucyura, en mayo de 1963. La actividad guerrillera resurgió al poco tiempo, pues el marxista Movimiento de Izquierda Revolucionaria «MIR», dirigido por Luis de la Puente Uceda, organizó dos frentes. Uno en Cuzco y el otro en Junín. Aunque luego de los primeros triunfos, Uceda

y sus compañeros fueron muertos en Amaybamba. Poco después, los integrantes del otro grupo tuvieron igual destino. En la misma época, Héctor Béjar y Juan Pablo *El Chino* Chang, fundaban el Ejército de Liberación Nacional —ELN—, con jóvenes sin previa filiación política y antiguos militantes de la Juventud Comunista peruana. El ELN comenzó sus acciones armadas por Chinchibamba —departamento de Ayacucho—, pero sus integrantes tropezaron con las mismas dificultades que el MIR: no hablaban el quechua, único idioma de los campesinos de la región. Estos lugareños, además, tenían intereses totalmente ajenos a los de luchar contra el imperialismo y a favor del socialismo, lo que facilitó la derrota de dichos guerrilleros en Tingos, en diciembre de 1965.

En Venezuela, en 1962, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria abrazó el marxismo e inició la lucha guerrillera acompañado de los comunistas, entre cuyos jefes destacaban Argimiro Gabaldón y Douglas Bravo. A ellos se unió Fabricio Ojeda, prestigioso periodista que había sido dirigente de la Unión Republicana Democrática, así como numerosos exmilitares que habían participado en las fallidas sublevaciones de La Guaira, Caracas, Carúpano y Puerto Cabello. Entonces se multiplicaron los frentes guerrilleros, pero se encontraban desorganizados y muy distantes entre sí. Además carecían de mando único y actuaban con criterios de relativa espontaneidad, empleando tácticas de choque con las cuales pretendían dar un golpe que derribase al gobierno. Al no lograrlo, las guerrillas cayeron en progresiva parálisis, hasta su disolución.

En 1963, en Argentina penetró desde Bolivia el grupo comandado por Jorge Ricardo Massetti, amigo del Che. Este dirigía el llamado Ejército Guerrillero del Pueblo, cuyos integrantes fueron dispersados por la gendarmería en marzo de 1964.

A los cuatro años se organizaron las Fuerzas Armadas Rebeldes, con revolucionarios de heterogénea procedencia, que por breve tiempo accionó en las urbes. Paralelamente, un grupo armado de nombre Fuerzas Armadas Peronistas, mantuvo varias semanas de actividad guerrillera en los campos de Taco Ralo, provincia de Tucumán, hasta ser diezmado.

En Colombia, en julio de 1964, revolucionarios de diversa procedencia fundaron el Ejército de Liberación Nacional –ELN– al cual se sumó –como simple soldado– el carismático y notable cura católico Camilo Torres. A los dos años, los guerrilleros comunistas crearon las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– al mando de Manuel Marulanda, con distintos frentes de guerra. Por su parte los maoístas formaron una agrupación «marxista-leninista», en defensa de la guerra popular prolongada del campo a la ciudad. Ellos crearon las llamadas Juntas Patrióticas, integradas por campesinos del Sinú, San Jorge y Cauca, con los cuales constituyeron en 1967, el Ejército Popular de Liberación, cuyos primeros combates se desarrollaron por el departamento de Córdoba.

En Uruguay, surgió la organización armada urbana Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros –MNL-T– durante 1965. Fundado por Raúl Sendic y José *Pepe* Mujica, estaba integrado por maoístas, disidentes anarquistas, trotskistas, católicos radicalizados y gente sin previa filiación. En sus filas primaban estudiantes, intelectuales, técnicos, profesionales, así como elementos avanzados de la pequeña burguesía urbana, progresivamente en ruina debido al creciente proceso monopolizador de la economía. También contaba con obreros industriales y hasta jornaleros agrícolas, cuyo número era insuficiente para organizar una guerrilla rural. Al inicio, el MLN-T realizó operativos para conseguir armas en los cuarteles y fi-

nanciamiento en casinos y bancos. Esto, porque carecían de un amplio sistema de apoyo que subvencionara al movimiento mediante la compra de bonos o con donaciones, en acciones no siempre bien comprendidas por buena parte de la ciudadanía. Sus hechos de mayor resonancia fueron la breve toma de la ciudad de Pando, así como la fuga masiva de militantes suyos presos en la Cárcel de Mujeres y en el presidio de Punta Carreta. Sin embargo, estas audaces gestas realizadas con extraordinario grado de organización, no bastaban para colocar al país en una situación de guerra revolucionaria. El MLN-T no llegó a convertirse en una fuerza capaz de arrastrar, tras sus objetivos, a la mayoría de la población, lo cual le condujo a su derrota posterior.

En Bolivia, a finales de 1966, Ernesto Guevara comenzó a entrenar su Ejército de Liberación. Estaba compuesto por bolivianos de la tendencia «insurreccionalista» del Partido Comunista —entre los cuales descollaban los hermanos *Inti* y *Coco* Peredo— así como por internacionalistas. Entre ellos se destacaban el peruano Juan Pablo *El Chino* Chang y un selecto contingente de experimentados combatientes cubanos. A finales de marzo del año siguiente comenzaron los combates, caracterizados por golpes precisos y espectaculares, lo cual conmocionó al país. Sin embargo, al poco tiempo el alentador contexto guerrillero empezó a cambiar. La pérdida gradual de hombres se conjugaba con la falta completa de incorporación campesina y con el gradual surgimiento de delatores. Por eso el Che decidió buscar otras zonas de mayor desarrollo político. Para ello dispuso pasar por la Quebrada del Yuro, donde sin saberlo les aguardaba una tropa numerosa del gobierno. En el combate el Che fue herido y quedó indefenso, solo así pudo ser capturado. Luego se le asesinó en el pueblo de La Higuera.

Muchos y heterogéneos revolucionarios se habían empeñado en reproducir la trascendental experiencia de la Revolución Cubana. Unos se apresuraron entusiastas y desorganizados. Otros abrazaban con esperanza el marxismo, separándose de sus partidos burgueses de origen, para crear las organizaciones conocidas como MIR. Algunos admiradores de la Revolución Cubana y su ideología —previamente sin militancia precisa—, impulsaron el surgimiento de los llamados Ejércitos de Liberación. Los comunistas a menudo estructuraron o se incorporaron a las denominadas Fuerzas Armadas, cuyo apellido podía ser de Liberación Nacional, Rebeldes o Revolucionarias. No transcurrió gran lapso, sin embargo, antes de que los convencidos de la concepción científica del mundo entraran en aguda polémica entre sí. Una tendencia defendía la práctica del «foco guerrillero» para iniciar la revolución. Los maoístas esgrimían la guerra popular prolongada del campo a la ciudad. Los trotskistas creían en la autodefensa campesina. Los vanguardistas opinaban, que era privilegio de una élite revolucionaria urbana derribar el régimen burgués. Los militaristas rechazaban la lucha política. Y los oportunistas solo deseaban presionar a la burguesía para arrancarle concesiones. Pocos, en realidad, pensaban en desarrollar una hábil política de alianzas que buscara unificar a las amplias masas así como a las organizaciones democráticas y progresistas o antiimperialistas. La mayoría exigía para cada una de sus organizaciones, el papel hegemónico a priori, sin plantearse lograr ese objetivo a lo largo de una lucha convergente. Así, las pugnas, divergencias, escisiones, trifulcas y desprendimientos se hicieron frecuentes entre una parte de esos revolucionarios, hasta que fueron quedando paralizados, a la vez que sufrían los golpes de las fuerzas represivas.

En ese contexto, en América Latina surgió el nacionalismo revolucionario entre los militares que deseaban hacer más democráticas y justas sus respectivas repúblicas. Sucedió así en República Dominicana, donde el coronel Francisco Caamaño se sublevó en abril de 1965, contra los intentos de restablecer el trujillismo. Ante la desigualdad de fuerzas, Caamaño tomó la trascendental decisión de armar a las masas populares, conducidas con frecuencia por los integrantes del Movimiento 14 de Junio. Vencedor en esos choques armados, el indomable coronel fue electo presidente de la República por el Congreso Nacional. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos ordenó la invasión de la pequeña república antillana por 42 mil marines; «para evitar otra Cuba» —dijo—. Sin perspectivas de victoria en sus enfrentamientos a los agresores, los patriotas tuvieron que aceptar un alto al fuego, que entregaba la presidencia a un dócil moderado y desarmaba las milicias constitucionalistas.

En Panamá, Omar Torrijos y los oficiales que censuraban la represión —a quienes protestaban por la presencia de Estados Unidos en la Zona del Canal—, tomaron el poder en 1968. De inmediato excarcelaron a los antiguos guerrilleros, dictaron medidas progresistas, y con éxito reivindicaron la soberanía nacional sobre la estratégica vía interoceánica.

En Perú, Juan Velasco Alvarado instituyó en octubre de 1968, el gobierno de la Fuerza Armada, y llamó a la ciudadanía a rescatar la dignidad nacional «violada por el imperialismo». El ejército ocupó los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, y sin pago alguno los revirtió al patrimonio estatal. Se iniciaba así el cumplimiento del llamado Plan Inca, diseñado por los generales «cholos» —mestizos— para revolucionar la sociedad. Después se dictó una radicalísima ley de reforma agraria, que terminó con la injusta tenencia de tierra mientras preservaba la

integridad de las grandes unidades productivas, convertidas en cooperativas. Se expropiaron los consorcios norteamericanos. Estos fueron integrados al pujante capitalismo de Estado, que llevaba a cabo más del 50% de las inversiones en el país. Había medio centenar de importantes empresas totalmente públicas en actividades de petróleo, hierro, electricidad, siderurgia, ferrocarriles, comunicaciones, aviación. Y otras 100 tenían participación estatal sobre la mitad de su propiedad. La banca y el comercio exterior tampoco escaparon al dominio del Estado.

Las transformaciones nacionalistas trascendieron el carácter democrático y burgués, cuando en mayo de 1974, Velasco Alvarado anunció nuevas leyes sobre la propiedad. Uno de dichos decretos reestructuraba la economía y convertía al Estado en su pivote principal, preservando bajo su control los servicios básicos y las mayores industrias. Otro decreto, sobre la prensa, entregaba los diez principales periódicos a diversos sectores laborales del país. Entonces algunos antiguos guerrilleros —como el prestigioso Héctor Béjar— se sumaron al proceso, con el propósito de vincular las masas con las diversas instancias del poder.

Pero las últimas disposiciones de la cúspide militar pasaban los límites de lo tolerable para la burguesía, que se incorporó al campo de la oposición. Frente a ese reaccionario peligro, los proclives al progreso se encontraban divididos. No existía una fuerza política común que los aglutinara, ni tampoco los asalariados estaban unificados en una organización sindical. Y el poder seguía siendo militar, con la verticalidad jerárquica tradicional de las fuerzas armadas, cuyos efectivos no habían sido depurados; solo en su cima había un grupo de radicales «generales cholos», decididos a revolucionar la sociedad. En esas circunstancias el general Juan Velasco Alva-

rado enfermó de gravedad. Esto fue aprovechado por grupos moderados de la oficialidad, que llevaron a cabo un sutil golpe de Estado, desplazaron a sus colegas de izquierda, eliminaron cualquier limitación al «gran capital», frenaron la reforma agraria —en seis años se habían repartido siete millones de hectáreas—, reprivatizaron muchas empresas, derogaron el novedoso estatuto de la prensa, reprimieron protestas obreras.

Vía electoral y economía mixta hacia el Socialismo: Allende

En Chile, hacia 1970, la burguesía nacional dejaba de existir ante el vigoroso empuje de los emergentes monopolios criollos. Sin embargo, en el país existía todavía una importante burguesía media, cuyos 32 mil establecimientos recibían poco menos de un tercio de las ganancias, y había también 22 mil pequeños propietarios que a duras penas alcanzaban el 4% del total de los beneficios. El 45% de la población estaba compuesto por proletarios.

El revolucionario programa electoral de la Unidad Popular –UP– con Salvador Allende al frente, aportaba una concepción novedosa sobre la transformación de la sociedad, pues proponía el surgimiento de tres áreas de propiedad bien diferenciadas: la social, la mixta y la privada. En la primera se englobarían las empresas estatales de la Corporación de Fomento así como todos los consorcios criollos y extranjeros que fuesen nacionalizados, además de las riquezas básicas y el comercio exterior. Esto significaba estatizar monopolios y transnacionales, que por sí solos producían el 50% del producto global bruto. Los sectores donde operaba la burguesía media serían considerados como «mixtos», pues en ellos también podrían funcionar dependencias del Estado. En cambio, el «área pri-

vada» de la economía sería de la exclusiva competencia de los pequeño-burgueses. El proyecto político de la UP contemplaba también acelerar la reforma agraria, afectando las grandes propiedades particulares con el propósito de establecer sobre ellas formas cooperativas de producción, y a la vez reorganizar a los minifundistas y defender las comunidades indígenas mapuches. Con ese programa electoral, Salvador Allende ocupó la presidencia el 4 de noviembre de 1970.

De inmediato se expropiaron 350 grandes latifundios que abarcaban tres millones y medio de hectáreas, se amplió el área de propiedad social, se nacionalizó todo el cobre y se logró un 12% de crecimiento industrial en el primer año de la nueva gestión gubernamental. Pero entonces un bloqueo silencioso fue iniciado por Estados Unidos contra Chile. A la vez, en el Congreso chileno la derecha impedía que se aprobara la ley de las tres áreas de la economía; se acusaba al presidente de actuar por encima de la legalidad y querer estatizarlo todo.

En los comicios parciales de marzo de 1973, la Unidad Popular obtuvo el 44% de los votos. Esto convenció a muchos en el ejército de que los procedimientos constitucionales no servirían para detener el proceso de transitar a otra sociedad. Por ello, los más apresurados generales-traidores promovieron que unidades blindadas del regimiento Tacna, llevaran a cabo un fallido intento de golpe militar. A pesar de esto, el gobierno insistió en dejar incólume los mandos y estructuras de las fuerzas armadas. Entonces toda la reacción se sintió segura y pasó a la ofensiva; fue asesinado el edecán presidencial, se obligó a renunciar al jefe constitucionalista del ejército. Y el 11 de septiembre de 1973, —por orden del general Augusto Pinochet— se produjo el ataque al Palacio de la Moneda, donde el

presidente Salvador Allende murió con un arma en las manos. Se evidenció así que la Unidad Popular no tenía un plan de lucha para defender a su gobierno, lo cual posibilitó la rápida victoria de los conjurados. Luego tuvo lugar la más brutal y sangrienta represión.

Renacer guerrillero

En Argentina, a mediados de 1969, las movilizaciones populares contra el ilegítimo régimen militar llegaron a su clímax, al ocupar estudiantes y obreros –en mayo– los barrios céntricos de la ciudad de Córdoba, y extenderse dicho movimiento a Rosario, Mendoza y Tucumán. A la vez se multiplicaban los embates guerrilleros pues habían surgido dos nuevos grupos armados, ambos nombrados Fuerzas Armadas, uno apellidado Rebelde y el otro Peronista. Este ascenso de la multifacética oposición fue combatido mediante los crueles métodos impulsados desde Estados Unidos con su «Doctrina de seguridad nacional», que implicaba el establecimiento del Estado de sitio, la clausura de periódicos y un férreo control sobre la proletaria Confederación General del Trabajo.

El incremento de la lucha acicateó la unión de variadas tendencias revolucionarias, desde marxistas y cristianos hasta «justicialistas», las cuales en 1970, se fundieron en el Movimiento Peronista Montoneros. Este postulaba una amplia alianza antioligárquica encabezada por los sectores populares, que respetaría el pluralismo político pero haría surgir una Argentina antiimperialista. En ella se aplicaría una reforma agraria –en los grandes latifundios–, y mediante la modernización de las tres banderas tradicionales del peronismo se llevaría al país a un socialismo nacional, en marcha hacia la gran Patria Latinoamericana. Simultáneamente, el Partido Revolucionario de los

Trabajadores rompía con la SLATO y creaba el Ejército Revolucionario del Pueblo —ERP—. Dicha organización, al mando de Mario Roberto Santucho, esgrimía la consigna de llegar al socialismo bajo la conducción de la clase obrera en alianza con el semi-proletariado, los campesinos pobres y la pequeña burguesía urbana. Todos eran enemigos —decía— del imperialismo, la oligarquía latifundista y la burguesía criolla monopolista, cuyos intereses serían expropiados al triunfar la revolución.

El segundo «Cordobazo» —en marzo de 1971—, hizo comprender a la alta oficialidad el peligro de recrudecer las medidas represivas; estas solo facilitarían la vinculación de las ascendentes fuerzas guerrilleras con el creciente movimiento de masas. Para evitar la unión de las dos corrientes que confluían, se legalizaron los partidos políticos, se suprimió el odiado Ministerio de Economía, se eliminaron los topes salariales a los trabajadores y se anunció el regreso a la constitucionalidad mediante elecciones.

En contraste, los guerrilleros extendieron sus operaciones por todas las ciudades importantes; los Montoneros, por ejemplo, atentaban contra jefes militares, ajusticiaban a peronistas de la burocracia sindical, recuperaban fondos en los bancos, atacaban guarniciones militares, realizaban sabotajes y acciones de propaganda, trataban de conformar «guerrillas industriales» para boicotear la producción, distribuían alimentos entre los marginados, hasta ocupaban poblados de mediano rango. El ERP, por su lado, tomaba fábricas para explicar a los obreros sus objetivos y distribuirles la prensa clandestina, ocupaba cuarteles para proveerse de armas, protegía manifestaciones, ajusticiaba a esbirros y torturadores, incautaba alimentos que luego distribuía en las «villas miserias», y expropiaba dinero a los grandes bancos. Pero dichas acciones guerrilleras no representaban la vanguardia de

insurrecciones populares; solo eran súbitos ataques sorpresivos que momentáneamente paralizaban a las fuerzas represivas. Después venía el obligado repliegue con su costoso saldo social: muertes, desapariciones y torturas, infligidas a quienes se hubieran solidarizado con los revolucionarios.

Las organizaciones armadas no tenían la capacidad de arrastrar a la mayoría de la población tras sus objetivos. Carecían de una hábil política de alianzas que englobara a las principales clases y grupos sociales; solo nucleaban a los elementos más esclarecidos del proletariado y de la triturada pequeña burguesía. Pocas veces las organizaciones guerrilleras actuaron de forma conjunta, porque la anhelada colaboración sistemática nunca llegó. No obstante, la mayoría de las Fuerzas Armadas Rebeldes y una parte de las Fuerzas Armadas Peronistas se fusionaron con los Montoneros, cuyas filas a su vez se integraron al Frente Justicialista de Liberación, creado por el peronismo para presentarse a los comicios. Su candidato era Héctor Cámpora, quien defendía la nacionalización de la banca, del comercio exterior y de los recursos naturales, así como una reforma agraria.

El aspirante peronista ganó la presidencia en marzo de 1973, y tras ocupar el poder legalizó al Partido Comunista y estableció relaciones con Cuba socialista. Mientras, los Montoneros alcanzaban notable influencia en la Juventud Peronista y comenzaban a implantar una compleja estructura organizativa dentro del Partido Justicialista. Estos acontecimientos hicieron dudar al ERP acerca del camino a seguir; se fusionó con otras organizaciones guerrilleras, y adoptó una posición ambivalente hacia el poder; decía que no atacaría al gobierno pero continuaría combatiendo al ejército y a todas las grandes empresas monopolistas. Esa prolongación del combate guerrillero y la

rápida ascendencia de la izquierda dentro del aparato político del «justicialismo», aterrorizaron a la derecha peronista que en poco tiempo forzó a Cámpora a presentar su renuncia, para que en otros comicios triunfara la candidatura de Perón con su tercera esposa.

En Colombia tuvo lugar un gran fraude electoral el 19 de abril de 1970, en el cual la tradicional oligarquía bipartidista logró que los dirigentes de la novel Alianza Nacional Popular aceptaran —en perjuicio propio— los alterados resultados de los comicios. Esto fue rechazado por los seguidores de Carlos Toledo, quien desde ese momento se dedicó a fomentar la ANAPO-Socialista. A sus filas afluían los discrepantes de las paralizadas fuerzas guerrilleras, en las cuales se debatía acerca de las tácticas a seguir debido a la inversión de la estructura demográfica, pues el país se había convertido en preponderantemente urbano. Gracias a las nuevas incorporaciones, la ANAPO-Socialista se convirtió en el Movimiento Político-Militar 19 de Abril, o simplemente M-19, que se dio a conocer a principios de 1974, cuando en Bogotá ocupó la «Casa de Bolívar». Al mismo tiempo, el Ejército Popular de Liberación, hacía formal renuncia al maoísmo e inauguraba un «frente» urbano.

En las ciudades aumentaba el descontento de los asalariados, cuya dirigencia convocó a un Paro Cívico Nacional en septiembre de 1977, el cual fue sofocado por el gobierno al costo de 100 asesinados. A partir de entonces comenzó la Autodefensa Obrera —ADO—, organización político-militar que deseaba impulsar la guerrilla urbana. Después la misma extendió sus operaciones al campo, con el propósito de estructurar allí las Fuerzas de Autodefensa Populares.

Ante el renacer insurgente, el gobierno emitió un Estatuto de Seguridad el 6 de septiembre de 1978. Paralelamente el ELN

culminó su etapa de autoanálisis crítico e impulsó el surgimiento de bases urbanas a la vez que multiplicó los frentes rurales. Las FARC evidenciaron tal incremento de su capacidad combativa, que formaron un verdadero ejército revolucionario. El M-19 por su parte se dedicó a realizar acciones espectaculares, de gran impacto y repercusión. Por ejemplo, en marzo de 1981, esta organización protagonizó un importante desembarco guerrillero por las costas del Pacífico, cuyos integrantes avanzaron por la selva hasta llegar a Caquetá y Putumayo, donde establecieron nuevos frentes de guerra que más tarde ramificaron hacia Huila y Nariño.

Desde entonces los distintos grupos revolucionarios colombianos fortalecieron su control sobre las vías —fluviales o terrestres—, multiplicaron la toma de poblaciones, así como los ataques a cuarteles y a tropas gubernamentales en desplazamiento. Se evidenciaba de esa manera el avance de los insurrectos en las vastas zonas rurales. Pero en las ciudades, la movilización popular y los combates seguían retrasados.

En 1982, la campaña electoral del conservador Belisario Betancourt giró alrededor de los posibles acuerdos de paz, la desarticulación de las bandas paramilitares y la represión al narcotráfico. Pero dado que el ejército mantuvo sus ofensivas contra las zonas bajo dominio insurgente, la guerra continuó y hasta se hizo más intensa. A pesar de ese agresivo empeño belicista, la insurgencia no alteró su respaldo al desarrollo político de la sociedad, y auspició el surgimiento de la Unión Patriótica, tercera fuerza política en el país, abierta a todos por la amplitud de su programa, sintetizable en tres puntos: depurar las fuerzas armadas para separarlas del narcotráfico y de las bandas paramilitares; dialogar con la guerrilla, como reclamaba la Iglesia Católica; reformar profundamente la Constitución. La respuesta

no se hizo esperar. El 11 de octubre de 1987, el presidente de la UP fue asesinado.

El cuatrienio presidencial de Virgilio Barco se caracterizó por un cambio de estilo en la búsqueda de la paz. Con tal propósito, el mandatario convocó a una reunión cumbre con representantes de la Iglesia, los partidos tradicionales, la UP, diversos movimientos guerrilleros, los sindicatos y grupos indígenas. En ese contexto el M-19 se concentró en el Cauca, declaró un cese al fuego unilateral e inició conversaciones con el gobierno. Todo concluyó con la firma en julio de 1989, de un Pacto Político debido al cual el M-19 abandonaría las armas, se reintegraría a la vida civil y se constituiría en partido legal. Entonces, con el objetivo de impulsar una fuerza capaz de quebrar el tradicional bipartidismo colombiano, el M-19 inició conversaciones con la UP, para acudir a las elecciones generales de mayo de 1990. Dicha estrategia se mantuvo a pesar de los asesinatos —en marzo— del nuevo dirigente principal de la UP y en abril de Carlos Pizarro León, candidato presidencial de la novedosa Alianza Democrática-M-19 (AD-M-19). Después se instalaron comisiones bilaterales de negociación entre el gobierno y representantes de las organizaciones guerrilleras, EPL, PRT y de la indígena Quintín Lame. Luego estos tres movimientos se reunieron con los partidos firmantes del acuerdo para la Constituyente y con enviados de la presidencia, lo cual facilitó el proceso de concentración de los rebeldes, para su desmovilización. Más tarde, muchos de ellos integraron la AD-M-19, y como parte de esta acudieron a las elecciones para la nueva Ley Fundamental. Aunque la nueva Constitución no resultó muy avanzada, su principal logro estribó en contar con disposiciones especiales que facilitaban la reinsertión en la vida civil de los exguerrilleros. Sin embar-

go la lucha armada no se debilitó, pues los vacíos ocasionados por los insurgentes que habían dejado las armas, eran ocupados con rapidez por las dos fuerzas rebeldes subsistentes, recién aglutinadas en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB).

En Perú, el gobierno de los militares conservadores que habían desplazado del poder a los generales «cholos», convocó a una Constituyente en 1978. Entonces grupos que se proclamaban «senderistas», recorrieron las calles de Huamanga llamando al abstencionismo y dando vivas a la lucha armada. Pertenecían a la escisión maoísta del Partido Comunista Peruano, dirigida por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, más conocido como Camarada Gonzalo, favorable a la lucha guerrillera para la toma del poder. Tras años de trabajo clandestino, Guzmán fundó el Partido Comunista por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui (PC-SL), grupo que logró controlar las bases de la militancia en la región de Ayacucho. El PC-SL forjó una rígida, vertical y autoritaria estructura que rechazaba cualquier vínculo con la legalidad, y absolutizaba los preceptos de llevar a cabo una guerra prolongada que fuese del campo a la ciudad. Alegaban que la sociedad peruana era cuasi feudal y semicolonial, por lo que la experiencia china se asemejaba mucho a las necesidades de la revolución en este país andino. Y concluían que la base social del proceso democrático-nacional, antifeudal y contrario al imperialismo, era la alianza de obreros y campesinos, en la cual los proletarios tendrían la dirección con su ideología científica pero cuya fuerza motriz serían los indígenas. Desde el punto de vista internacional, el PC-SL fustigaba al «social-imperialismo soviético», criticaba las posiciones no maoístas de la nueva dirigencia china, y se distanciaba de la Revolución Cubana.

En 1979, Abimael Guzmán logró que el PC-SL aceptara iniciar el combate armado. Su estrategia de lucha comprendía tres fases: boicotear las elecciones presidenciales e impulsar a los campesinos a ocupar tierras; realizar propaganda y agitación así como sabotajes; conformar destacamentos armados y guerrillas. Entonces comenzaron los atentados y sabotajes, hasta ocupar un cuartel de la guardia civil en Tambo, mientras el recién electo gobierno civil proclamaba el «estado de emergencia» en seis provincias. Hacia estas envió los destacamentos punitivos conocidos como Sinchis, temidos por su crueldad. A pesar de ello, se produjo un auge insurreccional que evidenciaba la desesperación de las masas. El PC-SL extendió su radio de acción hacia otras regiones. Hasta Lima, que llegó a sufrir dos gigantes apagones, en medio de los cuales una multitud de teas representando la hoz y el martillo iluminó el imponente cerro de San Cristóbal.

Se llegó a la militarización total de los departamentos de Ayacucho y Andahuaylas, lo cual inició una época de terror, muy acentuado en las provincias de Huamanga, Tuanta, La Mar, Víctor Fajardo y Cangallo. Pero el ejército entendió que su ilimitada violencia reforzaba la voluntad popular de apoyar a los rebeldes, y entonces cambió de estrategia. Al existir heterogeneidades entre las comunidades campesinas, los militares decidieron acicatear la lucha de unos comuneros contra otros, para aislar a los senderistas. Dicha práctica tuvo relativo éxito, facilitada por el dogmatismo maoísta del PC-SL, que aplicaba de manera mecánica la experiencia china. Cuando Sendero controlaba una zona, pretendía imponer un régimen autárquico o de autoconsumo, con el propósito de privar a las ciudades de alimentos y así forzarlas a entenderse con los revolucionarios. No tenían en cuenta los vínculos ya forjados entre campesinos

y comerciantes, lo cual provocaba el disgusto de aquellos —que perdían el mercado— e inducía a estos a comprar en otros sitios; siempre había comunidades dispuestas a vender, o productos enlatados provenientes del exterior que se podían adquirir en la capital. En respuesta, el PC-SL ejecutó a algunos comerciantes, lo cual ahondó el alejamiento de los habitantes urbanos respecto a esta organización. A la vez, el desenfreno campesino daba rienda suelta a su sed de venganza contra quienes siempre los habían oprimido, por lo que aplicaban directamente su propia justicia a jueces, alcaldes, usureros, mayoresales, terratenientes. Sendero además inició la práctica de aplicar represalias contra las comunidades que se hubieran sumado a la estrategia del ejército.

A pesar de todo, en 1984, la guerrilla contaba con más de 200 bases de apoyo como retaguardia segura; en las ciudades se actuaba más abiertamente, y en ellas funcionaban escuelas de entrenamiento. Los insurrectos se estructuraron en un Ejército Guerrillero Popular, que llegó a establecerse en Pasco, Huanuco, Sierra de la Libertad, Leoncio Prado, Anubó, Huanta, Daniel Carrión, Yanahuanca, Yacón, además de las provincias en las que los senderistas operaban anteriormente. También se señaló que en algunas ciudades actuaban destacamentos urbanos, nutridos con desclasados de los barrios marginales, quienes con frecuencia procedían del campo. Asimismo, Sendero llevaba a cabo miles de acciones, como: interrupción de carreteras, ataques a fundos y minas, sabotaje a vías férreas, voladura de torres eléctricas, apagones, embanderamiento de calles con sus distintivos partidistas, enfrentamiento a patrullas del ejército y a «rondas campesinas» o dispositivos paramilitares anti-senderistas, toma de pequeños cuarteles, formación de cientos de Comités Populares en las áreas bajo su poder.

Sin embargo, en Perú, Sendero no era el único empeñado en impulsar la lucha armada; el 6 de noviembre de 1983, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru –MRTA– se había dado a conocer, al provocar la explosión de bombas en el albergue de los U.S. Marines, custodios de la embajada de Estados Unidos. El MRTA se había conformado con oriundos de diferentes sectores de izquierda, principalmente urbanos, que admiraban las revoluciones de Cuba y Nicaragua; anunciaba su propósito de impulsar una adecuada política de alianzas; se proclamaba heredero de próceres o figuras heroicas –desde Bolívar al Che, pasando por Sandino y Martí–. También enarbolaba el marxismo-leninismo –como concepción del mundo enriquecida por José Carlos Mariátegui–, para tomar el poder y construir el socialismo. En 1984, sin éxito, el MRTA intentó formar una guerrilla rural en el Cuzco. Después proclamó una tregua hacia el gobierno, pero precisaron que seguirían hostigando a las empresas imperialistas, a la oligarquía y a las fuerzas represivas. Más tarde los tupacamaristas se unieron con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria –MIR–, que había decidido retomar el combate armado con el nombre de Comandos Revolucionarios del Pueblo. Bajo la sigla conjunta MRTA-MIR, ambos dieron por terminada su compás de espera en agosto de 1986. Luego desarrollaron actividades de propaganda en las ciudades con tomas de estaciones de radio y televisión y distribución de víveres a los habitantes más humildes. Hasta que el 8 de noviembre de 1987, sus efectivos conmovieron al país cuando ocuparon Juanjui –ciudad de 18 mil habitantes, capital de la provincia Mariscal Cáceres–, y a las 28 horas hicieron lo mismo con el poblado de San José del Tezón.

También el MRTA desplegó esfuerzos por acercarse al PC-SL, a pesar de las respectivas discrepancias conceptuales,

estratégicas y tácticas. Incluso gracias al diálogo entre las bases, militantes de ambas organizaciones llegaron a realizar unidas operaciones en Lima. Pero el empuje unitario fue cortado de manera tajante por el ahora llamado Presidente Gonzalo, quien exigió una profunda autocrítica a los que hubieran participado de la referida alianza entre revolucionarios. La cúspide del PC-SL fue muy incisiva hacia lo que denominaba «desviaciones cubanistas», y para ponerles coto llamó a fortalecer el trabajo ideológico maoísta.

En los comicios de 1990, Alberto Fujimori ganó la presidencia y ordenó un incremento en la lucha contra la ascendente insurrección de Sendero y la persistente actividad armada del MRTA. Pero como los empeños por derrotar a los rebeldes no tuvieron las consecuencias deseadas, Fujimori culpó al «democratismo parlamentario» y al poder judicial, de bloquear sus esfuerzos antiinsurgentes. Después, en 1992, el presidente llevó a cabo un «autogolpe» mediante el cual disolvió al Congreso, impuso la censura de prensa, suspendió diversos artículos de la Constitución y de esa forma se hizo con el pleno control del Estado, lo que le facilitó desatar una ilimitada guerra contra los alzados. En ella, el gobierno se anotó una serie de triunfos, pero ninguno tan grande como la captura en septiembre de altos dirigentes del PC-SL, entre los que descollaba Abimael Guzmán. Fujimori alcanzó la cima de su aureola cuando el 17 de diciembre de 1996, un comando del debilitado MRTA ocupó en Lima la embajada de Japón — durante una importante recepción —, y a cambio de evacuarla o liberar a los rehenes, exigió la excarcelación de 440 militantes suyos. El gobierno pareció negociar durante 126 días, hasta que sus tropas especiales asaltaron la referida sede diplomática y dieron muerte a todos los «tupacamaristas».

En julio de 1999, el gobierno quiso dar un nuevo golpe de efecto con la captura del principal dirigente del diezmado PC-SL —Oscar Ramírez Durand o Camarada Feliciano—, pero la lucha antisubversiva no tenía ya la importancia de siete años atrás.

Transformaciones socialistas en Granada: Maurice Bishop

En Granada, como en el resto del Caribe anglófono, durante la Segunda Guerra Mundial se realizó una conscripción generalizada de varones jóvenes, los cuales fueron incorporados al ejército británico. En compensación, el gobierno conservador de Winston Churchill en Londres, emitió una legislación sindical conocida como *Trade Unions and Trade Disputes Ordinance*. La misma equiparaba en derecho las organizaciones obreras de las colonias con las de la metrópoli. De esa forma, dichas agrupaciones se estructuraron con plena legalidad en los territorios de ultramar. Surgió así en Granada la *Trade Union Congress*, que afilió a la mayoría de los proletarios urbanos. Mientras, Eric Matthew Gairy movilizó a los trabajadores rurales y en 1950, creó la *Grenada Manual and Mental Workers Union*. Este sindicato desató exitosas huelgas contra los ricos criollos y los propietarios extranjeros de la industria azucarera. Ello impulsó a Gairy hacia la política, donde participó con su *People's Party*, pronto convertido en *Grenada United Labour Party* –GULP–, que llegó a controlar las instancias autonómicas locales. Pero sus prácticas malversadoras y corruptas desprestigiaron al GULP. A partir de ese momento, pequeños y medianos propietarios ciudadanos –comerciantes al menudeo, artesanos, profesionales pobres– se acercaron al *Grenada National Party* que en 1961,

ocupó el poder. Sin embargo este partido, que respondía a los intereses de los grandes plantadores y comerciantes portuarios, nada hizo por las masas populares. Así, un lustro más tarde, los comicios volvieron a favorecer al GULP. Los electores no sabían que el jefe de esta agrupación se había convertido en dueño de importantes bienes y se relacionaba con grandes propietarios y administradores de negocios foráneos. Incluso era miembro de la exclusiva Cámara de Comercio.

De regreso al cargo, Gairy se apoyó en grupos terroristas como los *Green Beasts* y la *Mongoose Gang* para mantener el poder, lo que le provocó la enemistad de sindicatos, jóvenes, religiosos y hasta de una parte de los pudientes. A pesar del crecimiento del turismo y de ciertas manufacturas, el resto de la economía, así como los campos, se empobrecían; la industria azucarera estaba en ruinas, y sus predios habían pasado a solo 50 propietarios. A su lado apenas quedaban 1 200 pequeños o medianos dueños, y 20 mil minifundistas. En protesta por esos males sociales, representantes de la juventud realizaron manifestaciones contra el tirano, y en 1970, muchos terminaron en prisión, entre ellos Maurice Bishop y Unison Whiteman. Excarcelados al cabo de un año, Bishop organizó el urbano *Movement for the Advancement of Community Effort*, pronto transformado en *Movement for the Assembly of Peoples*. Por su parte, Whiteman creó el *Joint Effort for Welfare Education and Liberation* —JEWEL—, que hacía proselitismo entre los campesinos y jornaleros agrícolas. La confluencia de objetivos entre ambas organizaciones facilitó su fusión. El ahora nombrado *New Jewel Movement* —NJM— emitió en marzo de 1973, un trascendente Manifiesto influido por las prédicas del guyanés Walter Rodney, acerca del *Black Power Movement*, inspirado en la evocadora figura de Marcus Garvey. Sus principales rei-

vindicaciones eran controlar los precios de la ropa, alimentos y otros artículos esenciales; mejorar las viviendas y la salud pública; redistribuir las tierras por medio de cooperativas de al menos una caballería de extensión; fomentar los cultivos alimenticios; instituir seguros, jubilaciones y retiros para los asalariados; establecer sueldos mínimos; democratizar la estructura de la sociedad; sanear la administración gubernamental; nacionalizar los bancos e instituciones conexas; crear un Consejo Nacional de Comercio Exterior. Era un programa revolucionario para transformar la sociedad, susceptible de atraer a campesinos, obreros, jóvenes, pequeños y medianos propietarios y hasta elementos de la burguesía opuestos al dictador.

El trágico «Domingo Sangriento» –18 de noviembre de 1973– marcó un giro en la historia de Granada. Para ese día el NJM había programado el inicio de una huelga general contra el régimen. Pero las fuerzas represivas capturaron a Bishop, Whiteman y demás líderes, a quienes encarcelaron y torturaron. A partir de entonces Gairy abandonó la demagogia y solo se apoyó en sus bandas terroristas. También impidió que políticos progresistas fuesen electos al Parlamento de la isla, independizada en 1974. Entonces el NJM orientó a sus militantes prepararse para la lucha armada. Esta se inició cuando el tirano y sus principales ministros viajaron al exterior en uno de sus acostumbrados viajes de placer.

El 13 de marzo de 1979, decenas de combatientes se lanzaron al ataque de la sede del ejército en el cuartel *True Blue*, que fue tomado en una hora. Al decir de Fidel Castro: «Un Moncada exitoso iniciaba una gran revolución en este pequeño país».

El Movimiento de la Nueva Joya organizó milicias populares y el *People's Revolutionary Army*, nacionalizó las propie-

dades de Gairy y estableció relaciones con Cuba socialista. El Estado llegó a poseer un 40% de la tierra cultivable, tres hoteles y diversas pequeñas empresas y restaurantes. Además, monopolizaba la importación de insumos vitales como azúcar y arroz, cuyos precios de venta al público disminuyeron. Al mismo tiempo se saneó y democratizó la administración gubernamental; se lanzó una campaña alfabetizadora; se mejoró la educación pública; se centuplicó el número de estudiantes universitarios; se inauguraron escuelas de pesca y turismo. Con la ayuda de médicos cubanos se pusieron en funcionamiento dispensarios gratuitos en la capital y el interior. Se construyeron fábricas para procesar productos del agro. Ese conjunto de medidas hizo disminuir el desempleo. Y se inició la construcción del aeropuerto internacional en Point Salines, imprescindible para el progreso del país.

Pero en el seno del Movimiento de la Nueva Joya había contradicciones políticas. Dentro del Comité Central del Partido, Maurice Bishop se enfrentaba a elementos ultraizquierdistas que en dicha instancia alcanzaron la mayoría, lo destituyeron y arrestaron. A la semana, los trabajadores se percataron de la ausencia de su líder y declararon una huelga general, lanzándose a las calles en reclamo del desaparecido Bishop. Después, una imponente manifestación lo puso en libertad y marchó tras él, hacia la principal instalación militar de la isla. Allí los masacraron. Junto a Bishop y Whiteman murió mucha gente anónima, y los mejores dirigentes del país. Entonces el presidente Reagan ordenó invadir Granada. Allí colaboradores cubanos —médicos, maestros, técnicos, y sobre todo constructores del aeropuerto— se prepararon para resistir la agresión y luchar si eran agredidos.

El 25 de octubre de 1983, la invasión estadounidense comenzó. Tres horas después tropas élites atacaron al personal cubano, que solo tenía armas ligeras. Los colaboradores internacionalistas combatieron con fervor, lo que hizo lento el avance norteamericano. En la última trinchera, al día siguiente, quedaban menos de 50 cubanos. Contra ellos se lanzó la 82 División Aerotransportada, que tardó más de 24 horas en reducirlos.

La victoria sandinista y su influjo

En Nicaragua, el terremoto que asoló a Managua en diciembre de 1972, fue la línea divisoria tras la cual empezó la descomposición del somocismo; sus más encumbrados representantes habían convertido la reconstrucción del país en un negocio particular, en perjuicio de los demás grupos burgueses. Por entonces el FSLN se presentaba ya como una fuerza organizada, capaz de atraer a los descontentos, y cuyas acciones guerrilleras alcanzaban cada día mayor importancia. Su área de operación llegaba hasta la región de Ziniga, en el departamento de Jinotega, zona montañosa central del país, donde numerosos campesinos afluían a las filas rebeldes. Al mismo tiempo, las duras normas de compartimentación y clandestinidad tornaban muy difíciles los contactos entre las dirigencias revolucionarias de las distintas regiones. Eso facilitó que surgiera la Tendencia Proletaria, cuyos integrantes deseaban incentivar la lucha de los pobres en las ciudades, al estimar que la clase obrera urbana debía ser mejor organizada así como fortalecer el partido, para con su labor desarrollar la conciencia de las masas y conducir las hacia un proceso insurreccional. Y poco después de la muerte en combate de Carlos Fonseca Amador —noviembre de 1976— culminó la eclosión sandinista, al aparecer la Tendencia Tercerista, que insistía en la conveniencia de unir a todos los sectores, grupos y clases sociales opuestos al régimen, bajo la hegemonía armada y partidista del FSLN.

Fue también durante 1977, cuando la guerrilla pudo superar sus prácticas defensivas, al tomar los estratégicos cuarteles de San Carlos, Masaya y Ocotal, e impulsar los combates por las montañas del Norte —Estelí, Matagalpa, Waslala— y hasta por las serranías cercanas a la capital. Entonces el somocismo decidió dar un escarmiento a sus enemigos. En enero de 1978, asesinó al destacado dirigente conservador Pedro Joaquín Chamorro, dueño del principal periódico del país, quien había denunciado toda la corrupción del régimen. Esto impulsó a los revolucionarios a entrar en contacto con los tradicionales partidos opositores mediante el Grupo de los Doce.

La toma del Palacio Nacional el 22 de agosto de 1978, demostró quién era la vanguardia y decidió al FSLN a llamar en septiembre a la insurrección general. La multiplicidad de acciones urbanas y rurales, fuesen civiles o militares, evidenciaba la riqueza analítica de las tres corrientes del sandinismo. Falta, sin embargo, una óptica totalizadora o de conjunto que elaborase un proyecto común hacia la toma del poder. Hasta que en diciembre de 1978, se publicó un trascendental comunicado, mediante el cual se anunciaba la reunificación del FSLN para incrementar el batallar sincronizado, que tendiese hacia el triunfo definitivo por medio de simultáneas ofensivas guerrilleras en las montañas, sublevaciones en las ciudades, y una huelga política general. Con el propósito de alcanzar esta elevada coordinación, que exigía un mando único, se constituyó en marzo de 1979, la Dirección Nacional Conjunta del FSLN presidida por Daniel Ortega, la cual emitió un Plan General de Insurrección. El 4 de junio se decretó la huelga política general, que paralizó la vida económica del país. Cinco días más tarde estallaba en Managua la insurrección y el 17 se conformaba el Gobierno Provisional de Reconstrucción Nacional. Era el punt-

llazo final; los restos de la Guardia Nacional, en fuga, por todas partes se rendían.

El nuevo equipo gubernamental proclamó cuatro principios rectores: no alineamiento internacional; relaciones con todos los países del mundo; autodeterminación de las naciones; estatización de los bienes de Somoza, así como la banca, el comercio exterior, la minería y las tierras ociosas. Este programa de liberación nacional obtuvo tanto apoyo, que hasta la OEA rechazó un proyecto de fuerza interventora ideado por Estados Unidos. Después, el 19 de julio de 1979, los sandinistas ocuparon la capital y en ella establecieron la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que nacionalizó el comercio exterior y el sistema bancario, estableció una política tributaria nueva —que descontaba a los burgueses el 40% de sus ganancias—, e impulsó la reforma agraria. Esta expropió el 31% de todas las tierras del país que habían sido de las familias de Somoza y sus allegados, así como las abandonadas u ociosas, las cuales fueron distribuidas en parcelas y luego agrupadas en cooperativas o estatizadas, acorde con las condiciones específicas del lugar. Con los intereses nacionalizados se constituyó el Área de Propiedad del Pueblo, que en 1982, aportaba el 40,8% del producto interno bruto, generado en unas dos mil empresas agropecuarias y cerca de 90 fábricas o manufacturas. Así, a pesar de que el sector privado era mayoritario en la economía, el estatal se había convertido en una pieza clave de esta, pues regulaba la actividad productiva, la de distribución y la inversionista.

El sandinismo, que defendía la Patria y sus conquistas populares, convocó a los comicios antes prometidos, para elegir una Constituyente y el poder ejecutivo. Y aunque en la República funcionaban 11 partidos políticos, que representaban desde liberales y conservadores hasta socialcristianos, el FSLN obtuvo

un arrollador triunfo electoral e inauguró una estable vida constitucional, caracterizada por sucesivos períodos presidenciales. Pero la mejoría económica experimentada por Nicaragua, se vio afectada por la agresividad imperialista. El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, ordenó que la CIA minara puertos y saboteara industrias; estableció bases norteamericanas en la vecina Honduras; engendró las bandas mercenarias de «contras», que incursionaban dentro del país asesinando gente y asolando bienes. Dicho proceso injerencista fue incluso prohibido por el Congreso estadounidense, y al ser burlado por el ejecutivo, dio lugar al escándalo llamado «Irán-Contras».

En ese conflicto armado, el relativo equilibrio alcanzado entre las partes condujo en febrero de 1987, a un acuerdo de cese al fuego. Este dispuso el desarme de las fuerzas irregulares, la suspensión de toda ayuda militar extra regional y la reconciliación nacional. Ello implicaba una acrecentada lucha política, pero no militar, lo que permitía la supervivencia del proceso nicaragüense pues no pedía renunciar a la soberanía nacional ni a la autodeterminación del país. Pero en los comicios generales de 1990, se produjo la sorprendente victoria de la Unión Nacional Opositora, que una vez en el gobierno redujo el ejército y suprimió el polémico Servicio Militar Obligatorio. Desmanteló el Área de Propiedad del Pueblo y las empresas que habían sido nacionalizadas, las privatizó en un proceso conocido como «La Piñata», por la arrebatifiña que engendró. Surgieron así, en lugar de las 300 compañías estatales antes existentes, una multitud de pequeñas empresas privadas.

En El Salvador, durante la mal llamada Guerra del Fútbol que tuvo lugar en 1969, el represivo gobierno oligárquico obtuvo el apoyo de todos los partidos, incluido el de los ilegalizados comunistas. En esta organización, dicha postura originó

gran polémica, por lo que parte de la militancia se escindió para fundar las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí –FPL–. En estas se esgrimió la lucha armada prolongada como vía para llegar al poder. Poco después, el vergonzoso fraude electoral de 1972, motivó que jóvenes del burlado Partido Demócrata-Cristiano abandonaran la agrupación, para unirse a disidentes de la Juventud Comunista y crear el Ejército Revolucionario del Pueblo –ERP–. Pero en este surgieron discrepancias entre quienes preferenciaban la acción militar y los que deseaban impulsar la movilización de las masas. Estos crearon entonces el Frente de Acción Popular Unificada –FAPU–, que también heredaba a antiguos afiliados de la Unión Nacional Opositora, despojada de su victoria en las urnas un par de años atrás. En 1975, militantes del FAPU estructuraron las Fuerzas Armadas de Resistencia Nacional –FARN– a la vez que surgía el Bloque Popular Revolucionario –BPR–, que abarcaba a sindicalistas, jornaleros agrícolas, educadores, campesinos. Dos años más tarde, la sangrienta represión gubernamental a una pacífica manifestación opositora originó el surgimiento de las Ligas Populares 28 de Febrero –LP-28–, que englobaban a universitarios, campesinos y obreros.

La trascendental victoria sandinista conmovió a Centroamérica, y en especial a El Salvador. Allí, el 15 de octubre de 1979, un grupo de jóvenes oficiales llevó a cabo un exitoso golpe de Estado, y sus realizadores llamaron a todas las organizaciones políticas y sociales a respaldar una Junta Revolucionaria de Gobierno, integrada por militares y civiles. Esta recibió el apoyo de sindicalistas, profesores, industriales, socialdemócratas, así como de la Democracia Cristiana y del arzobispo de la capital. Pero en el ejército, la oficialidad «dura» desplazaba sin cesar a la «progresista», por lo que la mayoría de los civiles

se retiró de la Junta, que fue transformada en exclusivamente Militar-Democrisiana. Esta se comprometió a expropiar los predios superiores a 500 hectáreas, con lo cual se liquidaría a la oligarquía latifundista dominada por las «Catorce Familias»; nacionalizar la banca y el comercio exterior de los productos tradicionales; elevar el nivel de vida de las masas; implantar un régimen pluralista. En tres meses, los primeros postulados comenzaron a ponerse en práctica, pero los dos últimos brillaban por su ausencia, pues la economía se deterioraba y la ultraderechista represión paramilitar llegaba al paroxismo. Su clímax tuvo lugar cuando el exmayor Roberto D'Aubuisson ordenó la muerte del arzobispo Arnulfo Romero.

En respuesta al proceso reformista-represivo que tenía lugar bajo la Junta Militar- Democrisiana, los revolucionarios iniciaron su unificación. A comienzos de 1980, las FPL, las FARN y el Partido Comunista —plenamente incorporado a la lucha bajo la conducción de Schafik Jorge Hándal— constituyeron la Dirección Revolucionaria Unificada —DRU—. Después, las BPR, FAPU, LP-28, la comunista Central Unitaria Sindical, el Partido Unión Democrática Nacionalista y otras fuerzas, formaron la Coordinadora Revolucionaria de Masas —CRM—. Y el 1ro. de abril, el Movimiento Nacional Revolucionario, el Movimiento Popular Social Cristiano, técnicos, profesionales, educadores, pequeños empresarios, daban vida al Frente Democrático Salvadoreño —FDS—. Al cabo de dos semanas, la unión del FDS y de la CRM engendraba al Frente Democrático Revolucionario —FDR— presidido por Guillermo Ungo. Por su parte, en diciembre la DRU se integró con el ERP y el Partido Revolucionario de los Trabajadores en el frente Farabundo Martí de Liberación Nacional —FMLN—, que a su vez se asoció con el FDR mediante una Comisión Político-Diplomática.

Culminada su forja unificadora, el FMLN lanzó el 10 de enero de 1981, una ofensiva militar para sublevar a las masas y con ellas erigir un ejército popular. Aunque en las ciudades los combates no prosperaron, en el campo las filas insurrectas se multiplicaban, y los sublevados pasaron de acciones bélicas aisladas a operaciones planificadas a escala nacional. Por ello se convirtieron en una fuerza político-militar, que dominaba vastos territorios en los departamentos de Morazán, Chalatenango, Cabañas, Usulután y la Unión. También era notable el control rebelde en la zona de Suchitoto-Guazapa y en la del volcán Chichontepeque. Entonces, desde las áreas rurales, el FMLN comenzó a llevar a cabo incursiones militares sobre algunas importantes ciudades, cuyo peldaño más alto se alcanzó en la villa de Usulután, ocupada parcialmente durante casi una semana. Pero ahí el avance revolucionario se detuvo, pues no se produjo el anhelado proceso insurreccional ciudadano, lo cual condujo al movimiento guerrillero a reflexionar acerca del futuro.

El ejército salvadoreño no logró desalojar a los sublevados de sus bastiones, muy fuertes sobre todo en la franja norteña del país. Carente de un triunfo militar, la Junta convocó entonces a una Constituyente cuya presidencia terminó en las manos de D'Aubuisson. Este animaba a la oficialidad a rechazar las negociaciones ofrecidas por el FMLN, pues aseguraba que el creciente apoyo de Estados Unidos brindaría la victoria en los campos de batalla. Pero no obstante la voluminosa ayuda militar norteamericana, a principios de 1982, la guerrilla superó la fase de estancamiento y lanzó una serie de ofensivas. Se tomaron decenas de poblados, se sitiaron las ciudades de Suchitoto y Tejutla, y se ocupó la de Berlín. Y en diciembre se arrasó el cuartel de la cuarta brigada de infantería —la más importante del norte de El Salvador— situado en Chalatenango. Dichas

instalaciones castrenses cayeron totalmente en manos rebeldes. La debacle ocasionó a las fuerzas gubernamentales más de 300 bajas entre muertos o heridos, y 200 prisioneros. El resto de la tropa, con sus oficiales, huyó en vergonzosa desbandada.

Los propios éxitos insurgentes demostraban, sin embargo, que el futuro del FMLN no concernía básicamente a la guerra, sino al espinoso problema de la estrategia a seguir respecto a la política de nuevas alianzas. Esto se evidenciaba en la creciente pugna que oponía a dos de sus principales dirigentes, pues Salvador Cayetano Carpio y Mélida Anaya Montes —comandantes Marcial y Ana María—, defendían puntos de vista opuestos. Aquel sostenía posiciones de militarismo vanguardista, contrarias a las de ella, quien apoyaba la lucha por reivindicaciones populares. Anaya estimaba que estas serían capaces de reiniciar el movimiento de masas en las ciudades, y de implementar un entendimiento con sectores sociales no incorporados aún al combate revolucionario. Hasta que derrotado políticamente en el seno de su organización, Cayetano instigó el asesinato de Ana María, para luego —desesperado— suicidarse.

Terminada la Constituyente, se celebraron elecciones en las que triunfó José Napoleón Duarte, fundador de la Democracia Cristiana. Este dispuso un gran empeño guerrerrista gracias a la abundante ayuda bélica estadounidense, pero no pudo derrotar a la insurgencia. Entonces dio un giro y aceptó el reiterado planteamiento del FMLN, concerniente a una salida negociada al conflicto. Se produjo así una entrevista entre ambas partes, en la cual se acordó crear una comisión bilateral encabezada por un obispo. Sin embargo, esto no detuvo al ejército, que a fines de año lanzó una gigantesca ofensiva con más de cinco mil soldados, la cual no alcanzó sus objetivos. Entonces el FMLN reanimó el accionar de masas en las ciudades, cuyas manifes-

taciones de protestas se vincularon con el rechazo de los empresarios hacia el nuevo «impuesto militar para financiar la guerra». Y todo desembocó en la huelga nacional del 22 de enero de 1987. Se evidenció que el gobierno comenzaba a quedar aislado. Estados Unidos entonces aumentó su ayuda al régimen democristiano hasta la astronómica cifra de tres mil millones de dólares anuales. Pero eso tampoco detuvo a la insurgencia, que el 31 de mayo volvió a destruir la reconstruida fortaleza en Chaltenango. Luego le tocó el turno al Cuartel General del ejército en la propia capital, lo que hizo ver que la balanza militar se inclinaba a favor de los rebeldes. En ese favorable contexto el FMLN renovó su ofrecimiento de darle una salida política al conflicto, lo cual destrabó las negociaciones que al reiniciarse incluyeron aspectos como un cese al fuego bilateral, una Comisión Nacional de Reconciliación, y amnistía para ambos contendientes.

El candidato de Acción Republicana Nacionalista – ARENA – Alfredo Cristiani, ganó las nuevas elecciones presidenciales e inmediatamente reconoció al FMLN como legítimo beligerante e interlocutor necesario en la búsqueda de una solución negociada. Por ello, en septiembre de 1989, el gobierno y los rebeldes se reunieron en México y acordaron impulsar un proceso de diálogo constante, aunque sin detener las hostilidades. Estas alcanzaron su cima a los dos meses, cuando el FMLN lanzó su mayor y casi indetenible ofensiva, a pesar de lo cual no se produjo una insurrección generalizada. Así todos se convencieron de que resultaba imprescindible encontrarle una salida política al conflicto armado.

En 1991, un fracasado intento de golpe de Estado debilitó al sector del ejército más opuesto al entendimiento con el FMLN, lo cual fortaleció el diálogo. Hasta que ambas partes firmaron un

acta con acuerdos definitivos donde se precisaba que el cese de la guerra comenzaría el 1ro. de febrero de 1992. El Tratado de Paz también establecía el desarme de los guerrilleros, la depuración del ejército, la creación de una policía civil nueva. Asimismo definía las garantías para que el FMLN se transformara en partido político, con derecho a participar en todos los aspectos de la vida del país. Una era nueva comenzaba para El Salvador.

El triunfo de la Revolución Sandinista impulsó en Guatemala el reinicio de la lucha guerrillera. Entonces las Fuerzas Armadas Rebeldes y el Ejército Guerrillero de los Pobres se vincularon a una pequeña escisión del Partido Guatemalteco del Trabajo, dispuesta a sumarse al combate armado urbano. Y en febrero de 1982, esos grupos insurrectos, más la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas, se integraron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca —URNG—. A partir de ese momento los choques armados fueron cada vez más sangrientos. En respuesta, el general Efraín Ríos Montt reorganizó el ejército y la policía; instituyó tribunales especiales con poderes para dictar penas de muerte; acometió la táctica de tierra arrasada en el Altiplano, a cuya población se le reconcentró en las llamadas «aldeas estratégicas»; creó «patrullas civiles» de aborígenes encabezados por enriquecidos caciques, para oponerse a cualquier avance revolucionario.

La violencia de la guerra, sin embargo, no inclinó la balanza a favor del gobierno, por lo que dentro del ejército —que dirigía el país desde hacía 20 años— los elementos políticamente más avanzados de la oficialidad comprendieron la necesidad de devolverle a la república una conducción civil. Recurrieron para ello a la Democracia Cristiana, que nunca había participado del poder, e incluso hasta había sufrido alguna persecución. Entonces, sin abandonar las armas, la URNG aprovechó

la oportunidad y a fines de 1986, propuso la celebración de conversaciones de paz. El nuevo mandatario aceptó, pero esto ocasionó una fisura en el ejército, ya que los llamados «Oficiales de la Montaña» se oponían al proceso negociador. Ante los reiterados intentos de golpe de Estado de ese grupo ultraderechista, el gobierno abandonó las conversaciones directas. Entonces organizó una Comisión Nacional de Reconciliación –CNR– para mantener los contactos con la insurgencia. Se inició así un llamado Diálogo Nacional, gracias al cual la CNR y la URNG sostuvieron reuniones en Oslo, Noruega. Tras ellas, en marzo de 1990, ambas partes firmaron el Acuerdo básico para la búsqueda de la paz por medios políticos. Este engendró un «conciliador» –el Obispo de Guatemala– y estableció la presencia de un observador de la ONU. Después se decidió que las negociaciones se desarrollaran dentro de los parámetros constitucionales; se iniciara un proceso para reformar las instituciones así como la propia Ley Fundamental y se impulsaran medidas políticas para incorporar la guerrilla a la plena vida legal en la sociedad.

En 1991, Jorge Serrano –quien había sido miembro de la CNR– ocupó la primera magistratura bajo el lema de «Paz total para la nación». Durante su mandato propugnó el cese inmediato de los combates; la desmovilización de los alzados y su reincorporación a la política; programas para alcanzar alguna equidad en la vida social y económica. Esos propósitos abrieron las puertas a negociaciones directas entre el gobierno y la URNG. Pero al poco tiempo, el autogolpe de Estado promovido por el propio Serrano, detuvo todo el proceso de diálogo. Eso condujo a un reordenamiento institucional, que llevó a la presidencia a Ramiro De León Carpio, quien reanudó las conversaciones bajo un proyecto llamado Plan Nacional de Paz. Además

se convocó a la ONU como tercera parte, junto a los beligerantes. Las gestiones de ese organismo internacional desembocaron en un «Acuerdo marco para la reanudación del proceso de negociación entre el gobierno de Guatemala y la URNG», en 1994. Después se firmaron dos convenios: el «Acuerdo global sobre derechos humanos» y el «Acuerdo calendario de las negociaciones para una paz firme y duradera en Guatemala». Más tarde se concluyó un «Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca». La principal dificultad estribaba en el reconocimiento de los «derechos indígenas», cuyo texto finalmente fue rubricado. El mismo reconoció a Guatemala como país multiétnico, pluricultural y multilingüe. Meses después — con Álvaro Arzú en la presidencia —, se proclamó el cese al fuego y concluyeron las operaciones bélicas. El 29 de diciembre de 1996, en Ciudad de Guatemala se firmó el «Acuerdo de Paz Firme y Duradera», que ponía fin al prolongado y cruel conflicto, que había ocasionado más de 200 mil muertos.

A mediados de 1997, se constató que la prometida reforma constitucional no avanzaba, debido a la aguda lucha política entre sus partidarios y detractores. Hasta que al año el Congreso la validó, lo cual implicaba transformar 47 artículos del referido texto básico republicano. Pero en enero de 1999, la Corte de Constitucionalidad Nacional suspendió la aplicación de gran parte de los referidos acápites, a la vez que el Tribunal Supremo Electoral convocaba a la ciudadanía a un referéndum, para ratificar o revocar en bloque las mencionadas reformas. Y en esas circunstancias, el Congreso tampoco aprobó las alteraciones a la Ley Electoral y de los Partidos Políticos, planteadas en los Acuerdos de Paz. Además, los resultados del referén-

dum fueron adversos —por un 56%—. El Tribunal Supremo los validó, a pesar de que la participación de votantes apenas había sido del 18% de aquellos con derecho al sufragio, y de que menos de la décima parte de los indígenas —dos tercios de la población guatemalteca— estaban empadronados para las elecciones. Así, aunque la lucha armada cesó, no se conformaron los parámetros legales para que emergiera una sociedad mejor.

Foro de Sao Paulo y Socialismo del siglo XXI

Fidel Castro se propuso que la América Latina superase las consecuencias políticas de la desaparición de la Unión Soviética. En ese empeño, concibió un movimiento que aglutinase a la mayor cantidad posible de revolucionarios y demócratas. Por ello invitó a Cuba al prestigioso Luiz Inácio Lula da Silva, fundador del Partido de los Trabajadores del Brasil —PT—. Ambos acordaron convocar a un encuentro de organizaciones políticas de izquierda latinoamericanas y caribeñas, cuya primera reunión se realizó en Sao Paulo en 1990.

Allí, durante tres días se debatió sobre los avances del neoliberalismo en el subcontinente, así como acerca de la crisis del llamado «socialismo real». Se denominaba así al fallido modelo soviético, estatista, burocrático y monopartidista. Sin embargo, el principal objetivo de este mecanismo de concertación del amplio y diverso conglomerado progresista, consistía en demostrar que existían en la región posibilidades para impulsar procesos de una mayor justicia social e igualdad de oportunidades.

El Foro de Sao Paulo señaló al imperialismo de Estados Unidos como el enemigo fundamental de los pueblos de América Latina. También acordó que los distintos movimientos u organizaciones aceptaran sus diferencias, y recurrieran al diálogo para superarlas, en búsqueda de posiciones comunes en el camino a sociedades superiores o alternativas al capitalismo. Esto, sin

rutas preestablecidas ni modelos únicos. Se planteó, además, que el recurso estratégico para preservar los referidos cambios debería ser la integración plena de los países latino-caribeños. Los asistentes reconocieron que el mayor reto para todos, radicaba en lograr la más amplia unidad con el propósito de llegar al poder. No como objetivo, sino como instrumento, para rescatar las soberanías nacionales e implementar continuos avances sociales. Así, el post-neoliberalismo llegaría a transformarse en lucha anticapitalista, orientada al nuevo socialismo. El Foro desde entonces se convirtió en el principal instrumento de articulación progresista en el mundo.

Sus enunciados calaron profundamente en la izquierda latinoamericana, que rechazaba el predominio del mercado y la lógica monopolista de maximizar las ganancias. Los gobiernos neoliberales, al formular sus políticas públicas, habían incrementado las quiebras y desaparecido los ahorros de pequeños y medianos empresarios, a la vez que multiplicaban el desempleo en campos y ciudades. Estos regímenes habían desregulado la economía para incentivar la especulación por encima de las actividades productivas; promovido el librecomercio; privatizado empresas públicas —por debajo de su valor real—; desnacionalizado las riquezas naturales; aplicado medidas deflacionarias, en lugar de reactivar la economía por medio de gastos gubernamentales. La incisiva crítica al neoliberalismo por el proyecto de «Socialismo del siglo XXI», atraía a las antioligárquicas clases populares. Este, a la vez, pretendía tranquilizar a la «clase media» pues respaldaba la permanencia de los productores privados medianos, así como los mecanismos electorales multipartidistas de la llamada «democracia representativa». Esas novedosas concepciones también recuperaban el patriótico legado histórico latinoamericano, reivindicaban

los valores culturales indígenas, e incorporaban las precedentes prácticas de colaboración social del nacionalismo populista. Parecería que se retomaban las proyecciones de los «frentes populares» concebidas otrora por los comunistas, para aliarse con los sectores progresistas de la burguesía y enrumbarse hacia una sociedad más humana. Pero este nuevo programa no sería dirigido por sector alguno de la burguesía, sino por los componentes más revolucionarios de la sociedad, deseosos de conducir de manera paulatina e ininterrumpida, los cambios hacia un mundo mejor.

Los propugnadores de este innovador programa político conformaron partidos de masas, que luego estructuraron alianzas o coaliciones con otras fuerzas progresistas. Estas rivalizaron exitosamente con los conservadores y neoliberales en las sistemáticas elecciones pluripartidistas, o en las convocatorias a referéndums para asegurar trascendentes transformaciones constitucionales. Al mismo tiempo, fomentaron en los barrios —y a veces en algunas fábricas— el autogobierno local mediante consejos comunales no partidistas, para eludir la tradicional burocracia, ineficiente, hostil y corrupta. Después financiaron gran cantidad de programas destinados a elevar el nivel de vida de la población más humilde: obreros, trabajadores autónomos, pobres y desempleados, madres solteras, campesinos. Dicha práctica incluía una vasta atención médica —realizada con frecuencia por cubanos— y el acceso a la educación hasta la universidad, ambas con carácter universal y gratuito. Aunque se expropiaron empresas claves sobre la base de consideraciones políticas o pragmáticas —como las engendradas por conflictos obrero-patronales o en busca de una seguridad alimentaria—, dichos regímenes mantendrían una economía mixta, con un sector privado que seguiría siendo

importante en bancos, agricultura, tiendas y comercio exterior. Sin embargo, no sería inusual que el Estado poseyera el sector de exportación más lucrativo y la principal fuente de ingresos en divisas, o que la propiedad pública se incrementara. Quienes se enrumbaran por ese camino, multiplicarían los gastos sociales —escuelas, policlínicas, carreteras, viviendas, agua, electricidad— y elevarían los salarios mínimos. Asimismo promoverían las libertades individuales y los movimientos sociales, así como los procesos electorales. Todo, con enorme tolerancia en los debates públicos durante las elecciones competitivas entre los partidos políticos. Esto, sin desmedro de representar un muro de contención al intervencionismo de Estados Unidos, establecer el control estatal sobre los recursos nacionales, y enaltecer la soberanía de las repúblicas. A la vez, impulsarían al máximo la integración latinoamericana.

Hugo Chávez en Venezuela

En América Latina, paulatinamente, gobiernos partidarios de las nuevas concepciones de la izquierda fueron surgiendo. Sucedió así en Venezuela, donde el 6 de diciembre de 1998, el Polo Patriótico ganó las elecciones con la candidatura de Chávez y su proyecto populista revolucionario, que reconocía el apego de las masas a la democracia representativa sin que ello significara una adhesión al caduco modelo económico y político del «puntofijismo». Hugo Chávez ocupó la presidencia a principios de 1999, y de acuerdo con lo prometido, disolvió el Congreso para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En esta, sus partidarios obtuvieron 120 de 131 escaños.

La nueva Carta Magna fue aprobada en referéndum, a finales del propio año, por el 71,9% de los votantes. Surgió así la República Bolivariana de Venezuela. Esta, reforzó el poder ejecutivo; estableció un mayor control estatal sobre la economía y los medios de comunicación; llamó a forjar una sociedad democrática, participativa, protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado; eliminó al Senado y creó un legislativo unicameral; convocó a nuevas elecciones generales.

En los comicios del 30 de julio de 2000, el Polo Patriótico alcanzó la mayoría absoluta en el Parlamento y Chávez volvió a ser electo. Este clamó entonces por realizar profundas transformaciones socioeconómicas y en la administración pública,

por lo que solicitó poderes especiales al Congreso, que le otorgó la denominada Ley de Habilitación. Esta lo facultaba para llevar a cabo, durante un año, los anhelados cambios mediante decretos. Por ello, en noviembre de 2001, el gobierno aprobó 49 disposiciones trascendentales, sobre todo la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario —que permitía expropiar latifundios—, y la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que fijaba en 51% la participación estatal, y grababa con un impuesto del 30%, las utilidades de los extranjeros en dicho rubro.

El sector empresarial, guiado por la propaganda de los medios masivos de comunicación, desencadenó fuertes protestas públicas. La organización patronal FEDECAMARAS (Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela) y la ADECA Confederación de Trabajadores (CTV) —presididas respectivamente por Pedro Carmona y Carlos Ortega— convocaron a un paro nacional de 12 horas, el 10 de diciembre. Tras semanas de fuertes luchas callejeras, la CTV proclamó un cese laboral indefinido, el 9 de abril de 2002, con el objetivo de derribar al gobierno. A los dos días, el jefe de las fuerzas armadas falsamente anunció que Chávez había renunciado, y Carmona asumió la presidencia. Este disolvió todos los poderes públicos y dejó saber que al cabo de un año habría nuevas elecciones.

Hugo Chávez estuvo depuesto y preso 48 horas, pero el 13 de abril de 2002, el pueblo se lanzó a las calles exigiendo su retorno. A la vez, los militares institucionalistas lo excarcelaron y condujeron de regreso al palacio de Miraflores. Entonces la heterogénea oposición, que se aglutinaba en la mal llamada Coordinadora Democrática, preferenció la paralización de la economía, y en primer lugar de la estratégica industria petrolera. Para ello diseñó una huelga general en la empresa esta-

tal Petróleos de Venezuela (PDVSA), gracias al apoyo de la mayoría de los elitistas gerentes —con sueldos fabulosos— y una parte de la aristocracia obrera, que aún disfrutaba de los injustificables privilegios concedidos durante la era del auge petrolero puntofijista.

Así, a principios de diciembre de 2002, a la vez que la alta jerarquía de PDVSA abandonaba sus funciones, comenzaban los sabotajes a equipos estratégicos así como el cese del transporte de combustible por mar y tierra. Pero la decisiva respuesta de las fuerzas armadas y el fundamental respaldo de asalariados, humildes y desposeídos, venció gradualmente el propósito reaccionario de quienes ya antes habían fallado con el golpismo. A principios de 2003, la normalidad se recuperó en la vida del país, cuyo proceso revolucionario bolivariano emergió fortalecido de la confrontación. Esto se evidenció en las elecciones de 2004, conocidas como Referendo Revocatorio —que más bien fue de Ratificación— y para gobernadores estatales y alcaldes, que dieron un aplastante y decisivo triunfo al presidente Chávez y sus partidarios.

En el año 2005, y con motivo de comicios para seleccionar los Consejos Municipales, el mandatario venezolano llamó a votar por los integrantes del Bloque de Cambio. A este, que se componía de su Movimiento Quinta República así como de los partidos Podemos, Patria Para Todos, Comunista y 20 organizaciones más, se le endilgó el propósito de «crear el socialismo desde abajo». Esa orientación fue reiterada para la contienda del 4 de diciembre, cuyos resultados definieron la composición de la nueva Asamblea Nacional, que tomó posesión a principios de enero de 2006. Como la oposición prefirió retirarse de la lid antes que sufrir otra aplastante derrota, el poder legislativo recién electo quedó compuesto por los partidarios

de una sociedad «rumbo al socialismo». Después se acometió una profunda renovación militar. En su doctrina se articuló una relación efectiva entre elementos regulares y movilizados civiles, a la vez que se recibían modernos medios de defensa rusos para el ejército, la marina y la aviación. Luego el presidente anunció la solicitud de ingreso de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), con el propósito de alterar su esencia fundamentalmente comercial, y viajó a China para establecer una importantísima alianza estratégica.

El 3 de diciembre de 2006, Chávez ganó su reelección con el 62,89% de los votos, tras haber anunciado que la revolución se profundizaría con una mejor distribución de riquezas y la conformación del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV). Este se organizaría con los simpatizantes del proceso de cambios socialistas, mediante un mayor poder popular, una economía favorable al colectivismo y mucha justicia social. Más tarde el parlamento entregó al reelecto presidente, poderes especiales durante 18 meses, concretados en otra Ley Habilitante que lo facultaba para legislar en 11 esferas estratégicas.

Se deseaba agilizar el proceso transformador destinado a establecer la función social de la propiedad, aunque se fomentaran las pequeñas y medianas producciones o servicios al lado de los incrementados bienes estatales, que se multiplicarían debido a las proyectadas nacionalizaciones de las transnacionales en las esferas claves de telecomunicaciones, electricidad y otras. Desde entonces se estatizaron más de 600 propiedades en la industria, el comercio y la banca. En la tierra, unos cuatro millones de hectáreas cultivables pasaron a los campesinos pobres. En el 2007, la dirección política venezolana proyectó consolidar el proceso de transformaciones, al convocar a discu-

siones populares con el objetivo de realizar profundos cambios constitucionales rumbo al «Socialismo del siglo XXI». Estos, primero se tenían que aprobar en el Congreso de la República, y luego ratificar mediante un referéndum nacional.

Más tarde, Chávez realizó una visita a Cuba, donde junto a Fidel Castro se pasó revista al desarrollo de los planes conjuntos acordados en el marco del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). A este acuerdo se sumaron Bolivia y Nicaragua mientras Ecuador, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, y Antigua y Barbuda, anunciaban su intención de hacerlo. El ALBA representaba una flexible plataforma de poder de la nueva izquierda latinoamericana, pues cada miembro tenía su propia forma de gobernar. Luego, Chávez retomó las concepciones de Miranda y Bolívar, y anunció que se aproximaban tiempos de implementar entre nuestras repúblicas alguna Confederación. Con ese impulso, en América Latina se forjó una gran alianza de fuerzas, clases y grupos sociales contra la injerencia extranjera. Ese fue el significado, en 2010, del surgimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que en su segunda conferencia proclamó a la región como zona de paz.

En su campaña electoral de 2012, Hugo Chávez criticó la inseguridad en las calles, y censuró a los burócratas y corruptos enquistados en instancias gubernamentales. Con esos preceptos derrotó en las urnas a Enrique Capriles Radonski, candidato del partido Primero Justicia y gobernador del estado Miranda. Pero meses después de reelecto para su tercer mandato, el carismático presidente —marzo de 2013— murió. Las negativas consecuencias de su fallecimiento se evidenciaron al mes, en los comicios presidenciales realizados para sustituir

a Chávez. En los mismos, Nicolás Maduro —candidato del PSUV y sus aliados en el Gran Polo Patriótico— derrotó con solo el 50,66% del total de votos a su oponente Capriles. Y en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, se produjo el triunfo (56,2%) de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que aglutinaba a casi toda la oposición. En contra del PSUV, además de los tradicionales partidos políticos, se encontraban nuevas organizaciones como: Voluntad Popular (VP), Vente Venezuela (VV), Un Nuevo Tiempo (UNT). Ese resultado colocó en una posición difícil al gobierno, que ya se encontraba afectado por el desplome de los precios del petróleo —a la tercera parte de su cotización tradicional—, con la consiguiente afectación al pago de la deuda externa.

Desde sus inicios, la nueva Asamblea Nacional emitió leyes contrarias al proceso revolucionario, por lo cual el Tribunal Supremo de Justicia declaró que eran inconstitucionales y las anuló. Dicho ente judicial también dictaminó, que la referida instancia legislativa había ilegalmente incorporado a sus deliberaciones a tres diputados de Amazonas —electos con irregularidades—, y suspendió sus funciones al proclamarla en desacato. Entonces la oposición desató manifestaciones, muchas de las cuales se tornaron violentas. Eran las llamadas «guarimbas», que tuvieron un lamentable saldo en bienes materiales destruidos y numerosas víctimas humanas. De estas muertes una de las más horribles fue la incineración —vivo— del joven chavista Orlando Figuera, quien enfrentaba en la calle a los opositores.

En ese contexto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocó a elecciones para conformar una Asamblea Nacional Constituyente, que reformase la Carta Magna vigente y además asumiese las actividades legislativas en tanto la Asamblea

Nacional estuviese suspendida en sus funciones. En dichos comicios la oposición se abstuvo de participar y los candidatos chavistas obtuvieron un rotundo éxito. Este proceso fue criticado por la mayoría de los integrantes del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), a cuya pertenencia o membresía entonces Venezuela definitivamente renunció.

En mayo de 2018, Nicolás Maduro fue reelecto al vencer a los candidatos opositores, en comicios en los que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no participar. Entonces Henri Falcón —exmilitar chavista y exgobernador de Lara—, abandonó la MUD y con su Avanzada Progresista, presentó su candidatura. Así también lo hizo el pastor evangelista Javier Bertucci, aspirante del partido Esperanza por El Cambio. Y Reinaldo Quijada, de Unidad Política Popular.

En su campaña presidencial el aspirante chavista lanzó su propuesta «Misión Eficiencia o Nada», retomando las críticas de su predecesor contra los burócratas y corruptos enquistados en las instancias gubernamentales. También prometió renovar a fondo las estructuras estatales, impulsar los sectores productivos, fortalecer la seguridad ciudadana, y proteger al país de cualquier amenaza o conspiración. Este peligro se materializó cuando Estados Unidos —y varios de sus aliados—, aplicaron sanciones contra funcionarios gubernamentales y empresas —algunas privadas— venezolanas. El gobierno estadounidense inclusive, incautó extrajudicialmente la importantísima distribuidora de gasolina CITGO, subsidiaria norteamericana de PDVSA.

De esa manera se estableció contra esta nación norandina un multifacético bloqueo. A la vez, en el país, la Asamblea Nacional —aún en desacato— declaró fraudulentos los comicios y

proclamó al diputado opositor Juan Guaidó —perteneciente a Voluntad Popular—, como presidente interino de Venezuela. Esta acción ilegítima recibió el apoyo del gobierno estadounidense y de algunos de sus aliados —en especial Colombia—. El reconocimiento diplomático a Guaidó por parte de esos países, no tuvo consecuencia práctica alguna en la vida nacional. Al interior de Venezuela, tanto las fuerzas armadas bolivarianas (FANB) como las autoridades gubernamentales, continuaron desarrollando sus funciones con normalidad, y rechazaron cualquier tipo de provocación.

Por su parte, Guaidó mantuvo sus desplazamientos, mítines y otras actividades por toda Venezuela, sin ningún tipo de limitación gubernamental. Pero al viajar a Colombia, se vinculó —y fotografió— públicamente con miembros del grupo narcotraficante paramilitar «Los Rastrojos». Luego algunos de sus integrantes —en especial Jhon Jairo Durán, segundo al mando de esa organización criminal— fueron capturados por el ejército de Colombia, al cual confesaron la existencia de dicha relación, lo que desprestigió a Guaidó.

En medio de la aguda tensión política existente en Venezuela, el gobierno y destacados integrantes de la oposición acordaron celebrar reuniones conjuntas, para encontrar una salida pacífica a la crisis. En presencia de garantes internacionales, los representantes del PSUV, Cambiemos, MAS, Bandera Roja, Avanzada Progresista, Soluciones y Esperanza por el Cambio, se encontraron en República Dominicana, donde al parecer estuvieron cerca de realizar importantes acuerdos. Pero no se alcanzaron. El proceso luego se reanudó —con la mediación de Noruega— en Barbados. Allí, a pesar del rechazo de Guaidó, los participantes accedieron a establecer una Mesa de Diálogo Permanente en el marco de la Constitución. Final-

mente, a mediados de septiembre de 2019, se anunció la rúbrica de ocho preceptos. Entre estos sobresalían el regreso de los diputados chavistas a la Asamblea Nacional, la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), la liberación de políticos presos por vincularse a conspiraciones o intentos de golpes de Estado. La mayoría de los puntos acordados tuvo rápido cumplimiento —menos el relacionado con la CNE—, y sobre todo impactó la pronta reincorporación del chavismo a las actividades del órgano legislativo. Esto permitió, según establecía la programación constitucional reglamentaria, que el 5 de enero de 2020, dicha Asamblea unicameral eligiera su directiva para el año en curso.

Guaidó y una docena de diputados afines permanecieron en las afueras del Congreso, sin entrar, conscientes de que habían perdido las simpatías de la mayoría de los diputados opositores. Todos los demás entraron al edificio. En la sesión solemne Luis Eduardo Parra, del antichavista partido Primero Justicia, fue electo presidente de la Asamblea Nacional con 81 de los 140 votos emitidos en el Hemiciclo. Como vicepresidente fue seleccionado Franklin Duarte del partido COPEI, cuyo sustituto sería José Gregorio Goyo Noriega, del mismo partido Voluntad Popular, de Guaidó. Este se trasladó entonces a la sede del reaccionario periódico *El Nacional*, donde declaró a un pequeño grupo de seguidores, que había sido víctima de un golpe de Estado y que seguía siendo presidente del parlamento, y en consecuencia, mandatario interino de Venezuela. Después viajó a Estados Unidos, donde fue aclamado por el Congreso y recibido por el mandatario Donald Trump, quien le entregó todos los fondos del gobierno venezolano depositados en los bancos de ese país. Por su parte, la Asamblea Nacional bajo la presidencia de Parra debatió el tema petrolero, el problema de los

salarios y la situación legal de algunos presos. También creó una comisión integrada por diputados de todas las tendencias políticas, para sacar a ese órgano legislativo de su *status* de desacato. Incluso se debatió acerca de un posible proceso electoral para renovar el parlamento, en aras de la paz y estabilidad de la nación.

Brasil y el Partido de los Trabajadores: Lula y Dilma

En Brasil, a finales de 2002, Lula —aliado con otras fuerzas políticas—, ganó la presidencia del «gigante sudamericano». Cuatro años de exitosa gestión lo condujeron a la reelección. Pero la división de la izquierda forzó al Partido de los Trabajadores (PT) a una alianza, además de los comunistas, con el Partido Republicano y otras pequeñas fuerzas más. Y a pesar de ello Lula no ganó en la primera vuelta; debió presentarse a una segunda ronda, de la que emergió triunfador. En las elecciones para sustituirlo en la primera magistratura, el PT propuso a la antigua guerrillera y ministro de Lula, Dilma Rousseff. Ella venció en los comicios presidenciales de 2010, mediante una amplia alianza electoral, y luego de su primer cuatrienio repitió —de la misma forma— el triunfo en las urnas. Pero con una participación minoritaria en el Congreso. La coalición gubernamental se rompió, cuando el escándalo Lava Jato de Petrobras salpicó a sus corruptos aliados del Partido Movimiento Democrático Brasileño, que tenían el control del poder legislativo. Y la presidenta se negó a respaldarlos. Esto condujo a una artimaña legal mediante la cual se acusó a Dilma de «maquillaje de déficit fiscal», y fue depuesta de su cargo en el 2016, sin que se le pudiera probar malversación alguna.

El Frente Amplio en Uruguay

En Uruguay, el Frente Amplio fue creado en 1971, por comunistas, socialistas, demócratas-cristianos, facciones izquierdistas de los partidos «blanco» y «colorado», así como elementos independientes. Veinte años más tarde esa organización política se alió con Encuentro Progresista, coalición dirigida por el Partido Socialista encabezado por Tabaré Vázquez; quien recién había ganado la importantísima Intendencia de Montevideo, ciudad capital que albergaba la mitad de la población y del producto interno bruto del país. Tabaré propuso un programa antioligárquico, antiimperialista e integrador de América Latina, rumbo a un proyecto nacional, popular y democrático. Su esencia radicaba en realizar una efectiva descentralización democrática, la equitativa redistribución de los impuestos y recursos llevada a cabo con verdaderos preceptos de justicia, una profunda reforma del aparato estatal, así como el desarrollo de vastas obras de infraestructura. Todo sintetizado en el lema: «Reconstrucción Nacional para un Uruguay Social y Mejor». Su objetivo era mejorar la vida de las grandes mayorías, pues un tercio de los habitantes vivía en la pobreza y 100 mil en la indigencia. La mitad de las personas carecía de seguridad social, y el 10% de los habitantes no tenían cobertura médica. El salario mínimo solo ascendía a la cuarta parte del existente cuatro décadas atrás, y el 1% de la población —sobre todo jóvenes— emigraba

anualmente. Con ese trasfondo, en los comicios nacionales de 2004, la aún más ensanchada coalición, ahora denominada Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nuevo Espacio, obtuvo el 50,45% de la votación y ganó la presidencia. Cuatro años de éxitos gubernamentales abrieron la vía para la renovada victoria electoral de 2009, que brindó la primera magistratura al legendario extupamaro José *Pepe* Mujica. Y su eficiente gestión al frente del país, permitió que en el 2014, Tabaré regresara a la presidencia del Uruguay. Pero esta eficiente administración del Estado burgués neoliberal no se proponía transitar a otro tipo de sociedad, ni desarrollar una democracia participativa que desarrollase la conciencia social. Por eso no se metamorfoseó la moral ciudadana. Y al permanecer las masas como simples beneficiadas, sus preferencias políticas circunstanciales se mantuvieron volubles. Esto fue lo sucedido en los comicios de 2019, cuando el aspirante del Frente Amplio perdió por estrecho margen —en la segunda vuelta electoral— contra el candidato presidencial de los ahora coaligados partidos Blanco y Colorado.

Evo Morales y el Movimiento al Socialismo en Bolivia

En Bolivia, tras casi dos décadas de regímenes militares, el gobierno del país retornó a los civiles que habían sido auspicados por la revolución de 1952. A 30 años de esta, los viejos politiqueros revirtieron la política económica aplicada por ellos mismos en aquellos tiempos, y acometieron prácticas privatizadoras. Los humildes respondieron mediante la firma de un Pacto Minero-Campesino que aliaba a ambas clases sociales, e incrementaron el cultivo de la coca para poder sobrevivir. Esto, involuntariamente, auspició el narcotráfico y multiplicó el precio de la «hoja sagrada». Los añejos gobernantes del MNR fueron desplazados del poder en 1993, cuando nuevos políticos abrazaron el neoliberalismo y malvendieron el resto de las empresas estatales. Entonces en la región cocalera de El Chapare, surgió la Izquierda Unida, bajo la conducción del aymara Evo Morales Ayma. Este pronto metamorfoseó la organización en el Movimiento al Socialismo –MAS– y enfrentó la mal llamada «guerra contra el narcotráfico» impulsada por Estados Unidos. Prestigiado por sus éxitos, Evo propuso que la mayoritaria población indígena se apartara de la tradicional y corrupta partidocracia vanguardista, sectaria y vertical. Planteaba enrumbarse hacia una sociedad descentralizada, tolerante, flexible, antiestatista y profundamente democrática. Con esto ganó

las simpatías de la población quechua del Altiplano, encabezada por el movimiento Pachacuti, que reclamaban reconstruir el Kollasuyo —con sus comunidades o ayllúes—, bajo su bandera de siete colores a cuadros o wiphala. Dicha alianza —ampliada con otros movimientos sociales— ganó las elecciones de 2005, lo que permitió a Evo ocupar la presidencia. De inmediato se convocó a una Constituyente, aumentaron los salarios mínimos, se incrementó la electrificación rural, culminó la alfabetización, nacionalizó importantes empresas y recursos naturales.

El novedoso Estado Plurinacional de Bolivia clamó por una sociedad intercultural, descentralizada y con autonomías, así como el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno de sus municipios. En su campaña electoral por la reelección, Evo prometió brindar facilidades crediticias a las pequeñas y medianas empresas, e implantar un seguro de salud universal y gratuito para el 60% de la población, que eran los más humildes. Así fue reelecto con dos tercios de los votos para el poder ejecutivo, a la vez que sus partidarios triunfaban en el legislativo con igual apoyo. Pero en el 2016, el MAS perdió —con el 51% de los votos en contra— el referendo que permitiría a Evo reelegirse nuevamente a la presidencia. Eso denotó la creciente fisura en el movimiento indígena entre quechuas y aymaraes, así como las diferencias entre obreros de las minas en el Altiplano y campesinos de la Amazonía. Una manifestación del repunte opositor fue el secuestro y asesinato del viceministro del interior a manos de cooperativistas mineros, que rechazaban el diálogo con el gobierno. También surgió una tendencia «pachamamista» que se oponía al desarrollo de la economía extractivista.

A finales de 2017, el renovado Tribunal Constitucional Plurinacional autorizó la reelección indefinida del presidente, así como la de otras altas autoridades. Y al año, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la candidatura del primer magistrado para los comicios de 2019. Ambas decisiones polarizaron al país y generaron conflictos, en medio de los cuales se celebraron las elecciones generales del 20 de octubre, bajo supervisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocada por el propio gobierno. Aunque Evo no obtuvo la mitad más uno de los votos, el TSE lo declaró vencedor dada la diferencia existente entre el respaldo que había obtenido de los electores con respecto a los demás aspirantes. Pero la OEA declaró que el proceso había estado reñido con las buenas prácticas debido a irregularidades, lo que impulsó incontroladas manifestaciones y desmanes opositores. Entonces el presidente anunció la renovación del Tribunal Supremo Electoral y convocó a nuevas elecciones generales. Pero las Fuerzas Armadas anunciaron que Evo había perdido su confianza, y públicamente le sugirieron su renuncia.

La propuesta fue aceptada por el primer magistrado y su vicemandatario —Álvaro García Linera—, así como por la presidenta del Senado —Adriana Salvatierra— y su sustituto, quienes recibieron asilo político en México. Dos días después, el 12 de noviembre, sin la asistencia de los diputados del MAS y con falta de *quorum* parlamentario, la vicemagistrada segunda del Senado —la opositora Jeanine Áñez— se autoproclamó presidenta interina de Bolivia y convocó a elecciones generales para el 3 de mayo de 2020. El nuevo gobierno de facto fue aceptado por la mayoría de la comunidad internacional y por sectores del país, como una solución temporal a la crisis institucional que polarizaba a Bolivia. Pero casi de inmediato, las

fuerzas armadas desataron una violenta represión contra los partidarios de Evo y el MAS. En especial dichos efectivos atacaron a los aymaraes en sus bastiones de El Alto —vecindad de La Paz— y Cochabamba; en Senkata y Sacaba hubo más de 30 muertos. Mientras, Áñez expulsaba a los diplomáticos de México y España así como rompía relaciones con Venezuela y Cuba, a la vez que se acercaba al Brasil de Jair Bolsonaro. Sin embargo, dada la magnitud de las protestas populares, el gobierno interino tuvo que ceder; aceptó la candidatura de la dupla presidencial que proponía el MAS, encabezada por Luis Arce —prestigioso exministro de economía— acompañado de David Choquehuanca, excanciller de Evo.

El exmandatario, desde su exilio en la contigua Argentina, también logró su inscripción como aspirante al Senado. La esperanza de estos candidatos se basaba, en que frente a ellos se encontraban cinco candidaturas derechistas —incluyendo la de Áñez y un expresidente— enemistadas por ambiciones personales, lo cual brindaba un atisbo de optimismo a la militancia del MAS. Sin embargo en esas turbulentas condiciones políticas, la fecha de las elecciones fue postergada en varias oportunidades.

Las presidencias de la Bachelet y Piñera en Chile

En Chile, la brutal tiranía de Augusto Pinochet cedió el gobierno a una «democracia supervisada» en 1990. Se llamaba así, porque en esta república austral las fuerzas armadas regresaron a sus cuarteles sin desmoralizarse. A pesar de ello, el empuje «civilista» logró que se reformara la Constitución de 1980, lo que eliminó a los senadores vitalicios y la inamovilidad de los jefes castrenses. En el 2006, ganó la presidencia Michelle Bachelet, militante del Partido Socialista e hija de un general asesinado por su fidelidad a Allende. La mandataria prometió combatir el desempleo y la injusta distribución de las riquezas, pero desde el inicio tuvo que enfrentar grandes dificultades sociales, que debilitaron su gabinete. Un ejemplo fue la «Revolución de los Pingüinos» —como se decía a los estudiantes, por su uniforme—, que proyectó a ese grupo contra el gobierno. Luego se produjo la gran huelga obrera en La Escondida —mina privatizada que producía la quinta parte del cobre—, en un conflicto que abrió el camino a todo tipo de reivindicaciones en la sociedad. A partir de ese momento se desataron las protestas de las comunidades mapuches, que exigían la autonomía para La Araucanía. Incluso en el entierro del exdictador afloraron las simpatías que aún le profesaba la alta oficialidad, en discreto entendimiento con los tres bloques eco-

nómicos neooligárquicos, la curia eclesiástica y los políticos de derecha. Esto facilitó la victoria electoral de Sebastián Piñera, dueño de una gigantesca fortuna y caudillo de los tres más grandes grupos económicos del país.

El nuevo presidente mantuvo las exportaciones cupríferas hacia China —ya primer socio comercial de Chile—, pero retrotrajo los principales avances de su predecesora en seguridad social, casas cuna, protección a embarazadas, becas universitarias. El disgusto de la ciudadanía con esas proyecciones conservadoras, permitió que la frágil coalición progresista encabezada por la Bachelet volviera a triunfar en los nuevos comicios generales. Pero las dificultades de antaño resurgieron, ahora agravadas por acusaciones de corrupción contra el gobierno, algunos de cuyos encumbrados políticos fueron señalados de financiamiento irregular en sus campañas electorales. Esos elementos provocaron la derrota del oficialismo en las contiendas municipales de 2016, seguidas por otra victoria presidencial conservadora. En las calles se decía: «Piñera no ganó. Fue la fragmentada izquierda la que perdió».

En el segundo mandato del reelecto oligarca, se perdió en Chile el «oasis de tranquilidad ciudadana» del que se jactaba el presidente. En octubre de 2019 comenzó un espontáneo, masivo y prolongado estallido social, inicialmente provocado por el alza de tarifas en el transporte público de Santiago. Luego las protestas se extendieron a todas las regiones del país, con especial impacto en las ciudades de Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Viña del Mar, Arica, Concepción, Osorno, Puerto Montt, Punta Arenas y La Serena. Primero los estudiantes organizaron actos de evasión generalizada del pago en el Metro. Después se produjeron manifestaciones contra el elevado costo de la energía eléctrica. Más tarde tuvieron lugar quejas públi-

cas contra el desempleo y el cierre de empresas, así como por la corrupción gubernamental y los abusos del poder. Ulteriormente en las calles, junto a los cacerolazos, se oyeron los llamados a terminar con la desigualdad social, a la vez que se exigía otro modelo económico en sustitución del neoliberal. A todo esto siguieron las exigencias de reformar los sistemas de pensiones y salud, así como de establecer la gratuidad en la educación. Finalmente, el malestar ciudadano desembocó en el reclamo de una Constitución Política nueva, mediante la cual se redujeran los astronómicos salarios de los encumbrados funcionarios del Estado; se nacionalizara el agua; se reconociera la autonomía de las comunidades mapuches; se depurara el represivo Cuerpo de Carabineros. Estos, hasta principios del año 2020, ya habían arrestado a unas nueve mil personas, ocasionado la hospitalización de casi cuatro mil y provocado la muerte de 31 civiles, con la excusa de que la policía luchaba contra los desmanes o daños a la propiedad pública y privada.

Ante la incontrolable situación, el desprestigiado Piñera —solo contaba con un 9% de aprobación ciudadana— decretó el estado de emergencia e impuso el toque de queda en múltiples regiones. A su vez, los paralizados o inoperantes partidos políticos, carentes de cualquier protagonismo en los caldeados sucesos, se vieron superados en su accionar por la Central Única de Trabajadores. Esta enarboló el reclamo popular para que se realizara un plebiscito nacional, que aprobara la convocatoria a una Asamblea Constituyente. De esa manera se comenzó a vislumbrar un futuro mejor para Chile.

Reversión de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador

En Ecuador, una Constituyente y elecciones generales devolvieron el gobierno a los civiles, en 1980. Pero durante dos décadas la ingobernabilidad caracterizó al país, ejemplificada en escándalos, trifulcas entre políticos, corrupción, interrupción de mandatos y constantes sucesiones presidenciales. En la república, un 80% de la población vivía en la pobreza y desconfiaba de las instituciones existentes. En ese convulso panorama, Rafael Correa fundó el Movimiento Alianza País –apocopación de Patria Altiva y Soberana–, y anunció sus aspiraciones presidenciales. Pretendía realizar una Revolución Ciudadana inspirada en Bolívar y Eloy Alfaro, rumbo a un «Socialismo del siglo XXI». Prometía favorecer a los más necesitados, poner coto a la riqueza ilimitada, impulsar la educación y la salud, convocar una Constituyente, evacuar la base estadounidense en Manta y defender la intervención del Estado en la economía. Con ese programa ganó las elecciones de 2006 y ocupó la presidencia. Su gobierno fomentó la producción nacional con créditos a las pequeñas y medianas empresas, limitó el pago de la deuda externa, entregó títulos de propiedad a campesinos y tierras baldías a comunidades originarias, elevó el salario mínimo. Tras aprobarse la nueva Constitución, que implantaba un Estado unitario aunque plurinacional, Correa triunfó en las

elecciones de 2009, con amplia mayoría. Entonces la base de Mantua fue evacuada, para transformarse en importante puerto del futuro corredor bioceánico entre el Amazonas y el Pacífico. Se acometió una campaña de alfabetización —en español, quechua y otros idiomas—, se publicó una ley de recursos hidráulicos, se emitieron disposiciones para erradicar la discriminación racial y la exclusión étnica o cultural. Pero todas las propuestas gubernamentales enfrentaban la oposición de demagogos o extremistas, quienes creaban enormes dificultades. Luego de un fallido intento militar en su contra, Correa depuró las instancias involucradas y acometió la transformación del conservador, ineficiente y corrupto sistema judicial. En 2013, se produjo la reelección de Correa, quien prometió nuevas leyes sobre la tierra, las aguas, el código penal, la cultura y los medios de comunicación. Sin embargo, ante el resurgimiento de críticas desestabilizadoras, el presidente tuvo que denunciar las injustificadas pretensiones del partido Pachakutik —integrado por quechuas—, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) —que aglutinaba otras minorías como los Shuar y los Ashuar—, y de lo que llamó «una izquierda infantil». Esta, con su exigencia ultraizquierdista de «todo o nada», esgrimía el «pachamamismo» ecologista, opuesto a las actividades extractivas. Ese lamentable desacuerdo político, unido a peleas entre facciones o cacicazgos en la propia Alianza País, favoreció la pérdida de las elecciones municipales en las tres más importantes ciudades ecuatorianas. Para superar las divisiones, sus partidarios pidieron a Correa que se presentara a otra reelección en 2017, a lo cual se negó. «Es contrario a las tradiciones de gran parte de América Latina», dijo.

Los comicios presidenciales fueron ganados por Lenin Moreno, quien recientemente había sido vicepresidente. El nuevo

mandatario casi de inmediato acusó a su predecesor de autoritario y corrupto — por cohecho —, revirtió parte de los avances logrados — como la Ley contra la Plusvalía —, se distanció de las concepciones del «Socialismo del siglo XXI», y desató una persecución jurídica contra sus antiguos conmlitones. En agosto de 2018, el presidente abandonó el ALBA y poco después se retiró de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), a la que expulsó de su sede en un bello edificio de Quito. Luego solicitó el ingreso del Ecuador en la conservadora y proestadounidense Alianza del Pacífico. Entre las más impopulares medidas del nuevo mandatario estuvieron la flexibilización del Código de Trabajo a favor de los patronos, la reducción de gravámenes a las grandes empresas privadas, la disminución de los acápites sociales en el presupuesto nacional. Al mismo tiempo contrajo un préstamo por diez mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que impuso severas condiciones al Ecuador. Dentro de las medidas de ajuste económico estaban el otorgar mayores facilidades al mercado, liberar los precios de la gasolina y el diesel, disminuir aranceles a muchas importaciones. Las protestas populares no se hicieron esperar. Encabezadas por la CONAIE, a partir del 2 de octubre de 2019, se produjeron grandes manifestaciones indígenas. Estas, que hicieron gala de su desvinculación con la Revolución Ciudadana, se generalizaron sobre todo en Cuenca, Guayas, Montecristi, Jaramijó, Santo Domingo, Ambato, Tungurahua, Cotopaxi, Cayambe, Cañar, Azuay, Loja. Pero fueron tan intensas en Quito, que el presidente decretó el estado de excepción, medida que no detuvo el deterioro de la situación política. La represión policíaca fue brutal, al grado que el 8 de octubre ya había provocado 11 muertos, millar y medio de heridos, con una cifra aún mayor de detenidos. Por temor a que el Palacio

de Carondelet fuese ocupado por sus opositores, Moreno estableció el toque de queda en la capital y trasladó la sede de su gabinete a Guayaquil. En dichas circunstancias, la CONAIE se sintió victoriosa y aceptó negociar con el gobierno. Entonces se acordó derogar el decreto sobre los combustibles y alterar algunas cuestiones menores. Tras el dialogo, el presidente observó con alivio cómo la satisfecha dirigencia indígena clamaba por regresar a la paz social. Una vez retornado Ecuador a la tranquilidad, Moreno informó que se entrevistaría en la Casa Blanca con Donald Trump, para fortalecer las relaciones bilaterales. «Vienen buenas noticias», dijo el mandatario ecuatoriano.

El nuevo sandinismo en Nicaragua

En Nicaragua, luego de tres lustros de gobiernos neoliberales, el sandinismo inició su recuperación cuando su candidato triunfó —2004— en los comicios por la relevante alcaldía de Managua. Después se organizaron algo así como tres coaliciones. Una conformada por el reaccionario Partido Liberal Constitucionalista y sus aliados. Otra, centrista y muy ambigua, llamada Alianza por la República. La tercera, encabezada por el FSLN, se denominó «Gran Unidad Nicaragua Triunfa» y acogía incluso a «excontras». Esa incorporación de algunos antiguos enemigos a la novedosa alianza, provocó en esta agrupación política grandes tensiones internas. Las mismas se agravaron cuando la dirigencia sandinista acometió controvertidas negociaciones con los liberales constitucionalistas. Estas desembocaron en acuerdos que derogaban la ley del aborto, y reducían la pena de encarcelamiento a un expresidente neosomocista.

En discrepancia, una parte de los militantes fundó el Movimiento Renovador Sandinista. Mientras, en el FSLN se producía el ascenso de la tendencia encabezada por Rosario Murillo —esposa de Daniel Ortega—. Ella auspiciaba la reconciliación, el amor a Dios y la paz, con el propósito de borrar los recuerdos del Servicio Militar Obligatorio —durante la cruel guerra interna—, y del simultáneo período de desabastecimiento, vivido por el país en la década de los ochenta.

En el 2006, tras 16 años de neoliberalismo se había triplicado el analfabetismo, gran parte de la población estaba sumida en la pobreza, la insalubridad estaba generalizada, en tanto una ínfima minoría se enriquecía sin cesar. Al triunfar ese año en las elecciones, Daniel Ortega prometió combatir el hambre, la pobreza, las enfermedades y la ignorancia. Al mismo tiempo, dio a conocer la creación con Venezuela de una empresa mixta para solucionar la aguda crisis energética que se padecía. Dicha entidad, además, crearía un enorme complejo petrolero que abastecería a toda América Central. A la vez dejó saber que dos mil nicaragüenses estudiarían medicina en Cuba y se harían completamente públicos los nuevos sistemas de educación y salud. También anunció que se estatizaría el seguro social antes semiprivatizado; se crearía un Banco de Fomento para financiar a pequeños y medianos propietarios en campos y ciudades; se apoyaría el programa de viviendas populares con materiales de construcción.

El avance en la consecución de esos objetivos, permitió que en las elecciones municipales de noviembre de 2008, el FSLN triunfara en 105 alcaldías, frente a 41 de toda la oposición. Con ese respaldo electoral, Ortega volvió a ganar los comicios presidenciales de 2012, con el 62% de los votos emitidos. Entonces anunció que desarrollaría en Nicaragua un socialismo cristiano y solidario, y se acometería la construcción de un gigantesco canal interoceánico en colaboración con una gran empresa de China, lo que dinamizaría la economía. También se restituyó la propiedad comunal sobre las tierras a los pueblos originarios de la Zona Atlántica, ahora acertadamente renombrada Costa Caribe.

En las elecciones generales de noviembre de 2016, el FSLN presentó las candidaturas de Daniel y Rosario para presidente

y vice de la república. Ambos ganaron los comicios al obtener el 73% de los votos, con la abstención de poco más de un cuarto de la población. En el Parlamento su partido obtuvo el 65% de los sufragios válidos. Pero las fuerzas opuestas al sandinismo existían, y con el respaldo de Estados Unidos, esperaban el momento oportuno para desestabilizar al país.

El 18 de abril de 1988, el gobierno sandinista —con el auspicio o asesoramiento del Fondo Monetario Internacional— reformó la ley del seguro social. Su contenido, que no había sido explicado a la ciudadanía, desató fuertes acciones opositoras. Estas inicialmente fueron enfrentadas por manifestaciones pro-gubernamentales. Luego las protestas fueron dispersadas con energía por la policía. Esos violentos choques caldearon aún más los ánimos, hasta que los opositores se atrincheraron en la Universidad Politécnica, tomaron algunas instituciones públicas —como las alcaldías de Tipitapa, Diramba y Jinotepe—, saquearon establecimientos privados como los supermercados Pali y Maxi, quemaron estaciones de radio y hasta de la policía —como la de Matagalpa—, y destruyeron autobuses pertenecientes a cooperativas de transporte. Finalmente los centros ocupados —que los amotinados defendían con morteros caseiros y cocteles molotov—, fueron desalojados por la policía.

Posteriormente el gobierno derogó la polémica disposición y buscó una solución a la crisis por medio de un diálogo nacional. Este, con la mediación de la Iglesia Católica, se realizó con el Consejo Superior de la Empresa Privada, los sindicatos, y el movimiento estudiantil, todos en presencia de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esa instancia —perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA)— dictaminó que hasta entonces el saldo de fallecidos —civiles y militares— era de 264 personas.

Paulatinamente, el país se pacificó mientras las negociaciones avanzaban. Hasta que a mediados de junio se desembocó en un entendimiento, según el cual la referida ley sería reformada, los encarcelados por los acontecimientos violentos serían liberados, y se crearía una Comisión de la Verdad, que esclareciera todo lo sucedido.

El gobierno sandinista inició su contraofensiva política a mediados de julio de 2018, cuando empezaron las actividades conmemorativas por el cuadragésimo aniversario de la insurrección antisomocista en Masaya. Después la Asamblea Nacional realizó una reforma que flexibilizó las inscripciones en el padrón electoral, y emitió una ley de amnistía para los involucrados en las recientes protestas. En contraste, en noviembre, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que declaraba a Nicaragua una «amenaza a la seguridad nacional» de Estados Unidos. Y al mes aprobó la «Nica Act», o ley de condicionalidad para las inversiones extranjeras en ese país, con el propósito de impedir el acceso de esa república a préstamos internacionales. Esto dificultó muchísimo cualquier financiamiento ulterior a la empresa china HKND, ya en dificultades crediticias, lo cual paralizó los trabajos en la ejecución de la proyectada vía acuática. Entonces, Estados Unidos respaldó el rival empeño de «canal seco» interoceánico a través de Honduras, que por medio de supercarreteras uniría el caribeño Puerto Cortés con el Golfo de Fonseca en el océano Pacífico.

A pesar de ese cúmulo de dificultades, el 19 de julio de 2019, Nicaragua celebró los 40 años de la trascendente victoria sandinista, en la perspectiva de alcanzar la reconciliación, paz y esperanzas, ofrecidas por el novedoso proyecto de socialismo cristiano y solidario.

De los dos gobiernos del FMLN al de Nayib Bukele: El Salvador

En El Salvador, tras casi 20 años de ascendente vida política legal, el FMLN propuso como candidato al periodista independiente Mauricio Funes. Este recibió también el apoyo de muchas bases y directivos demócrata-cristianos así como de diversos líderes de Conciliación Nacional, todos opuestos a la alianza electoral de sus respectivos partidos con ARENA. Además Funes recibió las simpatías de la militancia de Cambio Democrático y del FDR.

El aspirante nominado por el FMLN, en sus actividades proselitistas insistía en: alcanzar la unidad nacional y la reconciliación; otorgar créditos a pequeños y medianos empresarios; generar empleos, incorporar los humildes al progreso. Se comprometió asimismo con brindar mayor seguridad a la ciudadanía, que además de atracos y otros males, sufría 4 500 homicidios al año. Esas calamidades alarmaban tanto a las personas, que hasta el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos reconoció que la política represiva gubernamental había fracasado. En el país no se resolvían los gravísimos problemas sociales ni existían las necesarias medidas preventivas contra la delincuencia, cada vez más organizada. Se llegó así al domingo 15 de marzo, cuando se enfrentaron las dos grandes coaliciones políticas, después que la derecha en el poder realizara todo tipo de presiones, desde una desvergon-

zada campaña mediática, atizar los más inverosímiles temores anticomunistas — típicos de la pretérita «Guerra Fría» —, sufrir la nación el retiro de 14 empresas maquiladoras — en tanto que amenaza anticipada de lo que decían podría suceder si ganaba la izquierda —, falsas acusaciones de vínculos con el narcotráfico, declaraciones amedrentantes de los últimos cuatro presidentes acerca del futuro del país.

Las simpatías engendradas por Funes y su aspirante a la vicepresidencia — el prestigioso excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén — vencieron todos los obstáculos. En un ambiente tranquilo y de inusual participación masiva, el 60% de los cuatro millones y cuarto de salvadoreños susceptibles de elegir, acudieron a las urnas a depositar su voto. El resultado fue aplastante, pues el 51,3% de los electores optó por el candidato del FMLN. El nuevo gobierno revolucionario estableció relaciones diplomáticas con Cuba; dispuso que el siguiente curso escolar comenzara con total gratuidad para todos los alumnos; eliminó cualquier pago en los hospitales públicos; anunció una reforma impositiva para contrarrestar la evasión tributaria y aumentar gravámenes a los más ricos; otorgó respaldo financiero para construir viviendas populares; creó 65 nuevos grupos de patrullaje para combatir la delincuencia organizada en las llamadas «maras»; elaboró un programa de alfabetización, entregó pensiones para los veteranos de la guerra civil, fuesen estos antiguos militares o guerrilleros.

Pero a los dos años Funes tuvo que reducir las aspiraciones gubernamentales, pues la capacidad financiera de que disponía no alcanzaba para sufragar tantos gastos; el Congreso — con fuerte presencia opositora — no autorizaba la totalidad de fondos necesarios para lograr las metas trazadas. Entonces el gobierno tuvo que emitir un Plan de Austeridad, que redujo el

desembolso público y postergó para el siguiente período presidencial muchos de los anhelos del FMLN.

Salvador Sánchez Cerén ganó las elecciones para la primera magistratura en el 2014, pero con un Congreso sin mayoría de diputados afines. Sus principales retos eran disminuir la violencia —la mayor en el mundo— y la pobreza, pues a El Salvador se le consideraba la tercera república más pobre de América Latina. Esto, a pesar de que al país afluían casi ocho mil millones de dólares anuales en remesas, lo cual convirtió a la banca salvadoreña en la mayor de América Central. Pero debido a la inseguridad y falta de perspectivas económicas, dichos capitales no se invertían en el propio país sino en los Estados colindantes de esa región ístmica.

Con la delincuencia, el presidente aplicó la política de «manodurismo», lo cual permitió disminuir a nueve los asesinatos diarios, la mitad de la cifra precedente, pero no pudo evitar el creciente dominio de las «Maras» sobre barrios y colonias enteras. También redujo el índice de pobreza hasta solo el 30% de la población. Pero el rechazo del Congreso a mayores desequilibrios fiscales obligó a Sánchez Cerén a establecer nuevos impuestos y suprimir los subsidios al gas propano y al agua, lo cual incidió negativamente en las simpatías de la población.

Esa difícil situación económica del país provocó serias disputas al interior del FMLN, pues había quienes insistían en la necesidad de realizar alianzas en el poder legislativo para desbloquear los fondos presupuestales requeridos. Esas y otras discrepancias provocaron la expulsión en octubre de 2017, de Nayib Bukele, joven que militaba en ese partido al ser electo como alcalde de San Salvador, la capital del país.

Bukele fundó el Movimiento Nuevas Ideas (MNI), al recolectar 200 000 firmas en breve tiempo. Pero el período de ins-

cripción partidista para las nuevas elecciones presidenciales ya había terminado, por lo cual se alió con Gran Alianza por la Unidad Nacional (GAN). Esta organización, escisión de ARENA, había sido creada ocho años atrás por el expresidente Sacas, condenado después a diez años de cárcel, por corrupción.

El ahora candidato de GANA, con el lema antisistémico de «Ni ARENA ni FMLN, nunca más», se propuso romper el bipartidismo «de facto» existente en El Salvador hacía tres décadas. Decía representar a la «juventud del milenio», como se autodenominaban los jóvenes que habían comenzado su participación activa en la sociedad con el cambio de siglo, y no habían vivido el conflicto armado ni los difíciles años de post-guerra. Bukele desarrollaba discursos populistas ambiguos, aunque proestadounidenses, en los cuales acusaba a todos sus predecesores de malversadores, corruptos y nepotistas. Dichas críticas atraían a los descontentos, pues prometía gobernar con todos y crear una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción. Esos flagelos, junto a la violencia, eran considerados por muchos como endémicos de esa sociedad, cuyos males se agravaban por la falta de empleo y la escasa inversión de capitales.

Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales de febrero de 2019, con el 53% de los votos emitidos por la mitad de la población que acudió a las urnas. Su triunfo, al parecer, se debió al buen empleo de las redes sociales de comunicación, y al carisma que le atribuyen sus simpatizantes. Queda por ver sus posibilidades de gobernar con eficiencia —como prometió—, ante un Congreso hostil compuesto en un 49% por ARENA y sus asociados del PCN y el PDC, así como por un 23% de diputados del FMLN. Solo la décima parte de los congresistas está integrada por militantes de GANA, procediesen estos del MNI o fuesen de vieja filiación.

Pugnas entre la guerra y la paz en Colombia

Cesar Gaviria, nuevo presidente de Colombia desde fines de 1990, mostró mayor flexibilidad en las negociaciones con la insurgencia e hizo suyas algunas de sus reivindicaciones, al aceptar una veeduría internacional, contactos directos con los alzados, y una Comisión de Notables que elaborase una agenda de trabajo. Pero esas acciones no detuvieron el incremento de los combates. El diálogo entre ambas partes comenzó en Caracas en junio de 1991, con un problema de fondo: ¿se conversaba para la desmovilización de la guerrilla o para encontrar soluciones a la crisis nacional? Aunque la balanza se inclinó hacia lo segundo, los temas del cese al fuego y la delimitación del territorio para la ubicación de los rebeldes durante los debates, se convirtieron en lo fundamental.

En marzo de 1992, los encuentros se trasladaron para Tlaxcala (México), pero allí el gobierno cambió su agenda de la situación económica a los derechos humanos, lo cual estancó el entendimiento. Luego el presidente declaró la «guerra integral» a los insurrectos y ordenó la captura de sus representantes en las negociaciones, alegando que los guerrilleros se encontraban vinculados a los narcotraficantes. La CGSB respondió a fines de año con argumentos que legitimaban su lucha y subrayaban el carácter político de la misma, negando cualquier rasgo delin cuencial a sus integrantes.

La unidad de los revolucionarios, no obstante, se deterioraba, pues tanto en el seno del ELN como de las FARC se desarrollaban estrategias de lucha divergentes. Así, la CGSB dejó de existir, lo cual fue tomado por el gobierno como señal de que se podría alcanzar una victoria militar. Esto ocasionó que la AD-M-19 se distanciara del oficialismo, mientras las FARC convocaban a su Octava Conferencia Guerrillera en 1993. En ella se acordó el cese de los vínculos con el Partido Comunista de Colombia, y se propuso la formación de un gobierno de reconciliación que debería alcanzar la paz y llevar a cabo las reformas necesitadas por el país. El ELN, por su parte, anunció que jamás se rendiría y reiteraba sus reclamos de paz y justicia social.

Ernesto Samper asumió la presidencia en 1994, con una posición muy debilitada, al ser acusado de recibir fondos del narcotráfico para su campaña electoral. Poco después las FARC dejaron saber que reiniciarían las negociaciones de paz, si el gobierno retiraba sus tropas del municipio de La Uribe (en Meta) y desarmaba a los grupos paramilitares. El presidente accedió parcialmente a lo primero y negó que la guerrilla fuese una banda de traficantes, a la vez que aceptaba lo establecido en el Convenio de Ginebra para humanizar la guerra. Pero el ejército rehusó replegarse, ni siquiera de las áreas rurales, como Samper prometiera. Entonces los combates se reanudaron con mayor crudeza, los cuales en su mayoría terminaron con victorias rebeldes. En año y medio las FARC capturaron nueve bases gubernamentales y extendieron sus acciones a casi todo el territorio colombiano. Hasta el ejército debió aceptar retirarse del Caguán, a cambio de que los insurrectos liberasen a los numerosos militares capturados en sus grandes y fracasadas ofensivas. En contraste, a principios de 1998, el ELN buscó presionar

al débil presidente para que se convocara a una Convención Nacional con una participación activa y directa de la sociedad civil.

En la siguiente campaña electoral, a pesar de la furiosa oposición de la derecha y de las fuerzas armadas, los candidatos presidenciales tendieron puentes hacia los insurgentes; en especial el conservador Andrés Pastrana, quien prometió retirar al ejército de cinco municipios y entrevistarse directamente con Manuel Marulanda, líder histórico de las FARC. Tras su victoria electoral, el nuevo presidente cumplió su palabra y sentó las bases para acometer nuevas negociaciones. El diálogo se reanudó en enero de 1999, y cobró impulso después de un par de reuniones entre Pastrana y Marulanda. Ambas partes acordaron dialogar sobre un cese al fuego, la política económica, el desempleo, los derechos humanos, las cosechas ilegales y sus alternativas, así como acerca de las reformas agraria, militar y política.

Sin embargo, el presidente también viajó a Estados Unidos en demanda de «ayuda para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado». Surgió entonces el Plan Colombia, que implicaba un mayor involucramiento estadounidense contra las guerrillas, crecientemente acusadas de ser terroristas y agentes del narcotráfico internacional.

En ese desalentador contexto se convocaron a elecciones generales para el año 2002, ganadas por el derechista Álvaro Uribe. Este contravino la tradicional política negociadora de sus predecesores, al iniciar una violenta escalada bélica contra la guerrilla. En consecuencia, su gobierno menospreció el diálogo con la FARC y el ELN, cuyos efectivos en conjunto sobrepasaban los 20 000 insurgentes. En ese complejo contexto, en la

oposición electoral, además de conservadores y grupos liberales empezó a conformarse una tendencia centro izquierdista. Era la del llamado Polo Democrático Alternativo, que atrajo a la cuarta parte de los votantes, durante el proceso de reelección presidencial de Uribe en 2006.

Poco después el gobierno, carente de importantes éxitos contra los rebeldes, bombardeó un territorio ecuatoriano situado a 10 kilómetros de la frontera. Allí se encontraban 20 dirigentes de las FARC para negociaciones con representantes de los gobiernos de Francia, Venezuela y Suiza. Estaban reunidos por razones humanitarias para analizar la posible liberación de figuras políticas retenidas por los guerrilleros en Colombia. A pesar del ataque, en el 45 aniversario de su fundación, las FARC pusieron en libertad a todos los mencionados civiles. Y nuevamente propusieron el intercambio de combatientes que estuviesen prisioneros en ambos bandos, en busca de una solución negociada al conflicto armado. Pero Uribe no aceptó el canje.

A ese desalentador panorama se añadían, el crecimiento de los asesinatos extrajudiciales y la multiplicación del narcotráfico, cuya producción en diez años se había triplicado hasta llegar a la astronómica cifra de 640 toneladas anuales. Se firmó entonces un nuevo y belicista acuerdo con Estados Unidos, al que se concedieron facilidades para utilizar siete importantes bases militares colombianas con la excusa de combatir el narcotráfico y el terrorismo. Este acuerdo tenía por objetivo involucrar al imperialismo en el prolongadísimo conflicto interno pues el ejército de Colombia no había podido ganarlo, a pesar de que sus efectivos —400 000 soldados— eran los mayores de América Latina.

En 2010, Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Uribe, fue electo a la presidencia de Colombia. Ante la imposibilidad de encontrar una solución armada a la guerra que sufría el país, el mandatario estableció negociaciones secretas con los insurgentes de las FARC. En agosto de 2012, se informó al mundo los seis puntos acordados para abordar públicamente los diálogos de paz. Estos eran: Tenencia de la tierra; Participación política; Fin del conflicto; Drogas; Víctimas de las hostilidades; Jurisdicción Especial para la Paz. Finalmente, el 23 de agosto de 2016, se dio a conocer la totalidad de los preacuerdos. Este documento, que debía ser refrendado mediante plebiscito popular, fue rechazado por los electores. En parte se debió al elevado número de abstenciones, pues más del 60% de los posibles votantes no acudió a las urnas. Entonces ambas partes tuvieron que renegociar, e incorporar el 80% de las modificaciones propuestas por los discrepantes en cuestiones de género, elegibilidad política, y justicia. El nuevo texto, presentado en esta oportunidad al Congreso de la República, fue aprobado por las dos Cámaras a pesar de que del cónclave se ausentó el Centro Democrático, partido del exmandatario Uribe.

En las elecciones presidenciales de 2018, triunfó el «uribista» Iván Duque, quien siempre se había manifestado en contra de los acuerdos de paz. Desde el inicio de su gestión todo el proceso fue obstaculizado al máximo. Empezó por suspender las negociaciones con el ELN, con la excusa del ataque perpetrado por dicha organización —mediante un coche bomba— contra la Escuela de la Policía, que ocasionó la muerte de 23 cadetes. Luego detuvo el programa de restitución de tierras. Después paralizó la sustitución de cultivos ilícitos. Toleró que resurgieran las bandas delincuenciales vinculadas con el narcotráfico. Promovió o permitió el asesinato de guerrilleros que habían

entregado las armas. También, y casi con total impunidad, se ha perseguido y dado muerte a dirigentes políticos o sociales de los movimientos comuneros. Asimismo, cesó la lucha contra las desigualdades y la corrupción. A la vez, se incrementó la crisis del sistema judicial, en especial en lo concerniente a la Jurisdicción Especial para la Paz. De esa manera, el gobierno de Duque diseñó un futuro muy incierto para Colombia, donde se violaba lo establecido para el logro de la paz.

Extraordinaria victoria electoral de López Obrador con MORENA en México

La alentadora posibilidad de nuevos triunfos populares en las urnas se evidenció en México durante el 2018, cuando en los comicios generales tuvo lugar el trascendente triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este arrolladoramente venció con su novedoso Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), que había creado en 2011, tras sufrir dos fraudes en los precedentes comicios presidenciales. En su campaña electoral, AMLO adelantó un Proyecto Alternativo de Nación, que planteaba un cambio completo de régimen político y modelo económico. Esto implicaba la Cuarta Transformación de la vida pública en México, —como heredera de las realizadas con la Independencia, la Reforma y la Revolución—, y sintetizada en el lema: «¡Por el bien de todos, primero los pobres!». En dicho empeño López Obrador tenía por principal aliado al Partido del Trabajo, encabezado por un veterano del importantísimo movimiento estudiantil de 1968, el ahora profesor Alberto Anaya. Este, en 2013 ya había publicado su notable libro *Por una Cuarta República*, que realiza una certera crítica a la fallida experiencia soviética, y en el cual propuso para México un socialismo moderno para el siglo XXI. El mismo —dice su autor— debe ser democrático, popular y con énfasis en una moral revolucionaria, que guie la conducta —pensa-

miento y acción— de los sujetos transformadores de la sociedad. Entre las promesas realizadas por la victoriosa alianza partidista MORENA-PT, se encuentran: la creación de la Guardia Nacional, para enfrentar la inseguridad y violencia padecidas por la población, debido a la inoperancia de las fuerzas policiales; acabar con la corrupción y la impunidad; abolir fueros y privilegios; fortalecer el mercado interno e impulsar un desarrollo económico sustentable; rescatar a los campesinos de su abandono y pobreza; establecer un estado de bienestar que además impulse la construcción de viviendas de interés social; asegurar para todos una educación pública, gratuita y de calidad; garantizar el derecho del pueblo a la salud; priorizar la cultura y el deporte; combatir la pobreza y la descomposición social con observancia de los derechos humanos; recuperar la soberanía energética; retornar en política exterior a la Doctrina Estrada, que significa respeto a la autodeterminación de los pueblos. Todo guiado por los principios de «No mentir, no robar, no traicionar». Así, perspectivas alentadoras se diseñaron para el futuro de México.

Epílogo

En América Latina, la política de los proclives al «Socialismo del siglo XXI» enfrentó a los elementos más retardatarios o derechistas de la sociedad, a través de una alianza social o electoral interclasista, conformada por quienes estuviesen deseosos de empujar en el sentido de los cambios. Pretendían así sustituir la vieja sociedad por otra nueva, mediante un proceso — más o menos largo— de transición. En este se debería transformar el derecho y consecuentemente las formas de propiedad, el sistema económico, las relaciones sociales y la cultura. Igualmente sucedería con la moral, siempre que el cambio fuese anhelado, para mutar lo viejo en nuevo.

De esa manera el ciclo revolucionario hacia el nuevo socialismo avanzó, mientras las vanguardias interpretaron correctamente la idiosincrasia o costumbres y aspiraciones socioeconómicas de la mayoría de la población, pues la actividad de los seres humanos es determinada por su conciencia. Y las amplias masas metamorfosearon su moral, cuando participaron activamente en los deseados cambios de la sociedad. Pero donde permanecieron pasivas en la consecución de esas transformaciones — solo como simples espectadoras beneficiadas—, su conciencia no se alteró. Entonces sus simpatías o preferencias políticas se mantuvieron volubles, lo que permitió la regresión.

Los empeños revolucionarios, diversos y múltiples — armados o electorales— también retrocedieron cuando no se tejieron

o deshicieron las alianzas necesarias. Asimismo sucedió cuando no se comprendieron suficientemente las tradiciones, o los anhelos en evolución de la ciudadanía. Pero ese retroceso puede ser revertido en cualquier momento, con disposiciones acorde con la realidad objetiva y subjetiva de cada país. Las vanguardias asimismo deben hacer énfasis en la lucha contra la corrupción, y desarrollar en la población una ideología revolucionaria, que la comprometa políticamente y le impida incurrir en la indiferencia o la abstención.

En síntesis, como demuestra la experiencia de América Latina —y el mundo—, la construcción del socialismo requiere tener en cuenta las condiciones específicas de cada país, y estar conscientes de que dicho proceso no se produce de forma lineal y ascendente. En ese devenir hay flujos y reflujos, con dificultades como sectarismo, burocratismo, autoritarismo, voluntarismo y paternalismo. Para evitar dichos males resulta necesario establecer el control popular sobre los funcionarios y las relaciones de poder. El socialismo, que no tiene un modelo generalizado, debe ser superior al capitalismo en eficiencia y racionalidad económica, con mejor justicia social, mayor democracia y participación social, así como gran desarrollo cultural.

Su base social no debe ser solo el proletariado, sino una convergencia de clases y grupos sociales. Por eso se requiere un programa cuya estrategia de alianzas sea la más amplia posible, con proyecciones alternativas al neoliberalismo para acumular fuerzas y defender la soberanía nacional, con mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores y demás sectores populares. En ese proceso, y sin convertirse en buenos gestores del Estado burgués neoliberal, las fuerzas en el poder deben aprovechar el aparato estatal para mejorar las condiciones materiales del pueblo. Por ello, se necesita fortalecer las capacidades distributivas

y reguladoras del Estado con el propósito de transitar de un Estado neoliberal a otro, que sea social.

En el Estado socialista se debe defender lo nacional contra la oligarquía asociada al capital transnacional. Esto, mediante una democracia participativa que desarrolle la conciencia social y luche contra la impunidad. Entonces se promovería el aparato productivo nacional, con crecimiento económico acompañado de empleos dignamente remunerados, y el mantenimiento de cuestiones vitales para la población como alimentación, salud, educación, vivienda. Con ese objetivo, el partido debe ser el instrumento político que oriente y promueva las propuestas e iniciativas de las masas, como ha sucedido en Cuba en el proceso que desembocó en la Constitución de 2019, aprobada por referéndum. Dicho texto establece que, Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano. La nueva Carta Magna reconoce distintas formas de propiedad: socialista de todo el pueblo; cooperativa; de las organizaciones políticas, de masas y sociales; privada sobre determinados medios de producción; mixta; y personal. El Estado reconoce, respeta y garantiza a todas las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. De esa forma se pretende garantizar un socialismo próspero y sostenible, lo que implica el progreso hacia una sociedad superior.

Bibliografía

GUERRA, SERGIO: *Los artesanos y la revolución latinoamericana: Colombia: 1849-1854*, Universidad Central, Santa Fé de Bogotá, 2000.

GUERRA, SERGIO Y ALBERTO PRIETO: *Cronología del movimiento obrero y de las luchas por la revolución socialista en América Latina (1850-1916)*, Casa de las Américas, La Habana, 1979.

_____ : *Cronología del movimiento obrero y de las luchas por la revolución socialista en América Latina y el Caribe (1917-1939)*, Casa de las Américas, La Habana, 1980.

GUERRA, SERGIO; ALBERTO PRIETO Y OMAR DÍAZ DE ARCE: *Crónicas latinoamericanas. La región surandina: Chile, Perú, Bolivia*, Casa de las Américas, La Habana, 1977.

PRIETO, ALBERTO; Y SERGIO GUERRA: *Breve Historia del Brasil*, Editora Política, La Habana, 1991.

PRIETO, ALBERTO: *La época de Juárez*, Editorial Gente Nueva, La Habana, 1984.

_____ : *El Movimiento de Liberación Contemporáneo en América Latina*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1985.

_____ : *Apuntes para la historia económica de América Latina*, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1986.

_____ : *Centroamérica en Revolución*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1987.

- _____ : *Las Guerrillas Contemporáneas en América Latina*, Editorial Ocean Sur, 2007.
- _____ : *Ideología, Economía y Política en América Latina, Siglos XIX y XX*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2005.
- _____ : *La Burguesía Contemporánea en América Latina*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1983.
- _____ : *Procesos Revolucionarios en América Latina*, Editorial Ocean Sur, 2009.
- _____ : *Evolución de América Latina Contemporánea*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2009.
- _____ : *Visión Íntegra de América en 3 tomos*. Editorial Ocean Sur, 2013.
- _____ : *Los países norandinos: Colombia, Ecuador y Venezuela*, Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 2013.
- _____ : *Los países del Río de la Plata: Argentina, Paraguay, Uruguay*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2014.
- _____ : *América Latina: Transiciones, integración y socialismo*, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2016.
- _____ : *Fidel Castro y la Revolución*, Editorial Ocean Sur, 2016.
- _____ : *El Gran Caribe*, Editorial UH, La Habana, 2018.



ocean sur

una editorial latinoamericana
www.oceansur.com • info@oceansur.com

Ocean Sur es una casa editorial latinoamericana que ofrece a sus lectores las voces del pensamiento revolucionario de América Latina de todos los tiempos. Inspirada en la diversidad étnica, cultural y de género, las luchas por la soberanía nacional y el espíritu antiimperialista, desarrolla múltiples líneas editoriales que divulgan las reivindicaciones y los proyectos de transformación social de Nuestra América.

Nuestro catálogo de publicaciones abarca textos sobre la teoría política y filosófica de la izquierda, la historia de nuestros pueblos, la trayectoria de los movimientos sociales y la coyuntura política internacional.

El público lector puede acceder a un amplio repertorio de libros y folletos que forman parte de colecciones como Che Guevara, Fidel Castro, Revolución Cubana, Nuestra América, Cultura y Revolución, Roque Dalton, Vidas Rebeldes, Historias desde abajo, Pensamiento Socialista, Biblioteca Marxista y El Octubre Rojo, que promueven el debate de ideas como paradigma emancipador de la humanidad.

Ocean Sur es un lugar de encuentros.

LAS LUCHAS POR EL SOCIALISMO EN AMÉRICA LATINA

La experiencia de América Latina demuestra que en la construcción del socialismo deben tenerse en cuenta las condiciones específicas de cada país, y estar conscientes de que dicho proceso no se produce de forma lineal y ascendente. Bajo esta máxima, Alberto Prieto Rozos realiza un acercamiento a los procesos fundamentales que tuvieron —y tienen— lugar en América Latina relacionados a la búsqueda de un sistema social más justo.

Un certero análisis que incluye países latinoamericanos y caribeños; que examina sus particularidades, avances y retrocesos y evidencia la influencia de procesos históricos de gran trascendencia para la región como el triunfo de la Revolución Cubana.

